

REPUBLICA ARGENTINA

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
DIARIO DE SESIONES

42ª REUNION --- 9ª SESION EXTRAORDINARIA (Especial) --- 16 DE FEBRERO DE 1991

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,

y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor **JORGE D. SOLANA**

Secretarios: señores **HUGO RAÚL FLOMBAUM** y **ANGEL LEÓNIDAS ABASTO**

Prosecretarios: señores **MARIO DÉLFOR FASSI** y **DONALDO ANTONIO DIB**

FUNCIONARIOS INVITADOS:

Señor ministro de Economía,
doctor **DOMINGO CAVALLO**

Señor subsecretario de Finanzas Públicas,
doctor **CARLOS MIGUEL TACCHI**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AMOEDO, Julio A.
BENITEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Femo J.
FIGUEROA, José O.
GASS, Adolfo
GROSSO, Edgardo R. M.
GURDULICH de **CORREA**, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LUDUEÑA, Felipe
MARIN, Rubén H.
MENEM, Eduardo

MOLINA, Pedro E.
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de **DENTONE**, Alicia A.
SANCHEZ, Libardo N.
SAPAC, Elías
SNOPEK, Carlos
SOLANA, Jorge D.
TOMÁS, Emilio J. J.
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.

AUSENTES, CON AVISO:

BRASESCO, Luis A. J.
GENOUD, Jose
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César
MALHARRO de **TORRES**, Margarita
MAZZUCCO, Faustino M.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Contrado H.
VELAZQUEZ, Héctor J.

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por Jujuy escribano Alfredo L. Benítez procede al izamiento del pabellón nacional en el mástil del recinto. (Pág. 5352.)
2. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre reforma impositiva (C.D.-211/90). Se aprueba. (Página 5352.)
3. Apéndice:
 - I Sanción del Honorable Senado. (Pág. 5402.)
 - II. Inserción. (Pág. 5402.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 36 del sábado 16 de febrero de 1991:

Sr. Presidente (Menem). — Queda abierta la sesión especial.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por Jujuy escribano Alfredo L. Benítez a izar el pabellón nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Alfredo L. Benítez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

REFORMA IMPOSITIVA

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley en revisión de reforma impositiva, a la nota presentada por varios señores senadores para la realización de esta sesión especial para la consideración del citado proyecto de ley y a la respectiva resolución dictada por esta Presidencia.

Sr. Secretario (Flombaum). — (Lee)

Buenos Aires, 15 de febrero de 1991.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Título I

Modificación del impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operatorias

Artículo 1º — Modifícase el título II de la ley 23.760, de la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 24 la alícuota del tres por mil (3%) por la del doce por mil (12%).
2. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 24 la alícuota del uno por mil (1%) por la del dos por mil (2%).
3. Elimínase en el inciso d) del artículo 24 la expresión: "...con precios oficiales de venta".
4. Incorporáse en el inciso f) del artículo 24, a continuación de: "...agentes de bolsa registrados como tales en las bolsas o mercados de valores" la expresión "Caja de Valores y Mercados de Valores".
5. Incorporáse a continuación del artículo 27, el siguiente:

Artículo ... — Los contribuyentes del impuesto creado por este título podrán computar como crédito de impuestos, el setenta y cinco por ciento (75 %) de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción a la tasa general el cincuenta por ciento (50 %) de los liquidados y percibidos a la alícuota prevista en el segundo párrafo del artículo 24.

La acreditación de dicho importe se efectuará en un cincuenta por ciento (50 %) contra el impuesto a las ganancias, y un cincuenta por ciento (50 %) contra el impuesto al valor agregado, o contra el gravamen sobre los servicios financieros en el caso de las entidades alcanzadas por este tributo.

Los contribuyentes que no resulten responsables del impuesto al valor agregado por efectuar exclusivamente operaciones exentas o no alcanzadas por el gravamen, podrán computar la totalidad del crédito contra el impuesto a las ganancias.

Los contribuyentes exentos del impuesto a las ganancias pueden utilizar la totalidad del crédito contra el impuesto al valor agregado, al final del ejercicio fiscal respectivo.

El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, o sus anticipos, actualizado de conformidad a las normas del artículo 34 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las declaraciones juradas anuales del impuesto al valor agregado. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo sólo trasladarse, debidamente ac-

tualizado, hasta su agotamiento, a otros ejercicios fiscales del mismo impuesto en el cual se efectuó la acreditación.

Cuando se trate de crédito de impuesto a las ganancias, correspondiente a los sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley de dicho impuesto corresponderá atribuir dicho crédito a cada uno de los socios o asociados o partícipes en la misma proporción en que participen de los resultados impositivos de aquéllos.

No obstante, la imputación sólo procederá hasta el importe del incremento de la obligación fiscal producida por la incorporación en la declaración jurada individual de las ganancias de la entidad que origina el crédito, hasta el límite del impuesto a las ganancias determinado en el ejercicio que corresponda atribuirlo.

En todos los casos, el importe computable estará referido al impuesto tributado en el ejercicio fiscal al que corresponda la declaración jurada en la que se produzca el cómputo.

Cuando el crédito de impuesto previsto en los párrafos anteriores más el importe de los anticipos determinados para el impuesto a las ganancias, calculados conforme a las normas respectivas, superen la obligación estimada del período para dicho impuesto, el contribuyente podrá reducir total o parcialmente el importe a pagar en concepto de anticipos.

El importe del impuesto computado como crédito en los impuestos mencionados en el segundo párrafo no será deducido a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias.

Título II

Modificación del impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas

Art. 2º—Modifícase la ley de impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

Artículo 3º: El impuesto establecido en el artículo 1º será aplicado sobre el precio de la operación en moneda argentina, neto de las comisiones y gastos facturados por las entidades autorizadas, siempre que dichos rubros fueran facturados y contabilizados por separado.

La tasa del impuesto aplicable será del seis por mil (6‰) tanto para las operaciones de compra como para las de venta de divisas de tales entidades.

Las operaciones de compraventa de cambio extranjero que se liquiden por compensación exacta o por diferencia de cambio serán consideradas, a los fines de la aplicación de lo dispuesto en

los párrafos precedentes, como operaciones simultáneas de compra y de venta de divisas.

En las anulaciones de operaciones de compra o de venta de moneda extranjera se abonarán los impuestos que correspondan a la nueva operación que se origine con motivo de dicha anulación.

La tasa del impuesto se reducirá al cuatro por mil (4‰) para las operaciones vinculadas con el comercio exterior (importación, exportación y sus correspondientes financiaciones).

2. Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:

Artículo 4º: Las "operaciones de pase", siempre que las partes que intervengan en las operaciones sean las mismas, quedan sujetas a un impuesto del dos por mil (2‰) por mes o fracción.

3. Derógase el artículo incorporado a continuación del artículo 5º por la ley 23.371.

4. Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º: El producido total de este impuesto tendrá igual destino que el previsto en el segundo artículo incorporado por la ley 23.549 a continuación del artículo 51 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, según texto vigente al 21 de diciembre de 1990, en las mismas condiciones que en el aludido artículo se establecen.

Título III

Modificación del impuesto de sellos

Art. 3º—Incorpórase al artículo 59 de la Ley de Impuesto de Sellos, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, el siguiente inciso:

- r) Los documentos que instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, incluso letras provisionales y toda otra documentación exigida por el Banco Central de la República Argentina o por la institución que lo reemplace en la operatoria al efecto, para financiaciones de operaciones de importación y/o exportación.

Título IV

Modificación del impuesto sobre los activos

Art. 4º—Modifícase el título I de la ley 23.760, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese en el cuarto párrafo del apartado ..., inciso b) del artículo 4º, el porcentaje del veinticinco por ciento (25 %) por el porcentaje del cincuenta por ciento (50 %).

2. Incorpórase en el quinto párrafo del apartado ..., inciso b) del artículo 4º, a continuación de la expresión "...no podrá ser inferior al...", la expresión "...setenta y cinco por ciento (75 %)".

3. Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º: Las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, las compañías de seguro sometidas a control de la Superintendencia de Seguros y los consignatarios de haciendas, frutos y productos del país considerarán como base imponible del gravamen el cuarenta por ciento (40 %) del valor de sus activos gravados de acuerdo con los artículos precedentes.

En el caso de los consignatarios de hacienda, frutos y productos del país el porcentaje referido en el párrafo anterior, sólo será de aplicación a los activos afectados en forma exclusiva, a la actividad de consignación.

4. Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

Artículo 10: El impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del dos por ciento (2 %) sobre la base imponible del gravamen determinado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquide el presente gravamen, podrá computarse como pago a cuenta del impuesto sobre los activos.

Los contribuyentes comprendidos en el inciso b) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, podrán computar como pago a cuenta del presente gravamen sólo hasta el veinte por ciento (20 %) de la ganancia neta imponible.

En el caso de sujetos pasivos de este gravamen que no lo fueren del impuesto a las ganancias, el cómputo como pago a cuenta previsto, se calculará computando el veinte por ciento (20 %) sobre la utilidad impositiva a atribuir a los partícipes.

Si del cómputo previsto en los párrafos anteriores surgiere un excedente no absorbido, el mismo no generará saldo a favor del contribuyente en este impuesto, ni será susceptible de devolución o compensación alguna.

5. — Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente:

Artículo 17: El producido del cincuenta por ciento (50 %) del presente gravamen se distribuirá exclusivamente entre las provincias sobre la base de las proporciones previstas en el artículo 3º, inciso c), y artículo 4º de la ley 23.548, a cuyo efecto deberán adecuarse los porcentajes detallados en el citado artículo.

A estos fines serán de aplicación las condiciones de automaticidad, frecuencia diaria y no retribución establecidas por el artículo 6º de la mencionada ley.

El remanente se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la ley 23.548.

Título V

Modificación del impuesto a las ganancias

Art. 5º — Derógase el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones.

Título VI

Modificación del impuesto al valor agregado

Art. 6º — Modifícase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

1. — Incorpórase al inciso e) del artículo 3º, el siguiente punto:

5 (bis). Efectuadas por quienes presten los servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de desagüe, incluidos el desagote y limpieza de pozos ciegos, excepto los comprendidos en el punto 16, del inciso j) del artículo 6º.

2. — Sustitúyese el inciso g) del artículo 6º por el siguiente:

g) El agua ordinaria natural, el pan común, la leche fluida en polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado nacional, las provincias o municipalidades u organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos e), f), g) y m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones; y las especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias y tales especialidades hayan tributado el impuesto en la etapa de importación o fabricación.

3. — Sustitúyese el punto 16 del inciso j) del artículo 6º, por el siguiente:

16. Los servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de desagües, incluidos el desagote y limpieza de pozos ciegos cuando dicho servicio se efectúe en un domicilio destinado a casa-habitación o viviendas de recreo o veraneo o terreno baldío, y toda contraprestación que tenga su origen en el suministro del servicio de riego o en la construcción de obras —existentes o nuevas— para la misma finalidad.

4. — Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

Artículo 24: La alícuota del impuesto será del dieciséis por ciento (16 %).

Esta alícuota se incrementará el veinticinco por ciento (25 %) para las prestaciones de servicios comprendidas en los puntos 4, 5 y 5 bis del inciso e) del artículo 3º, cuando la prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso terrenos baldíos y el usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscripto o como responsable no inscripto.

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores en hasta seis (6) puntos porcentuales.

5. — Sustitúyese el primer párrafo del segundo artículo del título V — "Responsables no inscriptos", por el siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4º, los responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones a responsables no inscriptos, además del impuesto originado por las mismas, deberán liquidar el impuesto que corresponda a los últimos responsables indicados, aplicando la alícuota del impuesto sobre el cincuenta por ciento (50 %) del precio neto de dichas operaciones, establecido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º.

Título VII

Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas

Art. 7º — Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país.

Art. 8º — Son sujetos de este impuesto las personas físicas y sucesiones indivisas, que revistan tal carácter para el impuesto a las ganancias, que transfieran inmuebles, en la medida que dicha transferencia no se encuentre alcanzada por el mencionado impuesto.

En los casos de cambio o permuta se consideran sujetos a toda las partes intervinientes en la operación siendo contribuyentes cada una de las mismas, sobre el valor de los bienes que transfieran.

Art. 9º — A los efectos de esta ley se considerará transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición, excepto la expropiación, por el que se transmita el dominio a título oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden judicial o con motivo de concursos civiles.

Art. 10. — La transferencia de inmuebles pertenecientes a los miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras, a su personal técnico y administrativo, y a sus familiares, se encuentran exentas del impuesto, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones, sólo a condición de reciprocidad. Igual tratamiento se aplicará a los inmuebles de los miembros de las representaciones, agentes y, en su caso, sus familiares que actúen en organismos internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y con las limitaciones que se establezcan en los respectivos convenios internacionales.

Art. 11. — El gravamen se aplicará sobre el valor de transferencia de cada operación.

Cuando la transferencia se efectúe por un precio no determinado se computará a los fines del cálculo del gravamen, el precio de plaza en el momento de perfeccionarse la transferencia de dominio.

En el caso de permutas se considerará el precio de plaza del bien o prestación intercambiada de mayor valor. Si el precio de plaza no fuera conocido la Dirección General Impositiva fijará el procedimiento a seguir.

Art. 12. — El impuesto es adeudado desde el momento en que se perfecciona la transferencia gravada, que se considerará configurada cuando se produzca el primero de los siguientes hechos:

- a) Cuando suscrito el respectivo boleto de compraventa o documento equivalente, se otorgue posesión;
- b) Otorgamiento de la escritura traslativa de dominio.

En los actos de ventas judiciales por subasta pública la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate.

Art. 13. — La tasa del impuesto será del quince por mil (15 %).

Art. 14. — En el caso de venta de la única vivienda y/o terrenos del contribuyente con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa-habitación propia, podrá optarse por no pagar el impuesto que resulte de la transferencia en la forma y condiciones que determine la reglamentación. Esta opción también podrá ejercerse cuando se ceda la única vivienda y/o terrenos con el propósito de destinarlos a la construcción de un edificio bajo el régimen de la ley 13.512 y sus modificaciones y se reciba como compensación por el bien cedido hasta un máximo de una unidad funcional de la nueva propiedad destinada a casa-habitación propia.

La opción deberá ser formulada al momento de suscribirse el boleto de compraventa cuando en el mismo se entregue la posesión, en el de formalizarse dicha entrega de posesión o en el de la escrituración, el que fuere anterior y será procedente aun cuando la adquisición del bien de reemplazo hubiera sido anterior, siempre que ambas operaciones se efectúen dentro del término de un año. Dentro de dicho plazo el contribuyente deberá probar por medios fehacientes la adquisición del inmueble de reemplazo y su afectación al referido destino.

Los escribanos de registro o quienes los sustituyan, al extender las escrituras traslativas de dominio relativas a la venta y adquisición de los inmuebles comprendidos en el presente artículo, deberán dejar constancia de la opción ejercida por el contribuyente.

Art. 15. — En el caso de incumplirse los requisitos establecidos en esta ley o en sus normas reglamentarias y complementarias para la procedencia de la opción que autoriza el artículo anterior, el contribuyente que la hubiera ejercido deberá presentar o rectificar la respectiva declaración jurada incluyendo las transferencias oportunamente afectadas, e ingresar el impuesto con más la actualización prevista en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, sin perjuicio de los intereses y accesorios que correspondan.

Art. 16.—Las transferencias que efectúen los residentes en el exterior sólo estarán sujetas a las disposiciones del presente título, en tanto se demuestre fehacientemente a juicio de la dirección, en el plazo y forma que ésta determine, que se trata de inmuebles pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas.

En estos casos deberá retenerse el total del gravamen que corresponda en oportunidad de su pago o acreditación. La inobservancia de esta obligación hará incurrir al que pague o acredite, en las penalidades establecidas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, sin perjuicio de la responsabilidad por el ingreso del impuesto que omitió retener.

Art. 17.—La Dirección General Impositiva queda facultada para establecer agentes de retención o percepción que estime necesarios a efectos de asegurar la recaudación del gravamen.

Art. 18.—El gravamen de esta ley se registrará por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva.

Título VIII

Modificación de la ley de procedimiento tributario (Ley 11.683)

Art. 19.—Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente forma:

1. Incorpórase como tercer párrafo del artículo 2º, el siguiente:

Facúltase a la Dirección General Impositiva a suscribir convenios con los bancos oficiales —nacionales, provinciales o municipales, incluidos los de economía mixta—, provincias y municipios, a los fines de la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, estableciendo en tales servicios una compensación por la gestión que realicen los entes indicados, en función de lo efectivamente recaudado para el fisco nacional, sin afectar lo previsto en el artículo incorporado como Capítulo XIV de la ley 11.683 por el artículo 77 de la ley 23.760.

2. Sustitúyese el artículo 44, por el siguiente:

Artículo 44.—Sin perjuicio de la multa prevista en el artículo 43, se clausurarán por tres (3) a diez (10) días los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios que incurran en algunos de los hechos u omisiones siguientes:

1. No emitan facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios en la forma y condiciones que establezca la dirección general.
2. No lleven registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o si las lle-

varen, las mismas no reunieren los requisitos exigidos por la dirección general.

3. No se inscribieren como contribuyentes o responsables ante la dirección general cuando estuvieran obligados a hacerlo, salvo que mediare error de hecho o de derecho.

3. Sustitúyese el segundo artículo agregado a continuación del artículo 44 por la ley 23.314, por el siguiente:

Artículo ... — La autoridad administrativa que hubiera dictado la providencia que ordene la clausura dispondrá sus alcances y los días en que deba cumplirse.

La dirección general, por medio de sus funcionarios autorizados, procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso.

Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.

4. Sustitúyese el cuarto artículo agregado a continuación del artículo 44 por la ley 23.314, por el siguiente:

Artículo ... — Quien quebrantare una clausura o violare los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, será sancionado con arresto de diez (10) a treinta (30) días y con una nueva clausura por el doble de tiempo de aquélla.

Son competentes para la aplicación de tales sanciones los jueces en lo penal económico de la Capital Federal o los jueces federales en el resto de la República.

La Dirección General Impositiva, con conocimiento del juez que se hallare de turno, procederá a instruir el correspondiente sumario de prevención, el cual, una vez concluido, será elevado de inmediato a dicho juez.

La Dirección General Impositiva prestará a los magistrados la mayor colaboración durante la secuela del juicio.

5. Sustitúyese el artículo incorporado a continuación del artículo 78 por la ley 23.314, por el siguiente:

Artículo ... — La sanción de clausura será recurrible por recurso de apelación, otorgado sólo con efecto devolutivo, ante los juzgados en lo Penal Económico de la Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República.

El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución.

Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada la apelación deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo

a las previsiones del artículo 507 del Código de Procedimientos en Materia Penal el que, a petición de parte y cuando pudiera causarse un gavarrismo impenable, podrá otorgar al recurso efecto suspensivo.

Serán de aplicación los artículos 588 y 589 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital Federal y Territorios Nacionales.

La decisión del juez será inapelable.

6. Incorpórase a continuación del artículo 101 el siguiente:

Artículo ... — El Poder Ejecutivo podrá disponer con alcance general y bajo las formas y requisitos que establezca la reglamentación, a los organismos recaudadores de los impuestos a las ganancias, sobre los activos y al valor agregado, así como de los aportes y contribuciones al sistema nacional de seguridad social, publiquen periódicamente la nómina de los responsables de los mismos, indicando en cada caso los conceptos e ingresos que hubieran satisfecho respecto de las obligaciones vencidas con posterioridad al 1º de enero de 1991.

A los fines de dicha publicación, no será de aplicación el secreto fiscal previsto en el artículo 101.

7. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 111 por el siguiente:

Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para poder acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de impuestos no vencidos y para hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de las deudas fiscales pendientes, así como también para acordar la cesión total o parcial de los derechos sobre la cartera de créditos fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos. Todos estos actos deberán publicarse en el Boletín Oficial.

8. Incorpórase a continuación del capítulo XIII, el siguiente capítulo:

CAPÍTULO ...

Artículo ... (I). — Para los contribuyentes y responsables cuyos ingresos o patrimonio no superen las cifras que establece el artículo ... (XI) de este capítulo, el Poder Ejecutivo podrá disponer, con carácter general y por el tiempo, impuestos en zonas geográficas que estime conveniente, que la fiscalización a cargo de la dirección general se limite al último período anual por el cual se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, último párrafo.

En caso de tributos que no se liquidan anualmente, la fiscalización deberá abarcar los períodos vencidos durante el transcurso de los últimos doce (12) meses calendario anteriores a la misma.

La facultad establecida en los párrafos anteriores se extiende al caso de los agentes de retención o percepción de impuestos que hubieran omitido actuar como tales.

Artículo ... (II). — Hasta que la dirección general proceda a impugnar las declaraciones juradas mencionadas en el artículo ... (I) y practique la determinación prevista en el artículo 24 y siguientes, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos.

La presunción que establece este artículo no se aplicará respecto de las declaraciones juradas, originales o rectificativas, presentadas luego de iniciada la inspección, ni aún de las que lo hubieran sido antes de ella, si concurrieran las circunstancias indicadas en el primer párrafo, última parte, del artículo 111.

Tampoco impedirá que la auditoría pueda extenderse a períodos anteriores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre los resultados del período o períodos fiscalizados o bien, para prevenir los supuestos indicados en los artículos ... (III) apartado 2 y ... (IV) último párrafo.

La presunción a que se refiere el párrafo primero no regirá respecto de los períodos fiscales vencidos y no prescriptos beneficiados por ella en virtud de una fiscalización anterior, cuando una fiscalización ulterior sobre períodos vencidos con posterioridad a la realización de la primera, demuestre la inexactitud de los resultados declarados en relación a cualquiera de estos últimos. En este caso se aplicarán las previsiones del artículo ... (III).

Artículo ... (III). — Si de la impugnación y determinación de oficio indicada en el artículo ... (II) resultare el incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor de la dirección general o, en su caso, se redujeran los quebrantos podrá optar por alguna de las siguientes alternativas:

1. Extender la fiscalización a los períodos no prescriptos y determinar de oficio la materia imponible y liquidar el impuesto correspondiente a cada uno.
2. Hacer valer, cuando correspondiere, la presunción de derecho prevista en el artículo ... (IV) y siguientes.

Una vez que la dirección general hubiera optado por alguna de las alternativas referidas, deberá atenerse a la misma respecto a todos los demás períodos fiscalizables.

No será necesaria la determinación de oficio a que se refiere el primer párrafo si los responsables presentaron declaraciones juradas rectificativas que satisficieran la pretensión fiscal.

Dicha pretensión se considerará satisfecha si tales declaraciones juradas rectificativas no fue-

ran impugnadas dentro de los sesenta (60) días corridos contados desde su presentación.

Artículo ... (IV).— Si de acuerdo con lo establecido en el artículo ... (III) la impugnación y determinación de oficio se hubieran efectuado directamente y por conocimiento cierto de la materia imponible o de los quebrantos impositivos o saldos de impuestos a favor de los responsables, se presumirá admitiendo prueba en contrario, que las declaraciones juradas presentadas por el resto de los períodos no prescriptos adolecen de inexactitudes equivalentes, en cada uno de ellos, al mismo porcentaje que surja de relacionar los importes declarados y ajustados a favor de la Dirección General en el período base fiscalizado, salvo que en posteriores fiscalizaciones se determine un porcentaje superior para los mismos períodos no prescriptos a los cuales se aplicó la presunción.

Cuando se trate de períodos de liquidación no anuales, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior resultará de considerar el conjunto de declaraciones juradas presentadas y de promediar los ajustes surgidos a favor o en contra del responsable a moneda del último de los períodos considerados. La Dirección General Impositiva establecerá la metodología de actualización respectiva.

En ningún caso se admitirá como justificación que las inexactitudes verificadas en el período tomado como base de la fiscalización puedan obedecer a causas imputables a ejercicios fiscales anteriores.

La presunción del párrafo primero no se aplicará en la medida que las impugnaciones tuvieran origen en cuestiones de mera interpretación legal.

Artículo ... (V).— Los porcentajes indicados en el artículo ... (IV) se aplicarán respecto de cada uno de los períodos no prescriptos para incrementar la base imponible o para reducir los quebrantos o saldos a favor del responsable.

El cálculo de la rectificación se iniciará por el período no prescripto más antiguo respecto del cual se hubieren presentado declaraciones juradas y los resultados acumulados que se establezcan a partir del mismo, se trasladarán a los períodos posteriores como paso previo a la aplicación de los porcentajes aludidos al caso de estos últimos.

Artículo ... (VI).— En el caso de que las rectificaciones practicadas en relación al período o períodos a que alude el artículo ... (I) hubieran sido en parte sobre base cierta y en parte por estimación, el organismo podrá hacer valer la presunción del artículo ... (IV), únicamente en la medida del porcentaje atribuible a la primera. En lo demás, regirá la limitación indicada en el párrafo siguiente.

Si los ajustes efectuados en el período base fueran exclusivamente estimativos, la Dirección General podrá impugnar las declaraciones juradas

y determinar la materia imponible o los saldos de impuestos correspondientes a los restantes períodos no prescriptos sólo en función de las comprobaciones efectivas a que arribe la fiscalización en el caso particular de cada uno de ellos.

Artículo ... (VII).— Los saldos de impuestos determinados con arreglo a la presunción de derecho de los artículos ... (IV) y ... (VI) serán actualizables y devengarán los intereses resarcitorios y punitivos de la presente ley, pero no darán lugar a la aplicación de las multas de los artículos 43, 45 y 46.

Cuando corresponda ejercer las facultades del artículo 38, la Dirección General podrá tomar en consideración tales resultados para fijar el importe de los pagos provisorios a que se refiere dicho artículo, indistintamente de que se trate de períodos anteriores o posteriores al que se hubiera tomado como base de la fiscalización.

Artículo ... (VIII).— La determinación administrativa del período base y la de los demás períodos no prescriptos susceptibles de la presunción del artículo ... (IV) sólo se podrá modificar en contra del contribuyente cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el 2º párrafo del artículo 26.

Corresponderá igualmente dicha modificación si en relación a un período fiscal posterior sobreviniera una nueva determinación administrativa sobre base cierta y por conocimiento directo de la materia imponible, en cuyo caso la presunción del artículo ... (IV) citado se aplicará a los períodos fiscales no prescriptos con exclusión del período base de la fiscalización anterior y aun cuando incluyan períodos objeto de una anterior determinación presuntiva.

Artículo ... (IX).— Las presunciones establecidas en los artículos ... (II) y ... (IV) regirán respecto de los responsables de los impuestos a las ganancias, sobre los activos, al valor agregado e internos.

Servirán como base para la aplicación de las mismas las declaraciones juradas y determinaciones efectuadas a partir de los sesenta (60) días corridos desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial, en tanto que correspondan a períodos fiscales anuales cuyo vencimiento general hubiera operado con posterioridad el 1º de enero de 1991.

Si no se tratara de impuestos anuales, la presunción del artículo ... (IV) quedará habilitada con la impugnación de la última declaración jurada o determinación de oficio que reúna las condiciones indicadas en el primer párrafo de dicho artículo, pero sólo se hará efectiva bajo la condición y en la medida que resulten de la fiscalización de los períodos a que alude en el segundo párrafo del artículo ... (1).

Artículo ... (X).— Una vez formalizada la impugnación de las declaraciones juradas o determinaciones indicadas en el segundo y tercer párrafo del artículo anterior, la presunción del

artículo ... (IV) se aplicará a los resultados de todos los periodos no prescriptos a ese momento, aun cuando su vencimiento general hubiera operado con anterioridad a la vigencia de dicha norma.

La aplicación de la presunción referida podrá efectuarse, a opción de la dirección general, en forma simultánea con el acto administrativo por el cual se determine el impuesto del periodo fiscal que hubiere servido como base o dentro de los 90 días corridos siguientes.

Artículo ... (XI). — A los fines dispuestos en el artículo ... (I) de este capítulo, fijase en cien mil millones de australes (A 100.000.000.000) el monto de ingresos anuales y en cincuenta mil millones de australes (A 50.000.000.000) el monto del patrimonio. Dichas cifras se considerarán fijadas al 31 de diciembre de 1990 y se ajustarán para el futuro conforme la variación en el índice de precios mayoristas nivel general. Los ingresos y patrimonio se ajustarán igualmente a moneda uniforme según el mencionado índice tomando en consideración los montos correspondientes al último ejercicio económico actualizados a la fecha en que se realice la comparación.

9. Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 129, por el siguiente:

Dichos montos se actualizarán desde la fecha de pago o presentación de la declaración jurada que dio origen al crédito a favor de los contribuyentes o responsables.

Título IX

Tributos aduaneros

Art. 20. — Los derechos de importación, los derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses.

El pago podrá efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación de acuerdo a las normas vigentes, o en australes. En este último caso la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.

Título X

Donaciones provenientes de la cooperación internacional

Art. 21. — La ejecución de los programas derivados de la instrumentación en el país de donaciones provenientes de gobiernos extranjeros con los cuales la República Argentina tiene concertados tratados de cooperación internacional gozarán de los beneficios tributarios establecidos en los artículos siguientes.

Las exenciones previstas en el presente título estarán limitadas al monto de las donaciones y por hechos vinculados exclusivamente a las mismas.

Art. 22. — El ente designado por el gobierno donante como responsable para la ejecución del programa, su representación en la Argentina, las empresas argen-

tinias que realicen las obras o presten los servicios previstos en el programa, y quienes realicen la provisión de bienes y servicios, al ente designado y su representación argentina, estarán exentos de tributar el impuesto al valor agregado, por las ventas, obras, locaciones, prestaciones de servicios e importaciones realizadas para la ejecución del programa.

Asimismo, los responsables mencionados en el párrafo anterior podrán dar a los créditos fiscales que les hubieren sido facturados el tratamiento previsto en el primero y el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Art. 23. — En ente designado y su representación en la Argentina gozarán en relación a las actividades y bienes directamente vinculados a la ejecución del programa de:

- Exención en el impuesto a las ganancias, o el que lo sustituya o complementa, por las utilidades provenientes de sus actividades. No será de aplicación lo dispuesto en la primera parte del artículo 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, y en el artículo 104 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones;
- Exención en el impuesto sobre los activos, o el que lo sustituya o complementa, y en cualquier otro impuesto nacional que alcance una manifestación patrimonial;
- Exención en los impuestos internos. Las adquisiciones efectuadas en el mercado interno darán lugar a la devolución del impuesto que les hubiera sido facturado;
- Exención de los derechos de importación y demás gravámenes, tasas y contribuciones que recaigan sobre las importaciones de los bienes destinados a la ejecución del proyecto;
- Exención en el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas o el que lo sustituya o complementa;
- Exención en el impuesto sobre los débitos en cuenta corriente o el que lo sustituya o complementa.

Art. 24. — Los nacionales del país donante de residencia no permanente en la Argentina gozarán de exención del impuesto a las ganancias, o el que lo sustituya o complementa, por los ingresos directamente vinculados a la ejecución del proyecto.

Art. 25. — Los contratos, actos u operaciones que se celebren o realicen con motivo de la contratación y ejecución del proyecto estarán exentos del impuesto de sellos nacional.

Título XI

Otras disposiciones

Art. 26. — Modifícanse los artículos 4º y 10 de la ley 22.091 de la siguiente forma:

- Suprímese el inciso b) del artículo 4º.

2. Sustitúyese el inciso d) del artículo 4º por el siguiente:

d) Los fallidos por quiebra casual, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; los fallidos por quiebra culpable, hasta diez (10) años de su rehabilitación; los fallidos por quiebra fraudulenta, ilimitadamente; el director o administrador de asociación o sociedad, cuya conducta se calificara de culpable, hasta diez (10) años después de su rehabilitación, y cuya conducta se calificara de fraudulenta, ilimitadamente.

3. Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

Quienes desempeñen cargos de cualquier categoría, rentados o no, en la Administración Nacional de Aduanas no podrán ocupar cargos o mantener relaciones de cualquier naturaleza o de asesoramiento con firmas exportadoras o importadoras o con despachantes de aduana.

Art. 27. — Restablécese la vigencia de las disposiciones previstas en el artículo 37 de la ley 23.763, desde el día siguiente al de la publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 1991, sustituyendo su acápite b) por el siguiente:

- b) El treinta y seis por ciento (36 %) se distribuirá entre las provincias no enumeradas en el acápite anterior en función a la distribución de fondos coparticipados establecida en el artículo 3º, inciso c) y el artículo 4º de la ley 23.548, las que incrementarán su participación relativa una vez eliminados los porcentuales correspondientes a las provincias citadas en el acápite a) del presente artículo.

Título XII

Vigencia

Art. 28. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial excepto lo que se dispone a continuación:

1. Las del artículo 1º puntos 1, 2 y 5 que regirán desde el tercer día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y por el término de un año. Al cumplirse dicho plazo quedarán restablecidas las tasas fijadas por la ley 23.760 y derogado el artículo incorporado a continuación del artículo 27 de dicha norma por el artículo 1º, punto 5 de la presente ley.
2. Las del artículo 4º tendrán efecto para el primer ejercicio comercial y período fiscal que cierre a partir del mencionado día inclusive; quedando para los ejercicios posteriores restablecidas las disposiciones de la ley 23.760 que se modifican por los puntos 1 y 2 y restablecida la tasa del uno por ciento (1 %) que es-

tablece el artículo 10 de la misma ley, sustituido por el punto 4 de la presente ley.

3. Las del artículo 5º que tendrán efecto a partir del primer ejercicio comercial y período fiscal que cierre a partir del mencionado día.
4. Las del artículo 6º desde el tercer día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial excepto las de su punto 1 cuya fecha de entrada en vigencia será fijada por el Poder Ejecutivo.
5. Las del punto 8 del artículo 19 que tendrán efecto desde el 1º de enero de 1991 inclusive.
6. Las del punto 9 del artículo 19 que tendrán efecto para los créditos a favor del contribuyente o responsable originado a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 29. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRE.
Esther H. Pereyra Asandía
de Pérez Pardo.

Buenos Aires 15 de febrero de 1991.

Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Eduardo Menem.

S/D.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los términos del artículo 19 del reglamento de la Cámara, a los fines de solicitar la celebración de una sesión pública especial.

El objeto de la misma es la consideración de la sanción de Diputados producida el día 15 de febrero del corriente año, con relación a las modificaciones impositivas promovidas por el Poder Ejecutivo nacional en el mensaje 253, dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación, y cuyos dictámenes en mayoría y en minoría figuran en el Orden del Día N° 1.121 de dicha Cámara.

En otro particular, saludamos al señor presidente provisional con nuestra consideración más distinguida.

Juan C. Romero. — Alberto J. Rodríguez
Saúl. — Liliana I. Gurdulich de Correa.
— Luis Ruben.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1991.

VISTO la solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial a fin de que se considere el proyecto de ley en revisión de reforma impositiva, y

CONSIDERANDO:

Que en reunión de presidentes de bloque celebrada en el día de la fecha se propició la adopción de idéntico temperamento;

Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello:

El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación

DECRETA:

Artículo 1º — Por Secretaría cítese a los señores senadores a sesión pública especial, para el día 16 del corriente, a las 15.30 horas, a efectos de la consideración del proyecto de ley en revisión por el que se modifican los impuestos a las ganancias, de sellos, sobre los débitos bancarios y otras operatorias, sobre las ventas, compras, cambio o permutas de divisas, sobre los activos, al valor agregado y la ley de procedimientos tributarios, creación de un impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y pago de los tributos aduaneros sobre el comercio exterior en dólares estadounidenses.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO MENEM.
Hugo R. Flombaum.

Sr. Presidente (Menem). — A continuación, se dará lectura a la nota presentada por el señor ministro de Economía de la Nación a la Presidencia por la que solicita participar en esta sesión especial.

Por Secretaría se dará lectura:

Sr. Secretario (Flombaum). — *(Lee)*

Buenos Aires, 16 de febrero de 1991

*Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
doctor Eduardo Duhalde.*

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del Honorable Senado solicitándole participar en la sesión donde se tratará el proyecto de ley impositiva, en los términos del artículo 92 de la Constitución Nacional.

Sin otro particular saludo al señor presidente muy atentamente

Domingo F. Cavallo.

Sr. Presidente (Menem). — Como se trata de una atribución que la Constitución otorga al señor ministro para presentarse a rendir informes, solicito el asentimiento del cuerpo para invitarlo a pasar al recinto.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Como hay asentimiento, por Secretaría se realizará la gestión co-

rrespondiente para invitar al señor ministro a pasar al recinto.

—Son las 16 y 38.

—A las 16 y 39:

—Ingresa en el recinto y ocupan sendos siales en la mesa de ministros el señor ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo, y el señor subsecretario de Finanzas Públicas, doctor Carlos Miguel Tacchi.

Sr. Presidente (Menem). Continúa la sesión.

Sr. Romero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — A efectos de entrar en la consideración del tema, solicito que este asunto se trate sobre tablas.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Salta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley venido en revisión sobre reforma impositiva.

—Se lee nuevamente el proyecto de ley en revisión.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

A efectos de que el señor ministro de Economía rinda el informe pertinente, la Presidencia le cede el uso de la palabra.

Sr. Ministro de Economía. — Señor presidente, señores senadores: permítanme, en primer lugar, transmitirles el reconocimiento del señor presidente de la Nación y de todos los integrantes de su gabinete —también estamos seguros del reconocimiento del pueblo argentino— por la eficaz labor del Honorable Senado, así como también de la Honorable Cámara de Diputados, para tratar detenidamente y en detalle, pero al mismo tiempo en forma rápida, el proyecto de ley en consideración.

Este proyecto de ley incorpora modificaciones en las disposiciones que atañen al sistema tributario de nuestro país así como también a la administración de los impuestos que percibe la Nación, y constituye un instrumento legal importante para enfrentar la crítica situación coyuntural por la que está atravesando nuestra economía.

Desde el día en que visité este Senado para transmitir a los señores senadores —lo mismo

había hecho con los señores diputados— el deseo del Poder Ejecutivo de trabajar muy cerca del Congreso de la Nación en un replanteo de las reglas de juego económicas de nuestro país, advertimos que, aún con los disensos naturales, había algo en lo que los señores senadores y diputados coincidieron: la importancia de este trabajo conjunto y la posibilidad de hacerlo con la celeridad que requieren los problemas que debemos enfrentar.

Y ese mismo día, cuando estaba ingresando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que introducía modificaciones a la legislación impositiva, tuve oportunidad de informar a los señores senadores en qué consistía el proyecto.

Debo decir que al día siguiente muchos de los señores senadores pidieron detalles que demostraban que ya se habían abocado al estudio de este proyecto de ley. Incluso antes de que lo tratara la Cámara de Diputados, los señores senadores se reunieron con el subsecretario de Finanzas Públicas, el doctor Tacchi, quien tuvo oportunidad de alizar con ellos los detalles del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y también de las modificaciones que se estaban estudiando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Además, nos consta que durante todo el día de ayer y esta mañana los señores senadores han estado examinando en detalle este proyecto de ley con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.

De manera, entonces, que estamos seguros de que la celeridad con que el Honorable Senado de la Nación está considerando este proyecto no significa en manera alguna falta de cuidado en su tratamiento, sino todo lo contrario, como por los detalles que acabo de dar hemos podido comprobar.

Señor presidente: como ministro de Economía de la Nación le digo que este conjunto de modificaciones a la legislación impositiva apunta fundamentalmente a dos objetivos: por un lado, a un aumento de la recaudación sobre la base de la elevación de algunas alícuotas de los impuestos ya existentes; y por otro, fundamentalmente, a una lucha frontal contra la evasión.

Es más, el aumento de las alícuotas de los impuestos existentes en su gran mayoría significa gravar solamente a los que evaden, porque los que pagan puntualmente sus impuestos podrán utilizar esta diferencia como crédito fiscal. Me refiero a lo que se pasa a tributar como impuesto a los débitos bancarios o mayor tasa del IVA, vinculada a la prestación de servicios de obras sanitarias, gas, teléfono y electricidad.

En el único impuesto en donde se produce una elevación significativa es en el que grava los

activos, pero al ser tomado el gravamen a las ganancias como pagado a cuenta de este otro, se produce una virtual consolidación de ambos tributos que, en gran medida, también determinará una reducción de los índices de evasión. Esto ocurrirá, sobre todo, a través de una modificación en el régimen de anticipos de los dos impuestos que vamos a poner en marcha de inmediato, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial esta ley. De esta manera se hará muy eficaz el control de la evasión.

Considero que es muy importante que no aumente ningún impuesto que grave los ingresos del trabajo así como tampoco los consumos. Como he dicho, aumentan sólo las alícuotas de impuestos que gravan a los que evaden y la alícuota del impuesto a los activos que, combinada con el de las ganancias, también va a mejorar la equidad del sistema tributario.

Si tomamos el total del ingreso nacional y lo separamos en dos componentes: por una parte, el ingreso que obtienen quienes trabajan en empresas que cumplen con las obligaciones sociales, que representa un 15 por ciento del total y, por el otro lado, el resto de los ingresos percibidos por quienes obtienen rentas, ganancias de capital, beneficios empresarios, honorarios profesionales y remuneración al trabajo informal, que es el 85 por ciento restante, veremos que la tributación en un segmento y otro del ingreso resulta muy diferente.

En el primer caso, el del 15 por ciento —que, como dije, comprende el ingreso de quienes trabajan en relación de dependencia en empresas que cumplen con sus obligaciones sociales—, se puede verificar que contribuyen con un 33 por ciento de esa porción del ingreso nacional, es decir, soportan una presión fiscal del 33 por ciento sobre los ingresos. Mientras tanto, el 85 por ciento restante soporta una presión fiscal de sólo el 8,5 por ciento.

Esta cuestión está relacionada con los índices de evasión que se dan precisamente con el impuesto a las ganancias, que ahora se reducirán en gran medida con el aumento que se operará en el impuesto a los activos en combinación con el régimen de anticipos y por considerar al tributo a las ganancias como pago a cuenta del tributo a los activos. O sea que habrá dos impuestos que, virtualmente, estarán combinados a partir de esta modificación de la legislación tributaria.

Así, esperamos una elevación de los gravámenes a los ingresos de aquellos que no trabajan en empresas que cumplen con las leyes sociales sino que obtienen sus ingresos de otras fuentes, lo que ayudará a una mayor equidad en el sistema tributario.

Pero el otro aspecto que también tiene que ver con problemas muy acuciantes es el de la elevadísima proporción de este aumento de la recaudación que va con destino a las provincias.

Incluso, esta proporción es mayor que la proyectada por el Poder Ejecutivo, ya que se le introdujo una modificación en la Cámara de Diputados, según la cual el 50 por ciento de la recaudación del impuesto a los activos irá directamente a las provincias, y el otro 50 por ciento se coparticiparía. En realidad, para la Nación se destinaría un 43 por ciento y para las provincias el 56 o 57 por ciento.

En los diarios se ha dicho que el Ministerio de Economía está disconforme con esta modificación que introdujo la Cámara de Diputados y yo quiero desmentirlo totalmente aquí ante ustedes. Para el Ministerio de Economía, para el Poder Ejecutivo de la Nación, el hecho de que este paquete impositivo sirva para resolver el problema fiscal de las provincias implica también resolver el problema fiscal en su conjunto. Porque si las provincias no disponen de los recursos suficientes, de una u otra manera el déficit de ellas repercute en el de la Nación, tornando inmanejable la política monetaria del Banco Central.

Por eso estamos muy conformes con que el grueso del aumento de la recaudación que generará este paquete impositivo vaya a las provincias. Ese fue el objetivo, ya que siendo dirigido a las provincias llegará a muchos servidores públicos que prestan los servicios más directamente vinculados con el bienestar de la población, como son los de salud, educación, seguridad, justicia y acción social.

Justamente, la modificación del papel del Estado que está impulsando el gobierno del presidente Menem apunta a que sean estos servicios los que reciban el grueso de los recursos públicos.

Sin duda la Nación también necesita aumentar la recaudación; pero, aun con estos porcentajes exiguos de distribución a la Nación, contemplados en este proyecto, ella verá significativamente aumentados sus recursos tributarios. Ocurre que en este proyecto también se introducen modificaciones a los procedimientos impositivos y a la administración tributaria y aduanera, que serán muy efectivos en la lucha contra la evasión.

Por lo tanto, esperamos que, tan pronto como podamos instrumentar esta modificación, se produzca un aumento muy importante en la recaudación que irá dirigido tanto a la Nación

como a las provincias, en relación con menores niveles de evasión.

Es particularmente importante que los señores senadores se hayan reunido hoy para el tratamiento de este proyecto porque, si resultara aprobado, el próximo lunes sería publicado en el Boletín Oficial y durante la próxima semana el Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le ha conferido el Poder Legislativo, podría poner en marcha un nuevo estilo de administración tributaria que, a través de la transparencia, de la simplicidad de los procedimientos y de la mayor eficacia en el control, generará un aumento muy importante de la recaudación por caída de la evasión impositiva.

Además, el hecho de que el lunes la ley pueda estar publicada en el Boletín Oficial, traerá como consecuencia que en la última semana de este mes las provincias puedan recibir una cantidad muy significativa de recursos, que les permitirán pagar puntualmente los sueldos, así como también pagar de la misma manera a los jubilados de regímenes provinciales.

La Nación también podrá afrontar sus obligaciones con los que menos tienen, con los jubilados, que ciertamente cuentan con una remuneración bajísima, al igual que ciertos sectores de empleados públicos como los docentes, los ferroviarios, así como el personal del escalafón 1.428 que tiene remuneraciones muy reducidas.

Pero ciertamente los efectos completos no se verán en febrero sino en marzo, abril y meses siguientes.

El Poder Ejecutivo quiere que haya mayores asignaciones reales para la prestación de todos los servicios públicos, fundamentalmente los que tienen una relación más directa con el bienestar de la población. Pero no desea hacerlo con el dinero de la emisión monetaria, porque habiendo pasado nuestro país por hiperinflación y estando en un proceso de lenta recuperación, financiar esos gastos, esas erogaciones, con emisión monetaria significaría provocar una suba adicional del dólar y de todos los precios, que terminaría degradando aún más el ya muy bajo nivel de retribución de jubilados y de trabajadores argentinos.

Por eso, con toda sinceridad, cuando el Poder Ejecutivo elevó este proyecto de ley a los señores representantes del pueblo y de las provincias, les dijimos que veníamos fundamentalmente a pedir modificaciones en la legislación impositiva y en la administración tributaria, para poder cumplir las obligaciones incluíbles con prestadores de muchos otros servicios pú-

blicos y con la población en general. Pero hay que hacerlo con la responsabilidad que significa repartir lo que se tiene y no lo que no se tiene y, en este caso, hay que emitir descontroladamente, con lo que se llega a golpear fuertemente el bolsillo y el nivel de vida de toda la población.

Por supuesto que el objetivo del Poder Ejecutivo no es recaudar por recaudar sino llegar a eliminar totalmente el déficit fiscal, a fin de que de manera rápida se pueda estabilizar en forma sostenida la economía argentina, sin que haya riesgo de que se vuelva a atrasar el tipo de cambio, para que la reactivación del crecimiento económico —ambos con justicia social— sean una realidad muy pronto.

Aquí no estamos eligiendo entre la estabilidad o la reactivación y el crecimiento. Aquí estamos trabajando simultáneamente por la estabilidad, por la reactivación y por el crecimiento. Porque si no estabilizamos se acentuarán la recesión y el proceso de desinversión, que se han dado por tantas décadas, por tantos años, en nuestro país.

No quiero alargar más mi exposición porque, como ya he dicho, hemos tenido oportunidad de conversar en profundidad con los señores senadores sobre los detalles de este proyecto.

Sí quiero finalizar diciéndoles que no será ésta la única vez que plantearemos una legislación al Poder Legislativo; hay muchas otras normas muy importantes y que tienen que ver precisamente con la ampliación de las oportunidades de inversión, de empleo, de producción, de exportaciones, de mayores ventas en el mercado interno y, en definitiva, de mejoramiento del bienestar de toda la población.

Muy pronto presentaremos esos proyectos a las Cámaras de Senadores y de Diputados para que los puedan discutir con la misma eficacia con que se ha logrado hacer en esta oportunidad. Y no será ya en materia impositiva —tema al que nadie le gusta ciertamente tener que enfrentar porque significa en definitiva exigirle mayor contribución a la gente— sino en asuntos vinculados a procesos de simplificación normativa para que nuestra economía tenga en todos los ámbitos de la actividad reglas claras, simples y de aplicación poco discrecional —lo más automática posible—, que creen un marco apropiado para que la creatividad y la capacidad de trabajo de empresarios, agricultores, obreros, científicos y profesionales argentinos pueda transformarse realmente en el motor del crecimiento con justicia social.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — (*Lee*) "Señor presidente, señores senadores: el ministro de Economía ya ha descrito la situación que caracteriza el actual momento económico del país y el modo de insertarnos en la reforma de carácter fiscal que estamos considerando.

Dichas medidas apuntan hacia cuatro direcciones coincidentes. La primera, incrementar y agilizar la recaudación de los tributos. La segunda, introducir mecanismos indirectos para incluir dentro del universo de los contribuyentes a quienes hoy se desenvuelven en la economía informal.

También, de una manera más adecuada, se desean mejorar los mecanismos de fiscalización para tener una real capacidad de control, más eficiente que la que actualmente posee el organismo recaudador. Asimismo, servirá para inducir a los contribuyentes a un cumplimiento exacto de sus obligaciones tributarias.

Por último, se intenta mejorar la eficacia del régimen contravencional tributario y avanzar en la búsqueda de transparencia en lo que hace al cumplimiento de obligaciones tributarias.

A continuación haré un comentario sobre el proyecto en su contenido en particular.

Comenzaré por el título I, que modifica el impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operatorias. Cabe señalar que se incrementa la alícuota actualmente vigente —que es del 3 por mil— al 12 por mil, al mismo tiempo que la alícuota reducida del uno por mil se incrementa al 2 por mil. Dicho incremento de la alícuota será computado en forma actualizada, y hasta su agotamiento, como pago a cuenta de los impuestos a las ganancias y al valor agregado.

Es de hacer notar que, coherentemente con el propósito y sentido de la reforma en consideración, estos incrementos tienen un carácter transitorio ya que está prevista su aplicación por un año.

El título II trata la modificación del impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas. Se retorna a la tasa del 6 por mil, que representa el nivel histórico de la alícuota de este impuesto. Se establece una tasa diferencial reducida del 4 por mil para las operaciones vinculadas con el comercio exterior.

La Honorable Cámara de Diputados introdujo el criterio que el producido total de este impuesto se aplique en un 50 por ciento a la atención de las necesidades del Fondo de Previsión Social y el 10 por ciento restante, prorrateado entre las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en función de la can-

tividad existente de beneficiarios previsionales en cada una de estas jurisdicciones.

El título III contiene la modificación del impuesto de sellos. Se restituye la exención en el impuesto de sellos para la documentación que instrumente o sea consecuencia de operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas. También se amplía incluyendo en esta exención a cualquier tipo de documentación exigida por el Banco Central de la República Argentina con relación al financiamiento de operaciones de importación y/o exportación.

En el título IV del proyecto en cuestión se modifica el impuesto sobre los activos. En lo fundamental, se aumenta la alícuota del gravamen del 1 al 2 por ciento y se invierte la relación de la imputación con el impuesto a las ganancias, haciendo que el pago de éste sea a cuenta de aquél. El aumento de la alícuota tendrá vigencia por el término de un ejercicio.

Un aspecto importante de la presente reforma, que fue introducida por la Cámara de Diputados, es la distribución del producido del gravamen, que a partir de la vigencia de la ley será del 50 por ciento en forma directa a las provincias, en las proporciones de la distribución secundaria del régimen de coparticipación federal, en tanto que el restante 50 por ciento seguirá el actual régimen de coparticipación, lo que implica que en el producido de este gravamen la participación de las provincias estará en el orden del 78,83 por ciento.

El título V del proyecto, en concordancia con lo dispuesto en la reforma del impuesto sobre los activos, deroga el artículo 101 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que trata sobre la imputación de este impuesto respecto a aquél.

El título VI introduce diversas modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Son tres los aspectos sustanciales de esta reforma. Primero, un reducido incremento en la alícuota del impuesto, que del 15,6 por ciento pasa al 16 por ciento, en orden a facilitar el cálculo del gravamen. En segundo lugar, se eleva del 20 al 50 por ciento el adicional del impuesto que se factura a los responsables no inscriptos. Con ello se procura, principalmente, adecuar dicho adicional a los márgenes de valor agregado de las etapas posteriores, y, al mismo tiempo, se hace más gravosa la actividad informal. Tercero, se establece una alícuota diferencial que grava con una tasa del 25 por ciento a aquellos servicios, excepto Encotel, cuya facturación se encuentra muy concentrada, como las telecomunicaciones, la provisión de gas, elec-

tricidad y agua corriente, excluyéndose las prestaciones dirigidas a los consumos familiares o domiciliarios.

El título VII crea un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país, mediante la aplicación de una alícuota del 15 por mil sobre el valor de transferencia de cada operación. El gravamen alcanzará a las operaciones no incluidas en el impuesto a las ganancias. Con ello se procura otorgar mayor equidad al tratamiento de estas operaciones inmobiliarias, al mismo tiempo que se contempla expresamente la exención para el reemplazo de vivienda única.

El título VIII introduce diversas modificaciones a la ley de procedimientos tributarios. En primer lugar, se contempla la facultad de la Dirección General Impositiva para suscribir convenios con distintos entes, sobre todo con bancos oficiales, a fin de que ellos colaboren en la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo. Esto tiende a unir en el procedimiento tributario la acción concurrente de diversos organismos, que de tal manera podrán facilitar las operaciones que la ley, en principio, pone en cabeza de la Dirección General Impositiva.

El mismo título contempla varias modificaciones al régimen contravencional de la Ley de Procedimientos Tributarios. En tal sentido, se señala que se incrementa el período de la sanción de clausura hasta diez días, siendo el mínimo de tres. Se modifican las figuras contravencionales, adecuándolas a las previsiones de la ley de penalidades tributarias, y se limitan los efectos de la apelación de la sanción administrativa de clausura otorgándole al recurso carácter devolutivo solamente, salvo cuando, a pedido de parte, el juez interviniente entendiere que dicha clausura pudiere irrogar un gravamen irreparable al sancionado.

En orden a conseguir una mayor transparencia y publicidad, en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias, se incorpora la facultad del Poder Ejecutivo para que los organismos recaudadores de los impuestos a las ganancias, sobre los activos y al valor agregado, así como de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Seguridad Social, publiquen la nómina de responsables con indicación de los conceptos y de los ingresos que éstos hubiesen efectuado con posterioridad al 1º de enero del corriente año. Se ha entendido que ésta es una manera efectiva de generar un control en la sociedad respecto de la conducta fiscal de los alcanzados por tales impuestos y contribuciones.

La innovación más notable en lo que hace al régimen procedimental está dada por el régimen de fiscalización que se estatuye, consistente en limitar la fiscalización a cargo de la Dirección General Impositiva al último período fiscal por el cual se hubieran presentado declaraciones juradas o practicado liquidaciones dependiendo la decisión del Poder Ejecutivo nacional.

Este sistema permite, en síntesis, que los contribuyentes que acrediten haber cumplido con exactitud sus obligaciones correspondientes al último período fiscal —sea éste anual o mensual— obtengan del organismo recaudador la convalidación de los períodos anteriores no prescriptos.

De manera simétrica, se establece la presunción de que las inexactitudes evidenciadas en el cumplimiento de estas obligaciones se trasladen hacia atrás, hacia los períodos no prescriptos.

Debe entenderse que estas presunciones cumplen con dos objetivos convenientes para la administración tributaria y para la obtención de una mayor recaudación en las actuales circunstancias. Al limitar la fiscalización al último período, es posible suponer que la actividad fiscalizadora del organismo será más profunda y extensa, abarcando un mayor número de contribuyentes.

Al mismo tiempo, en segundo lugar, también es increíble que los contribuyentes procuren cumplir más acabadamente con sus obligaciones a partir de esta innovación, a fin de cubrir posibles inexactitudes cometidas en períodos anteriores.

El título IX introduce una modificación en cuanto a la determinación de los derechos de importación, exportación y demás tributos aduaneros, que se efectuará en dólares estadounidenses, pudiéndose abonar en la mencionada moneda, en bonos de créditos a la exportación, de acuerdo a las normas vigentes o en australes. En este último caso, la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, con el objeto de evitar la incidencia que tiene en la recaudación el deterioro del signo monetario.

A su vez, y en relación a lo expresado anteriormente en el título XI, se modifican los artículos 4º y 10 de la ley 22.091, de autarquía de la Administración Nacional de Aduanas, permitiéndose el acceso a la administración de la misma de funcionarios con una mayor especialización.

El título X introduce un régimen de exenciones tributarias, vinculadas a la instrumentación, en el país, de donaciones provenientes de

la cooperación internacional, que alcanza a los entes designados por los gobiernos donantes, a sus representaciones en el país y a las empresas argentinas que realicen las obras, presten los servicios previstos en el programa y realicen la provisión de bienes y servicios al ente designado y su representación argentina.

Dentro del título XI, mediante el artículo 27 se restablece la vigencia de lo dispuesto por el artículo 37 de la ley 23.763, de presupuesto general de la administración nacional para el año 1989, por el cual se establecía que el producido de los gravámenes instituidos por los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 23.562 se destinaba a lo que se denominó el financiamiento de desequilibrios provinciales.

De esta forma, los gravámenes involucrados sobre el precio de venta al público de precios de cigarrillos, a los adicionales de emergencia sobre intereses de plazos fijos y transferencia de títulos valores con tal destino quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de 1991, modificándose la participación del 36 por ciento del producido, que antes era asignado al Fondo de Desarrollo Regional y que a través de esta sanción será destinado al conjunto de las provincias, en la forma establecida por el régimen de coparticipación federal.

Por último, con el objeto de que se advierta la importancia que este conjunto de modificaciones impositivas tendrá sobre los ingresos públicos, deseo enumerar los efectos económicos que esta reforma tributaria provocaría durante el presente año. Con el impuesto a los débitos se prevé un incremento en la recaudación de 600 millones de dólares; sobre los activos, una cifra similar; sobre las transferencias de divisas, 150 millones de dólares; sobre la transferencia de inmuebles, 14 millones de dólares; y con el IVA, 300 millones de dólares.

En cuanto a los impuestos sin trámite parlamentario, por la utilización del margen del 25 por ciento del impuesto a los combustibles, el incremento será de 625 millones de dólares. Todas estas cifras totalizarán 2.250 millones de dólares, que representan 2,25 puntos del Producto Bruto.

A esto agregamos el artículo 27 sobre los fondos de emergencias provinciales, que el año pasado representaron 1.200 millones de australes.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a los señores senadores que, luego de agotado el debate, voten afirmativamente el presente proyecto tal cual lo ha remitido la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: es evidente que existe un real apuro en aprobar este proyecto de ley, dadas las expresiones que hemos escuchado del señor ministro de Economía relativas a la necesidad y a la urgencia en sancionar esta norma en virtud del abultado déficit del Tesoro y de las obligaciones pendientes, tanto en el orden interno —me refiero a los proveedores del Estado y a los sueldos de la administración pública, demorados a los efectos de equilibrar el Tesoro, al pago de los títulos de la deuda interna con relación a sus intereses y amortizaciones— como en lo que se refiere a las imprescindibles obligaciones que tiene el Tesoro de abonar pagos al exterior, imprescindibles por cuanto se trata del cumplimiento de las obligaciones derivadas del crédito internacional, y fundamentalmente de los títulos Bonex, para mantener de alguna manera y pese a los reiterados manoseos el prestigio que pueda tener este título en lo que hace al pago de sus intereses y amortizaciones.

Frente a estas circunstancias y ante los comentarios de nuestro bloque, aceptamos enfrentar este tema, quizá con algún déficit de información.

Señalo a los integrantes del Senado que recibimos datos el jueves de esta semana por parte del subsecretario de Finanzas Públicas, aquí presente, quien evacuó satisfactoriamente las consultas que le realizamos.

Pero el problema del país adquiere un volumen mayor.

Lamentablemente durante el último año y medio del nuevo gobierno hemos tenido que asistir y enfrentar cinco modificaciones tributarias o reformas impositivas.

Es cierto que durante los casi seis años del gobierno anterior se produjeron cuatro reformas impositivas. Pero además de las cinco que hemos presenciado en este año y medio, de acuerdo con lo que el señor ministro acaba de informar, será necesario introducir aún otras reformas en algunos de los impuestos clásicos.

Siempre que se produjo una reforma —durante cualquier gobierno y sin importar el ministro que fuera— he vertido más o menos los mismos conceptos.

Por supuesto que vivimos en un país en el que todos hablamos pero pocos escuchamos; además, son muy pocos quienes leen los diarios de sesiones en los que quedan plasmadas nuestras expresiones. Quizás alguna vez alguien los lea, pero ya serán parte de una historia muy pasada.

De acuerdo con mi criterio, señor presidente, lo que debe reformarse es la administración de los impuestos y evitar, en la medida de lo posible, la transformación de los mismos, porque lo único que esto produce es confusión en la sociedad, que es la que debe cumplir con el compromiso.

La administración de los impuestos se viene deteriorando desde hace mucho tiempo, cada vez con mayor degradación. Este es el tema fundamental.

Creo que ha llegado el momento, en razón de muchas circunstancias, de que desde el Ministerio de Economía se advierta la necesidad de una urgente transferencia a la Dirección General Impositiva o a la Administración Nacional de Aduanas de los hombres que tienen capacidad para entender este tema que existen en la administración pública nacional.

Me refiero exclusivamente a estos dos organismos porque los demás aspectos de la reforma impositiva seguramente van a tener poca incidencia en la recaudación final.

Precisamente, si estudiamos lo que la sociedad argentina está dispuesta a pagar en concepto de impuestos, advertimos que la presión tributaria siempre está entre el 15 y el 17 por ciento del producto bruto interno. Pese a todas las reformas impositivas que se hicieron, no se produjeron modificaciones sustanciales en la recaudación final; por el contrario, en muchos casos se verificaron disminuciones.

Por ejemplo, en noviembre del año pasado se decidió el incremento de la alícuota del impuesto al valor agregado en un 20 por ciento, de acuerdo con la facultad que el Poder Legislativo había otorgado al Poder Ejecutivo. A pesar de dicho aumento en la alícuota, el incremento en la recaudación del IVA no fue del 20 por ciento sino que apenas alcanzó al 3 por ciento.

Realmente nos encontramos en una situación muy difícil que requiere que la enfrenten con firmeza tanto quienes tienen la responsabilidad directa de gobierno como quienes la tienen —en un sistema republicano— de ser opositores.

Me había referido antes a las reformas que hubo en los últimos tiempos. En diciembre de 1989 se produjo una reforma impositiva que se plasmó en la ley 23.760. En el mismo mes, por la ley 23.764 se modificaron las tasas de impuestos sobre los capitales. A través de la ley 23.765, sancionada el 21 de diciembre de 1989, se modificó el impuesto al valor agregado. El 2 de febrero de 1990 se sancionó un nuevo régimen penal tributario; y finalmente, en septiembre de dicho año se produjo la generaliza-

ción del IVA, que fue la reforma fundamental de los últimos tiempos.

Insisto, señor presidente, en que por más que se aumenten las tasas impositivas, la recaudación final es siempre la misma en moneda constante.

El señor senador por Salta, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha expuesto con claridad los distintos aspectos que comprende esta reforma tributaria, explicitando las nuevas situaciones que se producirán como consecuencia del cumplimiento de las disposiciones de esta norma legal, refiriéndose a cada uno de los artículos.

De manera entonces que no voy a entrar a analizar en detalle el articulado, peso a estar acostumbrado a ello porque durante seis años ocupé el cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No obstante, quiero referirme a cada uno de los títulos de este proyecto de ley a fin de hacer algunas reflexiones sobre determinados aspectos que atañen a las alícuotas que se incrementan y a la recaudación que se pretende obtener.

En primer lugar, se aumenta la alícuota del impuesto a los débitos bancarios del 3 al 12 por mil, con lo que se pretende recaudar 600 millones de dólares por año.

A su vez, el 25 por ciento de dicha recaudación irá directamente a engrosar las arcas del Tesoro. Del 75 por ciento restante, la mitad podrá ser computada por los contribuyentes del impuesto como pago a cuenta del IVA y la otra mitad como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

Desde un punto de vista académico y técnico, la idea es perfecta. Se pretende que quienes evadan este tipo de impuestos, tanto IVA como ganancias, puedan ser detectados a través de su movimiento bancario o que, directamente, a los efectos de no verse penado por las disposiciones legales, el interesado se disponga a cumplir con ellas.

En primer lugar, creo que de los 600 millones de dólares sólo 150 millones van a ser girados al Tesoro para cubrir los déficit, porque el resto es a cuenta de otros impuestos, con lo cual se va a producir, en definitiva, sólo una compensación de ingresos. En el caso del IVA, prácticamente habría un mes que obraría como financiación previa que debería afrontar el contribuyente y, en lo que respecta a ganancias, en promedio podríamos hablar de hasta seis meses.

Es decir, señor presidente, que de acuerdo con mi criterio tendríamos que tomar una cifra

de 150 millones de dólares en lugar de los 600 millones de que se habla, a lo cual por supuesto podría agregarse lo que se recaude a través de aquellos contribuyentes que se decidan a cumplir las disposiciones legales.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta el problema de la cultura evasora, que no parte de ahora sino de muchos años atrás, desde el inicio de la inflación en la Argentina, la que no existió prácticamente hasta fines de la década de los cuarenta.

Este problema ha hecho que paulatinamente el potencial contribuyente dejara de pagar lo que correspondía, en primer lugar, por ser difícil su detección, y en segundo término porque en el supuesto de tener que hacerlo con intereses y multas, a causa de las altas tasas de inflación, obtenía un beneficio financiero. Además, se sentía estimulado para hacerlo porque pensaba que el gobierno gastaba mucho y mal.

De cualquier manera, esto que acabo de señalar es así. En consecuencia, respecto de este título como de los demás del proyecto, entiendo que no se va a verificar exactamente el ingreso matemáticamente calculado —que resultaría de multiplicar por cuatro, que es el aumento de la alícuota, a la recaudación de 1990— según los datos que me ha alcanzado la subsecretaría respectiva, lo cual agradezco.

En cuanto al título siguiente considero que es muy posible que si en algún momento se produce un incremento en el giro comercial, hecho que se verificaba tradicionalmente a través del movimiento de los bancos, probablemente de ahora en más ello no vaya a ocurrir, con lo cual no se verificaría el pago de este impuesto, incluso para no tener que abonar lo correspondiente a través de los impuestos a las ganancias o el IVA, operándose así fuera del circuito normal.

En lo que se refiere al impuesto a la compra-venta de divisas, donde también se incrementa la alícuota, pienso que constituye uno de los gravámenes más seguros de percibir porque la fuente por donde pasa la divisa —el Banco Central— es la encargada de cobrarlo.

Pero donde hacemos un mayor hincapié es en lo que se refiere al impuesto a los activos. Cuando en diciembre de 1989 se creó este impuesto a través de la ley 23.760, por primera vez por tres años hicimos las críticas pertinentes. Por ello no las voy a repetir y me remito al Diario de Sesiones del día en que se aprobó el proyecto de ley.

Si este impuesto afecta directamente al crecimiento porque afecta a la inversión, con más

razón ocurre ahora, de acuerdo con el 2 por ciento.

Además, debemos decir que como la economía general disminuye en su actividad, al igual que el producto bruto y las inversiones, pero aumenta el parque industrial inmovilizado o de inmuebles de las empresas, como consecuencia de esa disminución, tanto de la demanda como de la oferta de productos a nivel nacional e internacional, la situación resultará mucho más regresiva que antes, cuando lo explicitamos oportunamente.

También en este caso habrá una reacción de los contribuyentes para no hacer efectivo, de alguna manera, el pago de este impuesto; ello, sobre todo, conociendo las deficiencias propias de los entes recaudadores. Y mucho me temo que el monto a recaudar tampoco sea exactamente igual a la cifra determinada.

El cálculo realizado ronda los 300 millones de dólares, de los cuales, a través de la ley de coparticipación, se cubre el 50 por ciento; es decir que así al Tesoro ingresan algo más del 20 por ciento, mientras el resto se distribuye entre las provincias.

Es cierto lo que dijo recién el ministro, que una contribución mayor a las provincias implica un alivio no sólo por el Tesoro, sino también en cuanto se refiere a la presión social. Ello es así en razón de las dificultades que presenta cada una de las provincias en los distintos aspectos, con sus propias administraciones, con los respectivos empleados, los empresarios y proveedores a los estados provinciales, quienes tienen sus economías deterioradas en razón de no cobrar lo que corresponde. Así, esto implica una cadena de situaciones de ruptura.

O sea que, señor presidente, si bien es cierto lo que dijo el señor ministro, también lo es el cálculo hecho aquí y que hemos recibido de parte del Ministerio; justamente, el señor senador por Salta hizo alusión a los 2.250 millones y, por lo menos, 250 millones destinados a las provincias no ingresan al Tesoro. Así, ellas sentirán un alivio, pero de ninguna manera se solucionan los problemas inmediatos del Tesoro ni los déficit.

A veces se dice con alguna ligereza que es necesario reducir los gastos del Estado. Estos vienen disminuyendo prácticamente desde 1984. Hasta ahora teníamos casi un 9 por ciento menos de porcentaje sobre el producto bruto de gastos de la administración nacional. Y se hace cada vez más difícil la disminución; esto ocurre con cualquier administrador que llega a un determinado lugar y quiere reducir los gastos sa-

cando automóviles, algunos teléfonos o no dando café a los empleados. Eso es fácil y algo se logra, pero en la medida en que se avanza en la búsqueda de rubros para obtener menores gastos, se va complicando la cuestión, también a nivel político. Así, en un momento dado, la reducción de los gastos del ente público pasa a ser inelástica.

¿Cómo se realizaba esta financiación en la Argentina desde los años 40 en adelante? ¿Qué ocurría en las épocas que ahora añoramos, las épocas de oro en las que el país estuvo ubicado en el mundo en el séptimo, décimo o decimoquinto lugar como país desarrollado económicamente?

Señor presidente: cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el Banco Central había 2.500 millones de dólares de reserva. Hoy tenemos 3.200 millones. No se trata de una mayor cantidad, y a continuación voy a explicar por qué. Los dólares del año 1946, traducidos a los de hoy, son diez veces más, es decir que el país arrancó en esa época con lo que serían 25 mil millones de dólares de hoy. O sea que en su momento teníamos un Plan Marshall como el que recibió Alemania, con el que hubiéramos podido tener un gran desarrollo nacional y no llegar a esta situación. Ese es un primer aspecto.

En segundo lugar, en 1960, 1961, los déficit presupuestarios se fueron salvando anualmente con las exacciones a las cajas de jubilaciones, cuyo cálculo —realizado hace dos años por la Secretaría de Hacienda de aquel entonces— equivaldría a lo que podrían ser 25 mil millones de dólares hoy.

Agotadas las cajas de jubilaciones, comenzaron otras formas para cubrir los déficit. Desde luego, se trata del incremento paulatino de la deuda interna hacia fines de la década del 70 y principios del 80, como consecuencia del endeudamiento externo y también a posteriori, durante el gobierno de Alfonsín, sobre todo en los últimos dos años, cuando nuevamente se incrementó la deuda interna.

Es decir que cada vez que se agotaba una fuente se buscaba otra posible. Pero cómo hace el gobierno actual, con una reserva de 3.200 millones de dólares, que no son los que pudieron ser en 1946. De cualquier manera esto debe ser bien establecido y cuidado, porque el sistema equivalente al patrón oro indica que la ecuación reserva-base monetaria debe tener una vida activa que está representada prácticamente por el valor del dólar en los mercados nacionales.

Una disminución de las reservas, como pudo haber ocurrido en estos días como consecuencia del pago de los Bónex —salvo que haya otra explicación que yo no conozco— puede aumentar el valor del dólar.

Es decir que en la medida en que ello trascienda con algún aceleramiento producirá inquietud en el mercado, despertando en un momento determinado los saltos a los que estamos acostumbrados, que generalmente son en los meses de enero y febrero, cuando están levantadas las cosechas y comienzan las exportaciones. Entonces, los productores del campo no cobran los montos correspondientes a los nuevos valores del dólar. Habría que ver si en algún otro momento ocurrió de esta manera, pero ahora está sucediendo con una violencia inusitada. Desde luego que también ocurrió en el último año del gobierno de Alfonsín, en febrero de 1989.

Quiero expresar, señor presidente, que el bloque radical, con la concepción política de que jueguen abiertamente las instituciones de la República con sus reglas pertinentes, hará en cada oportunidad las observaciones que estime correspondientes, como en este caso, pero asistirá a las sesiones, a efectos de expresar su opinión para que puedan resolverse los problemas acuciantes que tiene la República.

Recién conversé con el subsecretario Tacchi, sobre otro aspecto que también fue mencionado por el señor senador Romero: el hecho de que va a existir una suerte de listado de contribuyentes donde estarán indicados los montos que paguen por los distintos impuestos, con el objeto de que quien abona más denuncie a quien paga menos cuando se trate de empresas con semejante movimiento. No creo que los argentinos, por nuestra cultura y nuestros defectos, seamos personas que tengamos por costumbre la denuncia. Esto ya está bien señalado en los versos del tango que, de algún modo, resumen las costumbres de los argentinos. Nuestro ciudadano no es "batidor".

Esta es una circunstancia que los académicos deben tomar en cuenta porque los políticos sabemos cómo son estas cosas; se trata de una modalidad de los argentinos.

Veamos qué puede ocurrir si alguien ve en el listado que paga, por ejemplo, mil australes de impuestos y otro que él conoce, que también debería pagar mil, sólo paga doscientos. En este caso, el primero no va a denunciar al segundo sino que va a felicitarlo y va a decirle a su contador que también le haga pagar doscientos porque, de lo contrario, va a contratar

a los asesores de la otra empresa. Esto es una realidad entre nosotros.

El mecanismo que propone el señor ministro es ingenioso pero creo que puede ser aplicable en una sociedad absolutamente solidaria, transparente en su gestión, no evasora de impuestos y con una mentalidad distinta como la nuestra. Aquí debemos respetar nuestra propia idiosincrasia.

Por estas razones siempre me pareció conveniente que los ministros tengan un origen fundamentalmente político; esto que digo no va en desmedro de ninguno de los técnicos que han participado en todos los gobiernos. Me agrada la modalidad del nuevo ministro de Economía por su permanente concurrencia a las reuniones de las comisiones parlamentarias y a las sesiones tanto de la Cámara de Diputados como de la nuestra porque significa que, como hombre político, entiende la modalidad de los diputados y senadores para manejar estos temas. Por eso lo felicito.

Señor presidente: habría muchas otras cosas para decir. Comprendo la urgencia que tiene el gobierno frente a los déficit presupuestarios, a los de caja y a los operativos de la gestión estatal. Sé que hay cifras muy importantes para cubrir y las exigencias son demasiado apuradas como para reflexionar ahora con más detenimiento sobre tantos otros aspectos.

En consecuencia, mi posición es permanente. En primer lugar, no creo que aumente mayormente —algo es posible— el ingreso de fondos al Tesoro por percepción de impuestos por aquello de que, más o menos, siempre se paga lo mismo. En segundo lugar, entiendo que es fundamental que con rapidez se produzca la reorganización de la administración tributaria. En tal sentido, me conformó la explicación que me han brindado al decir que están estudiando en forma inmediata este asunto y que lograrían una ecuación distinta para la administración fiscal, especialmente en lo que hace a la Dirección General Impositiva, en unos nueve meses. Ojalá el señor ministro y el señor subsecretario puedan cumplir lo que están diciendo y que en nueve meses tengamos una mejor administración fiscal y cuenten con el tiempo suficientes para hacerlo.

Sr. Presidente (Menem).—Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, Bloque Autonomista.

Sr. Romero Feris. (Lee)—“Señor presidente: una vez más el Senado de la Nación es convocado para expedirse sobre un proyecto en re-

visión de reforma tributaria sancionado apenas horas antes por la Cámara de Diputados.

El proyecto recibido difiere en múltiples aspectos de la primitiva redacción. Por lo tanto, este tratamiento no será el producto de una serena reflexión en la que se hayan examinado con detenimiento los alcances de las medidas, su proyección sobre las actividades económicas del país, su relación con las demás variables y, en fin, todo aquello que hace que una ley reúna los requisitos que la tornen legítima para todos los habitantes.

Desde hace mucho tiempo el país vive en un estado de crisis y desastre en las finanzas estatales. Siempre bajo la urgencia se sancionan nuevos impuestos o se incrementan los existentes, cayendo habitualmente bajo la gabela aquellos contribuyentes ya gravados, que de tal modo son asfixiados por la presión impositiva.

Todos los años se sancionan una, dos o más reformas a la ley de procedimiento tributario sin que se vean resultados positivos. Dos leyes penales en la misma materia sancionó este Congreso por no parecerle al Poder Ejecutivo suficiente la primera, que vetó.

Pregunto: ¿cuál ha sido el resultado hasta hoy? Ningún caso se ha hecho público y esto significa nada más ni nada menos que el instrumento no ha tenido la utilidad pretendida, básicamente por su desuso.

Se invoca para este tratamiento de urgencia, casi rayano en la desesperación, el déficit fiscal del corriente mes de febrero. Vuelvo a interrogar: ¿de dónde surge dicho déficit? ¿Quién ha autorizado las erogaciones y la aplicación de los fondos recaudados?

Señores: la República carece desde hace dos años de presupuesto y mal podríamos tratar el correspondiente al ejercicio vencido de 1990 cuando es un hecho público que las cifras allí asentadas no se ajustan a lo realmente sucedido. Así no se puede legislar en esta materia ni en ninguna otra.

Con sumo detalle y rigor se discute en este recinto la precisión de una palabra o de una denominación en todo asunto que se considera, y así debe ser. Pero llega el paquete fiscal y en horas —porque ya ni siquiera alcanza a un día— esta Cámara debe prestar su asentimiento, pues de hecho hasta se inhibe la posibilidad de una reforma que retardaría la sanción y por tanto la aplicación de los tributos.

Lo he afirmado con anterioridad en varias oportunidades y lo repito ahora: no prestaré mi apoyo a esta manera de legislar. Muy por el contrario, y aún cuando a través de "concesiones

graciosas" a las provincias —por no usar otras palabras más fuertes— se coacciona moralmente a sus legisladores en busca de la sanción favorable.

Pero las provincias no necesitan de estas dispensas sino que requieren una nueva ley de coparticipación que les restablezca sus legítimos derechos, como vengo reclamando en este Senado y así se ha votado favorablemente la semana pasada.

Queremos discutir esa ley y resulta paradójico que sean hombres del interior quienes, ocupando cargos en la administración central, se olvidan de esas necesidades.

Admito la urgencia del gobierno central en recaudar nuevos fondos. También reconozco la necesidad de una reforma tributaria. Pero ésta no puede ser, de ninguna manera, el fruto de una simple necesidad recaudatoria porque terminará convirtiéndose en un nuevo factor negativo, una muestra más del país de la improvisación y del país de la inseguridad jurídica.

Desde mi incorporación a este Honorable Senado se ha multiplicado la introducción de nuevos impuestos o se incrementaron los ya vigentes. Muy extensa es la lista y abrumaría a este cuerpo con el recuerdo de tantos tributos sancionados. Pero no obstante eso, conviene mencionar algunos de ellos, como muestra permanente de este régimen impositivo irracional y variable, que busca apropiarse de cualquier excedente que el gobierno cree detectar.

Así, en enero de 1988 se sancionó un segundo ahorro obligatorio y se estableció el gravamen sobre los débitos bancarios.

En mayo de 1988 se gravaron adicionalmente los cigarrillos para atender un fondo transitorio de desequilibrios provinciales.

En enero de 1989 se estableció un nuevo impuesto a los intereses y ajustes de los depósitos a plazo fijo bancario. Se modificaron todos los impuestos nacionales —ganancias, capitales, patrimonio neto, valor agregado, débitos bancarios, sellos, internos— y se creó una contribución especial sobre el capital de las cooperativas.

En junio de 1989 se estableció un impuesto nacional de emergencia sobre las ventas realizadas por los productores agropecuarios. Se creó el llamado "título de financiamiento solidario" y se suspendió el beneficio promocional del impuesto al valor agregado.

Además, se modificó el impuesto a la compraventa de divisas y se incrementó la tasa de estadística. Con otros fines, también se sancionó el impuesto destinado a la emergencia locativa, gravando una vez más los intereses de las inversiones a plazo fijo.

En agosto de 1989 se creó por decreto un gravamen de emergencia a los activos financieros, que más tarde, una vez aplicado, este Congreso convalidaría. Pocos días después, con la Ley de Emergencia Económica, se transfirió al gobierno central gran parte del producido de los impuestos a fondos específicos, al igual que a la transferencia de combustibles líquidos derivados del petróleo. Nuevamente era modificada la tasa de estadística, en tanto se suspendía la promoción industrial y minera y se establecía que los reintegros de los impuestos se realizarían con bonos.

En septiembre de 1989 se creó la contribución solidaria para un programa de emergencia social, que se determinaría sobre la base de los ingresos.

Recién en diciembre se sancionó la llamada «reforma fiscal», aquella que reducía los impuestos a no más de cuatro o cinco, cuya estructura sería la simplicidad y la facilidad de recaudación.

Lejos de ello, señor presidente, los sucesivos cambios en el gabinete económico la convirtieron en una nueva sanción de emergencia, con impuestos adicionales a los existentes. Nació así el impuesto a los activos, que hoy se duplica. Quiero recordar que lo rechacé de plano por sus netas características de falta de equidad. También entonces se creó el gravamen sobre los servicios financieros, un impuesto de emergencia —otro más— a los automóviles, rurales, aviones, etcétera. Naturalmente, se aumentaron las alícuotas de los impuestos internos y sobre los débitos en cuenta corriente, pues pasaron del dos al tres por mil, si bien se suspendió el adelanto del cinco por mil a cuenta de ganancias, que hoy se procura restablecer, pero ahora en el nueve por mil, aunque se amplió la posibilidad de su aplicación al impuesto al valor agregado.

Pero ese diciembre fue prolífico en nuestros impuestos: se creó la contribución especial de emergencia sobre capitales y se sancionó la generalización del impuesto al valor agregado, aplicable en primera instancia a la producción agropecuaria.

En febrero de 1990 se accedía al nuevo régimen penal tributario propuesto por el Poder Ejecutivo, sustitutivo del originario sancionado por este Congreso, que, como ya dijera, no ha demostrado al presente su eficacia disuasoria.

En septiembre de 1990 se extendió a los servicios el impuesto al valor agregado, se incrementaron los impuestos internos, gravándose especialmente la cerveza, con particular incidencia en mi provincia, y se establecieron modificaciones en los impuestos a las ganancias, a los activos, a la compra-venta o permuta de divisas.

Toda esta prolífica labor de diseño tributario no ha sido la solución suficiente para el drama fiscal. Si la administración tributaria está desquiciada —según afirmó el señor ministro de Economía, doctor Cavallo, en este Senado—, la reforma pasa por su reestructuración y adecuación a la función que debe cumplir. Resulta paradójico que si el problema central es la evasión —de lo que no cabe duda alguna— se hayan desmantelado sus cuadros superiores con los retiros obligatorios y se pretenda sustituirlos con los funcionarios desplazados de otras dependencias, desconocedores de la materia.

A través de este proyecto se transferirán funciones de la Dirección General Impositiva a los bancos oficiales y se conferirá a estas instituciones facultades de fiscalización cuya legitimidad es cuestionable. Lo correcto sería transferir a dicha dirección los medios y personal equivalentes a los que se piensa disponer.

Insisto, pues, en que no me opongo a la reforma tributaria; pero ella tiene que ser el resultado de un profundo debate donde se hayan evaluado con el más riguroso método, las más estrictas medidas y la prudencia más absoluta los caracteres de equidad y de igualdad de la carga, principios constitucionales que cada vez más son dejados de lado.

Incluso para una reforma de emergencia, como la que en el presente caso se pretende instrumentar, debiéramos disponer de múltiples informaciones, de las que hoy carecemos.

El señor ministro, doctor Cavallo, se había comprometido a suministrar con anterioridad a esta sesión, todo dato que le fuera requerido; sus colaboradores inmediatos iban a concurrir a las comisiones para brindar las aclaraciones que les fueran solicitadas. Ello no se cumplió. Nos quedamos así sin aclarar las cifras relativas al déficit fiscal que se pretende solucionar.

Como ya lo he señalado, en estos aspectos el Congreso se halla a ciegas, pues carece de toda cuantificación de recursos, gastos y necesidades financieras a solventar.

Concretamente, el señor ministro nos debería haber brindado un cuadro, aunque fuera provisorio, de cuál ha de ser el movimiento de las cuentas pública para este año.

Queríamos haber conocido qué ocurrió anteriormente, cuáles fueron los desvíos sobre el proyecto esbozado para 1990 y cómo se distribuyeron y financiaron esas mayores erogaciones. Tampoco conocemos cuál fue la atención de la deuda pública, tanto interna como exterior, y cuáles los montos de intereses pagados y amortizaciones de capital. Asimismo, desco-

necemos qué montos se han diferido para este ejercicio fiscal y para los siguientes, cuánto corresponde a contratistas y proveedores del Estado, cuántas sentencias firmes en ejecución se hallan en suspenso y por qué montos.

Es decir, señor presidente, que el Congreso debería contar con un marco de referencia que el señor ministro de Economía debió haber satisfecho con anterioridad a esta discusión.

En lo que se refiere propiamente a los aspectos impositivos, no cuenta este Senado con los imprescindibles datos oficiales, viéndose obligado a manejarse con estimaciones o estudios particulares.

¿Cuál ha sido en el año que finalizó el comportamiento referido al cumplimiento de los contribuyentes respecto de los impuestos que conforman la parte sustancial del sistema tributario nacional? ¿Cuánto ha sido lo recaudado por los distintos gravámenes y cuál es la estimación del monto previsto inicialmente? ¿Cómo se compone ese universo de contribuyentes y cuál es su grado de cumplimiento? No conocemos los resultados de la generalización del impuesto al valor agregado, cuántos nuevos contribuyentes se incorporaron y cuál es la mayor recaudación obtenida por su intermedio.

No quiero seguir mencionando las incógnitas restantes para no abrumar a los señores senadores; pero no queda duda alguna de que la carencia de dichos datos restringe aún más la posibilidad de emitir una opinión fundada.

También quiero señalar que la urgencia para implementar este incremento en los impuestos existentes se basa en la carencia de crédito del gobierno nacional. La permanente aplicación de medidas compulsivas sobre las inversiones de los particulares ha provocado el hecho de que nadie se encuentre dispuesto voluntariamente a conceder crédito al Estado.

Sr. Romero Feris. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Romero Feris. — Cómo no, señor senador.

Sr. Romero. — Quiero señalarle dos aspectos, señor senador.

Con respecto al presupuesto para 1991, es cierto que fue prometida su remisión para las primeras semanas de este año y ha ingresado en la Cámara de Diputados el viernes pasado. También se encuentra el presupuesto correspondiente a 1990...

Sr. Romero Feris. — Sin tratarse.

Sr. Romero. — Es responsabilidad de los legisladores y no del Poder Ejecutivo.

Sr. Romero Feris. — ¿Cuándo fue enviado el de 1990?

Sr. Romero. — Con relación a lo que señaló el señor senador por Corrientes en materia de la ley penal tributaria, quiero decirle que la DGI durante 1990 efectuó 63 denuncias penales en todo el país, existiendo 11 casos más para ser presentados en los próximos días. Del total, 36 corresponden a la jurisdicción de Capital Federal y Gran Buenos Aires y 27 al interior del país. Hasta el momento se han decretado tres prisiones preventivas.

Lo que acabo de exponer significa que existe un convencimiento y deseo, tanto del Poder Ejecutivo como de la autoridad recaudatoria, de poner en funcionamiento todos los resortes para castigar a los evasores contumaces.

Sr. Presidente (Monem). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Agradezco la información brindada por el señor senador por Salta, pero el hecho de que haya mencionado estas cifras no varía la postura que tengo con respecto a este tema y en cuanto a su resultado.

“Como lo señalé, la permanente aplicación de medidas compulsivas sobre los inversores particulares originó el hecho de que nadie esté dispuesto a conceder crédito al Estado.

Desde la refinanciación de la deuda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por el denominado “festival de bonos” del entonces secretario de Estado de Industria, los inversores sufrieron las consecuencias de sucesivas medidas dispuestas como producto de improvisaciones y como fácil medio para salir del paso. Se canjearon los títulos por otros de distintas características y plazos, siempre compulsivamente, arribando finalmente al canje de los depósitos a plazo fijo por los bonos externos 1989, medida que en su momento consideré inconstitucional y rechazé en este recinto.

Pero despojando de sus bienes a los argentinos, aunque técnicamente lo denominen “punción”, “licuación” o, por qué no, pulverización, el gobierno central se ha quedado sin crédito.

En otro momento, la emisión de títulos públicos, o simplemente letras de tesorería hubiese posibilitado cubrir el desfase financiero. Hoy se ha perdido esta posibilidad que era prácticamente una facultad indiscutible del Estado nacional, siendo que los particulares están siempre atentos para canalizar sus ahorros en la más segura de sus inversiones: la del Estado.

Se ha insistido particularmente en que esta reforma será el modo de canalizar fondos hacia las provincias, dado que éstas son permanentemente demandantes porque no han hecho bien el au...

Voy a enfatizar que esto no sería así si la Administración Central hubiese cumplido en tiempo y forma sus obligaciones.

Me permito recordar el manejo del impuesto a los combustibles realizado durante la anterior gestión, que privó a las provincias de la participación de varios cientos de millones de dólares según lo señaló el actual ministro de Economía, quien en esa época era diputado por Córdoba.

Lo mismo sucedió con la emergencia agropecuaria, que nunca fue abonada.

En aquella época, 1984-86-86, las provincias se vieron perjudicadas y doy el caso de mi provincia, que debió iniciarle juicio a la Nación.

Tampoco las empresas del Estado cumplen sus obligaciones impositivas coparticipables. Y esto, además de no ser culpa de las provincias, las priva de montos sustanciales que, según estimaciones de los ministros provinciales, también sumaban cifras que, de haber sido percibidas, habrían posibilitado a las provincias atender con fluidez sus compromisos.

Pero no sólo no lo hicieron, sino que el propio Estado nacional las ha admitido en la regularización impositiva. Las ha admitido en moratoria postergando así, con prescindencia de la autonomía provincial, su compromiso de remisión de fondos.

Si el gobierno quiere financiar sus empresas no tengo ningún problema en ese aspecto; pero que no lo haga con los recursos provinciales.

Por otra parte, son muchos los fondos que adeuda la Nación a las provincias. Y ni qué hablar de las regalías petrolíferas y gasíferas, donde la apropiación supera no ya cientos sino varios miles de millones de dólares.

¿Qué garantía representa, entonces, para las provincias la distribución automática que prevé esta ley de todos los fondos coparticipables? Bastará que mañana algún inspirado funcionario declare que el Banco de la Nación Argentina se halla fuera de las relaciones técnicas para suspender tal acreditación, como bastó una simple resolución del Banco Central para sacar a los bancos provinciales del "clearing", provocando daños irreparables a las instituciones a raíz de la pérdida de confiabilidad que ello originó.

Sr. Romero. — ¿Me permite una interrupción para hacer una pregunta, señor senador?

Sr. Romero Feris. — ¿Acaso no consideró que estos bancos financian gratuitamente al gobierno con encajes fuera de toda técnica bancaria?

Sr. Romero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Romero Feris. — No, voy a continuar, señor senador, porque creo que hay varios...

Sr. Romero. — Es una pregunta que atañe al tema.

Sr. Romero Feris. — Hay varios oradores que están esperando para referirse al tema. En todo caso, cuando termine, me hace la pregunta que quiere.

Sr. Romero. — Gracias, señor senador.

Sr. Romero Feris. — Y todavía debemos soportar que estos funcionarios hablen de la creación de bancos regionales y de la supresión de los bancos de provincia, como si ellos fueran simples divisiones administrativas del poder central y no representaran los estados soberanos que los constituyeron.

"Parece que el sistema de gobierno representativo, republicano y federal —repito, federal— se les olvida a muchos cuando llegan a la administración central.

Señor presidente: no comparto este modo de legislar. Admito la urgencia y la necesidad de una reforma tributaria, pero no creo que éste sea el camino ni tampoco la solución.

No estoy de acuerdo en seguir transitando el camino de la economía del subconsumo. El único sector que crece en la Argentina es el de la economía informal. Las cifras de la ejercida al amparo —más valdría decir al castigo— de toda la legislación comprensiva de regulaciones, gravámenes y todo cuanto es su normativa, presentan un país en retroceso continuo desde hace dos décadas, de modo tal que el producto per cápita es igual o inferior al de 1970.

Creo que estos incrementos de las alícuotas podrán aportar un principio de alivio en el futuro próximo, pero en un plazo muy breve perderán trascendencia.

Voy a señalar algunas observaciones acerca del articulado del proyecto. Estimo desmesurada la elevación de la tasa aplicable a los débitos bancarios, agravada por la restricción de endosos ya fijada. Gran número de cuentas bancarias no corresponden a contribuyentes que tributen ambos impuestos. Miles de personas cuyo ingreso les excluye de aquéllos se retirarán del sistema o lo reducirán al mínimo posible.

No hay distinción razonable para aquellos casos, como el de los cigarrillos —que afecta en particular a mi provincia—, donde casi un 70 por ciento del movimiento del dinero es impuesto interno, por lo que la tasa efectiva sobre el ingreso neto se cuadruplica sin posibilidad de recupero. Entiendo que debió distinguirse esta situación; y de sancionarse este proyecto de la manera recibida debería enmendarse a la brevedad con una apropiada corrección.

Así caerán depósitos y desaparecerá la financiación gratuita que significa para el gobierno nacional las sumas de los encajes correspondientes, financiación siempre doble porque a la gratuidad señalada se añade la constante licuación derivada de la pérdida de valor de nuestro signo monetario, que durante los veinte meses de la actual gestión ya ha perdido el 94 por ciento del valor recibido.

Esta cifra muestra con claridad el constante fracaso de las políticas instrumentadas, repetición de la anterior gestión que dejó a su vez reducida a menos del cuatro por cien mil la capacidad adquisitiva recibida.

En tanto países vecinos alientan la operatoria bancaria buscando aumentar el grado de monetización de la economía, nuestro país se encapricha —dando prioridad al facilismo recaudatorio— en castigarla, con lo que estamos llegando a un nivel mínimo.

La modificación del impuesto a los activos, consistente en duplicar la alícuota, padece del defecto de atentar contra la equidad e igualdad ante la ley, principio constitucional fundamental de nuestra sociedad, que señalé en oportunidad de su implantación. No todos los activos generan utilidades de entidad similar, y muchos de ellos no son adquiridos con fondos propios. Cuanto más capitales requiero el país, más opuesta se instrumenta la política impositiva.

En cuanto a las modificaciones propuestas para el impuesto al valor agregado, cabe señalar que en su conjunto han perdido relevancia, puesto que la supresión de la autorización al Poder Ejecutivo nacional de incrementar hasta un 25 por ciento la tasa básica, elevada del 13 al 16 por ciento, le resta la discrecionalidad buscada.

Las disposiciones referentes a los contribuyentes no inscriptos han de perder la significación que se pretende, pues a corto plazo se neutralizará el aumento programado, sea por cambio de categoría del contribuyente, sea por su paso hacia la economía marginal.

El nuevo gravamen a la transferencia de inmuebles de personas físicas o indivisas restablece el instituido en oportunidad de la derogación del impuesto a las ganancias eventuales. Como la hierba mala, los impuestos derogados rebrotan constantemente.

En lo que hace al procedimiento tributario, se continúan acrecentando las facultades punitivas del organismo administrador, avanzando peligrosamente sobre la garantía constitucional del artículo 18 y apartándose de la justicia penal cuestiones a ella reservadas.

La eficacia no depende de la mayor o menor entidad de las penas establecidas, sino de que ir al organismo de recursos materiales y humanos que actúen de modo homogéneo, contando con el respaldo y consecuencia de sus autoridades, en lugar de cambiantes políticas como hasta el presente, y dejando de lado costosas campañas publicitarias que han ido en desmedro de la propia administración en la imagen proyectada.

Señor presidente: deseo que ésta sea la última vez que tenga que hacer este tipo de desagradables manifestaciones con motivo del envío de un proyecto del Poder Ejecutivo para intentar hacer frente a la grave situación económica que agobia al país. Debe quedar claro que el recurso constante del "paquetazo" impositivo, lejos de ser una reforma fiscal sólo sirve para paliar circunstancias momentáneas, que al final terminan por agravar todo el cuadro general.

No puede haber una seria política fiscal si no se cuenta en tiempo y forma con un presupuesto estudiado, analizado y aprobado por el Congreso. Tampoco puede haberla si previamente a las medidas fiscales el gobierno no tiene un plan definido en términos económicos y con el suficiente respaldo para que en el conjunto de esa política se implementen medidas fiscales como parte de un programa global que hoy está ausente en este recinto.

Además, de poco serviría contar con ese programa global, o por lo menos con ciertas grandes líneas directrices, si luego en la implementación de esas orientaciones se incurre en improvisaciones y desaciertos que, como reiteradamente lo señalé, restan credibilidad a los propósitos enunciados, siembran dudas sobre la acción de ciertos funcionarios y carecen de efecto para lograr la eficacia necesaria.

Como lo anuncié públicamente, en nombre del Partido Autonomista de Corrientes, voy a votar en contra de este proyecto, no sólo en general, sino también en particular.

Creo que en el país todos estamos haciendo el esfuerzo, de buena fe, para superar nuestra crisis. Creo en las buenas intenciones del Poder Ejecutivo, sobre cuya orientación global acerca de las transformaciones económicas varias veces mencioné que se acercaban al rumbo correcto, aunque discrepara con su instrumentación y con algunas medidas parciales.

Me une una personal amistad con el ministro de Economía, el doctor Cavallo, por cuanto puedo afirmar que no dudo de su idoneidad profesional; y quiero destacar el fervor y la preocupación que está demostrando en estas circunstancias.

Pero, además —y espero que todos me comprendan—, no puedo dejar de ser fiel a mis principios y a las convicciones que honestamente creo que son las mejores para mi país. Son opiniones totalmente personales.

Por eso, el sentido de mi voto negativo, así como el de mi presencia hoy en este recinto, a pesar de descontar el resultado de la votación, es contribuir realmente con mis discrepancias y sugerencias a que el gobierno de la Nación no se repita en sus errores y, por el contrario, que acierte; así, entre todos, podremos encontrar las soluciones inmediatas y de fondo que la angustia de millones de argentinos está esperando.

Señor presidente: para terminar, espero que en la diversidad que permite la democracia encontremos, al final, la unidad necesaria para resolver los problemas de los argentinos y devolverles la esperanza y la tranquilidad para tratar de hacer, entre todos, una patria mejor”.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — (*Lee*) “Señor presidente: la bancada bloquista va a dar su voto afirmativo al proyecto de reforma tributaria que ha merecido ya la sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

Las circunstancias de extrema urgencia que ha invocado el Poder Ejecutivo para reclamar el apoyo legislativo al mencionado proyecto obligan a una rápida respuesta, acorde con el momento que se vive.

Dejando eso aclarado, no podemos, sin embargo, acallar una reflexión que surge de la responsabilidad que hemos asumido como legisladores. No es la primera vez que el Poder Ejecutivo recurre al Congreso a último momento, generando una situación de ansiedad que impide la sana evaluación y discusión de los proyectos. De esta manera, resta al Parlamento una elemental función de deliberación y control sin la cual mal puede cumplir con su cometido.

Pareciera que luego de muchos meses de experimentos económicos, de ajustes que se diluyen sin producir los efectos buscados, de anuncios de éxitos que repentinamente se truecan en fracasos, somos los legisladores los que debemos concurrir a pagar un incendio económico sin posibilidades de un análisis serio de las medidas que se articulan con una indudable improvisación.

Por eso, aunque nuestra intención sea no obstruir, tampoco podemos silenciar una adverten-

cia que nos surge de la rápida compulsa de la documentación aprobada por la Honorable Cámara de Diputados.

Estamos, señor presidente, ante un proyecto fiscalista que no ha contemplado para nada la reactivación de la economía por la que venimos bregando desde hace años. Es un proyecto de apuro, que antepone la necesidad de recaudar más a cualquier otra consideración que pudiera formularse. No importa si las nuevas alícuotas son justas; tampoco importa si el hecho imponible es el adecuado. Menos interesa si el proyecto contraviene los lineamientos de una sana política tributaria tantas veces prometida en el país. Lo único que parece buscar la propuesta del Poder Ejecutivo es que ingresen al fisco, ya mismo, sin deliberación alguna, los fondos que necesita para hacer frente a compromisos impostergables de la Nación. Se ha dicho en apoyo de esta presión psicológica que se ejerce sobre el Congreso, que si el proyecto no es aprobado esta semana la conducción económica no descarta que puedan producirse estallidos sociales. Se ha dicho también que de no votarse ya la propuesta del Poder Ejecutivo, las provincias no recibirán los fondos que debe girarles la Nación.

De esta forma, pareciera que son los legisladores los únicos responsables de las catástrofes que pueden cernirse sobre nuestro país.

Sin embargo, los que cometieron los errores que ahora estamos purgando no sólo no han asumido responsabilidad alguna por la crisis sino que en muchos casos, han sido premiados con nuevos ministerios o con la representación de la República en el exterior.

¿Dónde está el fruto del esfuerzo de los argentinos? ¿Adónde ha ido a parar el producido de los sucesivos ajustes? ¿Qué ha pasado con lo recaudado por la voracidad del fisco, que ni siquiera ha podido mejorar la eficiencia de la Dirección General Impositiva? ¿Quién va a controlar a los evasores si el organismo encargado de tal tarea está en peor situación que hace un año?

Después de un año de soportar los seis planes del ministro Erman González y cuando el pueblo creía que todo iba mejor, un nuevo y feroz ajuste ha demostrado que el esfuerzo y sacrificio de estos últimos doce meses han sido inútiles.

También en los casos anteriores todo se manejó con similar urgencia. También se dijo que los proyectos debían aprobarse sin deliberación. También se prometió que se trataba del último ajuste y de la batalla final contra la

inflación. También se nos dijo que la baja relación del dólar con respecto a nuestra moneda se debía a que el austral se había revalorizado y ahora, de golpe, se nos muestra que ha perdido casi el ciento por ciento de su valor con respecto al tipo de cambio.

Por eso, señor presidente, somos escépticos respecto de la eficacia de esta forma de gobernar. Creemos que los apuros y las urgencias sucesivas sólo permiten gobernar con parches, marchando siempre un paso atrás de las circunstancias.

Si en la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso no se asumen los tiempos propios que requiere el juego de las instituciones republicanas, no será posible brindarle al país la legislación de fondo serena y meditada que requiere. Creemos que precisamente en la ausencia de ese plan maestro y de la concepción global de un programa equilibrado de gobierno reside esta mala costumbre de gobernar a los saltos, con espasmos que generan cada día más inestabilidad.

Si no se encararan las reformas de fondo que el país espera, si no se dictan las leyes con la elemental deliberación que el Congreso requiere, seguiremos con las urgencias y ansiedades, y por cierto esto que estamos votando tampoco será definitivo.

Señor presidente: tal como lo manifestamos al comienzo, el bloquismo va a dar su voto favorable al proyecto del Poder Ejecutivo, reclamando por ello, con la autoridad moral que le confiere no haber realizado nunca una política obstruccionista, que el Poder Ejecutivo administre sus tiempos en el futuro para que el Congreso pueda cumplir cabalmente su deber constitucional y ser digno de la consideración que le merece la República y el pueblo argentino".

Sr. Presidente (Juárez). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Jorge D. Solana.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: no deseo extender demasiado esta exposición, pero no puedo dejar de señalar al iniciar nuestro examen de este proyecto, que se ha repetido muchas veces en este Senado y en la Cámara de Diputados, que esta metodología de dictar leyes "ómnibus" para modificar textos y alicuotas de varios impuestos, hasta que se dicten con bastante retardo los textos ordenados, con-

vierten al sistema tributario en un jeroglífico difícil de descifrar para quienes no son profesionales contables especializados en materia impositiva.

Considerado ese inconveniente, digamos formal, antes de entrar al análisis en particular de las principales normas modificatorias de los textos vigentes, quiero decir que la política tributaria desempeña un importante papel en el éxito de cualquier programa económico global.

Se ha agotado casi totalmente el financiamiento externo y resulta indispensable reducir la posibilidad de utilizar el impuesto inflacionario mediante la emisión de moneda para el financiamiento de un sector público sobredimensionado y con gran rigidez para la baja. Frente a ello ha tenido que utilizarse últimamente el recurso de la postergación de pagos a proveedores, la suspensión de la ejecución de juicios contra el Estado y la cancelación de otras obligaciones mediante la más diversa creación de títulos y bonos públicos.

Hasta no hace muchos años nos preocupaba en el Congreso el déficit de la administración central. Posteriormente nos interesó el presupuesto consolidado que contempla el presupuesto de las empresas del Estado. Finalmente comenzamos a solicitar también el envío, junto al presupuesto, del programa monetario por que consideramos que el déficit cuasifiscal — que es la pérdida del Banco Central — tiene el mismo efecto inflacionario sobre la economía que el déficit de la administración central. Seguramente, nuestro espíritu expresaba aquel principio que se enseñaba en los cursos de contabilidad pública y de finanzas públicas, que se define como de "universalidad del presupuesto".

Ahora ya no nos interesa solamente el déficit fiscal y el cuasifiscal sino también el déficit de Tesorería, es decir, de la caja única que maneja el Ministerio de Economía como consecuencia de las disposiciones de la Ley de Emergencia Económica y de los numerosos decretos que se han dictado posteriormente.

La urgencia con que el señor ministro de Economía nos impulsa a sancionar este paquete de impuestos lo presenta como aquel empresario que, olvidando el resultado negativo de su empresa, emplea casi todo su tiempo en la búsqueda de fondos para hacer frente a su comprometida iliquidez de caja o en la colocación de documentos que le permitan, como se dice, tirar para adelante, no pudiendo atender prioritariamente el buen manejo de su negocio en el aspecto productivo.

Es de esperar que en esta llamada primera etapa de su gestión, el señor ministro alcance a recaudar la suma que ha previsto, que incluso ha sido puesta en duda —según comentarios periodísticos— por alguno de sus importantes colaboradores, para poder cumplir con los compromisos inmediatos e ineludibles: pagos de los servicios públicos, ayuda a las provincias con el mismo fin, atención de las prestaciones previsionales, pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa y el aporte necesario para paliar la situación de los grupos carenciados a través del Ministerio de Salud y Acción Social.

Si el señor ministro no llegara a recaudar la suma prevista, sería ya imprescindible que se nos aporten cifras confiables sobre la mentada evasión fiscal, cuyos porcentajes sobre la potencial recaudación tributaria aportados por distintos funcionarios y medios de difusión han sido siempre contradictorios. También resultaría necesario que se nos pongan a nuestro alcance, como lo han reclamado otros oradores preopinantes, los elementos que permitan evaluar el porcentaje de caída de recaudación, que obedece al estado de recesión por que atraviesa nuestra economía.

Esperamos ansiosos la segunda parte del programa del señor ministro de Economía, una vez solucionado el problema de caja, que con tanta crudeza nos ha pintado en sus intervenciones públicas recientes y en sus contactos con nosotros de manera especial. Asumiendo una posición optimista, destaca la manifestación que ha hecho ante los señores senadores nacionales en el Salón Rosado, donde expresó que tiene la íntima convicción de la necesidad de crear las condiciones de estabilidad económica como prerequisite para intentar el crecimiento, porque la estabilidad —según dijo— ya es crecimiento.

Agregó que además de la estabilidad económica, que aporta un alto grado de confianza y en la cual tiene mucho que ver la política cambiaria y monetaria y la tranquilidad social, si se consiguen evitar las consecuencias propias de una inflación en alza, que son las demandas para que se indexen los salarios, se requiere también un alto grado de confiabilidad política, es decir, el encuadramiento de los actos de gobierno dentro de la Constitución y de las leyes.

Si tales objetivos se consiguen, estimo que el país podrá contar con el caudal de inversiones internas y externas, públicas y privadas, que podrán impulsar el crecimiento económico que anhelamos.

Antes de hacer algunas consideraciones en particular sobre los impuestos que se modifican

en sus textos o en sus alícuotas —tarea nada fácil, por cierto, por el hecho de que sólo hace algunas horas entramos en conocimiento de la sanción definitiva de la Honorable Cámara de Diputados—, debo señalar que en términos generales no puede cuestionarse que este paquete impositivo signifique una traslación importante de recursos del sector privado al sector público que provocará impulsos inflacionarios y/o recesivos y que afectará tanto al consumo, por la caída del salario real, como también a la inversión privada por la gravosa imposición sobre los activos, inversión que, como hemos dicho, es esencial para el crecimiento económico al que todos aspiramos y que nunca se concreta.

Si la situación de emergencia no nos hubiera obligado a sancionar estas normas con tanta premura hubiéramos podido, quizá con más tiempo, disipar algunas dudas e inquietudes que nos crea el proyecto en consideración, sin posibilidad de esclarecernos totalmente en este momento. Tal vez hubiéramos podido determinar si las disposiciones de este paquete impositivo anulan o erosionan el mejor tipo de cambio real que reciben los exportadores con motivo de la devaluación del austral, que ha llevado el dólar de 5.000 australes por unidad a casi 10.000; además, señalo si no hubiera sido deseable obtener más recursos para el Estado, como consecuencia de la desregulación petrolera, de los que se obtendrán del aumento de la alícuota del impuesto a los activos; calcular en cuánto afectará el volumen de las transacciones comerciales institucionalizadas a través del pago con cheques en favor de las transacciones informales que eluden su utilización; obtener datos fehacientes sobre el efecto que con respecto a los precios tendrá una tasa diferencial del IVA del 25 por ciento sobre las tarifas de servicios públicos y sobre las ventas de contribuyentes no inscriptos; establecer si es equitativo y pertinente incrementar la alícuota del impuesto a los activos en base a la hipótesis que formula el Poder Ejecutivo de que el monto del activo sería un buen indicador de una renta presunta; determinar con tranquilidad cuál debería ser el andamiaje legal de la promoción industrial que contemple los objetivos de fortalecer el crecimiento del interior con un costo fiscal que no comprometa el equilibrio de las finanzas del Estado.

No creo haber agotado todas las connotaciones que lleva aparejadas el proyecto que estamos considerando. Espero que con el transcurso del tiempo, luego de puesta en marcha y superada la situación de emergencia, podrá el Poder Ejecutivo proponer al Congreso, si no el tan ansia-

do régimen tributario que no requiera parches parciales cada dos o tres meses, por lo menos corregir las desviaciones que pudieron producirse con motivo del apresuramiento con que fue estudiado y habrá de sancionarse.

En efecto, un análisis general de la reforma lleva a la conclusión de que se trata solamente de medidas fiscales de emergencia para el corto plazo. Sin embargo, no he visto que se haya anunciado una reforma tributaria más profunda, al menos en sus lineamientos fundamentales, aunque podría deducirse que se piensa en ello para más adelante, ya que en las conversaciones que ha tenido con nosotros el señor ministro ha reconocido lo excesivo de ciertas alícuotas y la justicia de rebajarlas en el futuro, cuando mejore la situación fiscal.

Es indudable que el sistema impositivo actual requiere profundas modificaciones que revaloricen la recaudación y armonicen los tributos sobre rentas, consumos y patrimonios, dejándose de lado tributos generalizadamente reconocidos —aun por las autoridades que los aplican— como obsoletos y obstaculizantes de la actividad económica productiva, tales como el impuesto de sellos, el impuesto a los débitos bancarios y el impuesto sobre la transferencia de títulos valores.

Pero lo que califico como aconsejable debe incluirse en un plan a mediano plazo, que es el que no vemos diseñado, que permita considerar lo que hoy votamos como un remedio simplemente coyuntural y que responde a una situación extrema de emergencia. En el corto plazo, en cambio, resulta importante otorgar la mayor estabilidad posible al sistema actualmente vigente para no desarticular gravemente los métodos y mecanismos de recaudación, sin perjuicio de los ajustes que la experiencia indique como necesarios.

En este último sentido, comprendo la intención de buscar nuevos caminos que impidan una evasión, que todos sabemos que existe en grado que presumimos importante, pero sobre la cual se aventuran cifras cuyos fundamentos nadie ha podido explicar verazmente. Estamos todos de acuerdo en que el sistema actual resulta insuficiente para que paguen todos los que deben hacerlo y seguramente en la medida en que a cada uno le corresponde. Pero participo de las dudas de quienes observan con escepticismo las facultades que el proyecto en consideración otorga a la Dirección General Impositiva de delegar en instituciones bancarias atribuciones privativas de ella, en la medida en que lo hace. Una cosa es colaborar en la recep-

ción de las declaraciones, en el control de que las mismas se efectúen y en la percepción de los tributos, y otra muy distinta es la fiscalización de su contenido y correcto encuadramiento legal, calidad esta última que exige el tecnicismo y medios adecuados del organismo recaudador específico.

La urgencia de este debate, que nos ha permitido escasas horas para el estudio de estas complejas normas, me impide realizar un examen exhaustivo o cuando menos más completo sobre sus diversas disposiciones y los efectos que las mismas puedan tener en la actividad económica y en el porvenir de miles de contribuyentes, grandes, medianos o pequeños, que sin duda se verán afectados en los proyectos de desarrollo y nuevas inversiones.

Señor presidente: reitero que las escasas horas que hemos tenido para cotizar la sanción de Diputados, incluso las modificaciones que dicha Cámara introdujo al proyecto del Poder Ejecutivo y al despacho de comisión, dificultan un examen minucioso de las disposiciones en análisis. Por esa razón no podré efectuar de modo exhaustivo el examen de todas las normas proyectadas, limitándome a señalar algunos aspectos parciales de las mismas.

Me voy a referir al impuesto a los débitos en cuentas corrientes y otras operatorias. Sin duda —prácticamente lo ha dicho con lealtad el señor ministro—, el espíritu que guía en este caso a la elevación de las alícuotas es el de aprehender un tributo de fácil percepción, también de manera inmediata, con bajo costo de administración tributaria, evitar la evasión de otros impuestos o, cuando menos, tratar de evitarla en el caso concreto del IVA y del impuesto a las ganancias.

Con ese objeto se pretende aligerar la carga impositiva, permitiéndose una compensación para el contribuyente que deba pagar luego aquellos impuestos. Pero se trataría sólo de una compensación parcial que alcanzaría al 75 por ciento en el caso de la alícuota mayor y al 50 en el caso de la alícuota reducida.

Pienso en el efecto negativo que, no obstante la parcial equidad que se prevé en materia de compensación con otros impuestos, traerá la aplicación del que comentamos.

Veamos el caso de una empresa que recién se constituye. Ocurrirá que no devengará ganancias gravadas, que va a tener crédito fiscal por el impuesto al valor agregado, situación que transforma en nula la compensación parcial que permite el proyecto. Y si bien dicha compensación es trasladable a ejercicios futuros, de manera ac-

tualizada, soportará mientras tanto la elevada exacción de este tributo.

Si queremos estimular la formación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son tan importantes en el interior de nuestro país, creo que debería contemplarse esta situación de inequidad que dejo planteada.

Además, como lo han dicho también algunos de los oradores preopinantes, es previsible que se acuda a una formalidad de pago y de comercio extrabancario para evitar el tributo, lo que no es aconsejable pues la clandestinidad puede tentar también a un incremento de la evasión que se pretende combatir.

Veamos también el caso de las grandes empresas. Si bien es cierto que aquí la compensación se va a producir pues pagan el impuesto a las ganancias y el IVA, quedará siempre un porcentaje no compensable, que por el volumen de cifras que dichas empresas mueven —por ejemplo, pago de salarios, servicios eléctricos, otros impuestos y obligaciones comerciales de diferente índole— forma un circuito bancario que rendirá jugosos impuestos, pero dejará —como dije— un saldo no compensable que por su magnitud puede afectar muy nocivamente aun a firmas desarrolladas y de sólida posición patrimonial, cuyo destino interesa también al país. Todo esto sin perjuicio de la compleja relación que exigirá asistencia profesional muy avezada en la aplicación de este tributo, sin que puedan excluirse errores involuntarios.

En la consideración de las disposiciones referidas a los impuestos a los activos, cabe a mi lealtad como representante de una provincia destacar que me satisface que la parte sustancial de los recursos que se prevén será destinada a paliar las notorias dificultades que sufre el interior del país, que es como decir el país mismo, propenso en circunstancias de crisis a estallidos que pueden alterar la paz social. Pero con igual lealtad no puedo dejar de considerar las críticas que ha receptado la opinión pública ante evidentes y nocivas consecuencias que se originan en el incremento de alícuotas y en la falta de consideración de la real situación patrimonial que surge al fijar como hecho imponible solamente a los activos. Esto último puede llegar a ser notoriamente injusto y hasta fatal para la estabilidad de las empresas de toda envergadura cuando la magnitud de sus quebrantos o pasivos hagan ilusoria la solidez de ellas.

Quizá pocas síntesis sean tal elocuentes como las que expresó ayer un prestigioso matutino cuando al comentar las normas a que me refiero decía textualmente: "El impuesto sobre los ac-

tivos, que hasta ahora tenía el carácter de un anticipo del impuesto a las ganancias, tomaría el carácter de principal y el impuesto a las ganancias se convertiría en anticipo del impuesto sobre los activos.

"Lo que se grava, pues, no es ya la utilidad del capital que es lo único que en rigor constituye genuina capacidad contributiva, sino el capital de las empresas; y ni siquiera su patrimonio neto, ya que no se descuentan los pasivos, sino el volumen total de los activos, independientemente de su capacidad de generar ingresos; y aun cuando las circunstancias les impongan eventualmente soportar quebrantos."

Por mi parte debo agregar que este impuesto que ahora se eleva del 1 al 2 por ciento viene a vapulear de nuevo los activos y el patrimonio de los contribuyentes empresarios que el año pasado vieron duplicadas sus alícuotas por el decreto 435/90 en el hoy derogado impuesto a los capitales.

La inequidad de este incremento que ahora se sanciona merece otra reflexión. Si bien es cierto que para los nuevos emprendimientos se establecen normas especiales para tales inversiones, no existe equidad para los proyectos de larga maduración y suma envergadura realizados anteriormente. Llamo la atención porque el propio señor ministro destacó ante nosotros el loable propósito de sancionar por ley y no por decreto normas que den seguridad y reglas claras. Esto significa, en otras palabras, la seguridad jurídica que exige todo inversor potencial. Seguramente quienes antes invirtieron en esos proyectos de larga maduración lo hicieron confiados en que se tendrían en cuenta los riesgos y sacrificios de la fe depositada en el resultado final, aplicando un cálculo razonable para la inversión y evolución de sus empresas.

Pero con esta norma se golpea muy fuerte la fe de quienes confiaron en reglas claras. Y creo que deberá tenerse en cuenta esto de sancionarse las normas proyectadas para buscar soluciones equitativas que reemplen la fe de los inversores.

La inequidad de esos sectores que deben pagar este impuesto sin poder absorberlo contra el impuesto a las ganancias durante los años que no tengan producción resulta patente frente a otros sectores de más rápida recuperación del capital.

De no permitirse excluir del impuesto a los activos afectados en la forma aludida sería justa una nueva norma que permita que los excedentes del impuesto a los activos no cubiertos por el pago a cuenta del impuesto a las ga-

nancias puedan ser imputados sin límites en ejercicios siguientes, recién cuando los beneficios previstos comiencen a devengar la obligación del impuesto a las ganancias correspondiente.

Me siento obligado a decir algo con respecto al impuesto al valor agregado y las modificaciones que en el mismo se proyectan. Tales son, por ejemplo, el incremento de la alícuota general —si bien es cierto, pequeño— del 15,6 al 16 por ciento; el establecimiento de una alícuota diferencial del 25 por ciento para determinados servicios públicos —electricidad, telecomunicaciones, agua corriente— facturados a las empresas y el sustancial incremento de la presunción legal para los responsables no inscriptos, del 20 al 50 por ciento.

Este aumento en el monto y en la cantidad de los afectados traerá necesariamente un encarecimiento de productos y servicios que, a breve plazo, influirá en la situación económica de la población, con la temida inflación, produciendo efectos no deseados en los salarios y en la economía familiar.

Desde luego que el impuesto no incidirá directamente en los particulares, porque así lo prevé con buena inspiración el proyecto. Pero lo que me preocupa es que al incidir indirectamente en los costos de las empresas, ellos serán trasladados al precio de los productos.

También voy a tocar un tema que anteriormente ha sido criticado y que está incluido dentro de la ley de procedimiento tributario.

En el artículo 19, punto 5º del proyecto que consideramos se propicia modificar el artículo incorporado a continuación del número 78 por la ley 23.314, estableciendo que el recurso de apelación que se interponga contra la sanción de clausura sólo será apelable con efecto devolutivo. El texto en vigencia establece, en cambio, que el recurso se otorga con efecto suspensivo.

El otorgamiento del recurso de apelación con efecto devolutivo importa la ejecución de la sentencia durante la sustanciación del recurso de apelación. Su mayor inconveniente —recuérdese que me estoy refiriendo a los casos de clausura— reside en que la ejecución de la sentencia puede ocasionar perjuicios verdaderamente irreparables, aun en el supuesto de que prospere la apelación.

Es así porque en materia procesal la procedencia de este recurso con efecto únicamente devolutivo se confiere en aquellos casos en que es precisamente viable retrotraer la situación —si prospera la apelación— sin ocasionar

perjuicio. Pero no es ésta la situación que se presenta en el proyecto que consideramos.

Hay dos razones serias que fundamentan mi observación. En primer lugar, la sanción de clausura es una sanción sumamente grave que, al margen de los perjuicios económicos que pueda ocasionar, puede provocar una serie de perjuicios irreversibles no sólo para el establecimiento clausurado, sino también para los trabajadores que dependen de él, que se van a ver privados de una fuente laboral y, desde luego, hasta para la propia comunidad, que podrá verse privada de elementos indispensables para mantener su calidad de vida. Tal sería, por ejemplo, el caso de la clausura de un establecimiento productor de material farmacéutica, de remedios o de drogas.

En segundo lugar, porque la sanción de clausura que comenzaría a ejecutarse no provendría de un órgano judicial sino de un órgano administrativo, con la consiguiente lesión para los derechos constitucionales. Me refiero concretamente al artículo 18 de la Constitución Nacional.

Sr. Romero. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Con todo gusto, señor senador.

Sr. Romero. — Hay que señalar dos aspectos respecto de lo que está comentando el señor senador por Corrientes.

En primer lugar, con respecto a que la ley prevé que la apelación es con efecto devolutivo, si el juez considera que puede ser de grave perjuicio esa clausura inmediatamente ordenará la apertura, lo cual será antes de que venza el plazo de la sanción. Obviamente, si la resolución judicial se produce con posterioridad a los diez días, el daño está producido. Pero si fuera con efecto suspensivo ocurriría lo mismo, porque también podría demorarse el reconocimiento judicial.

En lo que se refiere al riesgo para los trabajadores, entiendo que queda minimizado porque usted bien sabe que las leyes laborales prevén que si la sanción no se produce por culpa de los trabajadores, ellos no pueden perder el salario caído durante los días en los cuales el negocio estuvo cerrado.

Sr. Presidente (Solana). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — No me convence el señor senador porque una cosa es la letra de la ley y otra cosa es su aplicación práctica.

Si tuviéramos la certeza de que los miembros del Poder Judicial, dentro del cúmulo de

tareas que los acosan, van a actuar de inmediato y evitar un perjuicio irreversible, podría tener entidad lo que dice el señor senador. Pero sabemos que esto no es así.

Y en cuanto a que la ley prevé que los salarios se van a abonar, ello es cierto en la medida en que la empresa no se vea irremediamente perjudicada en su situación económica. Y no estamos precisamente viviendo momentos de holgura en esta materia.

Sr. Romero. — ¿Me permite otra interrupción, por última vez, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Sí, señor senador.

Sr. Romero. — No quiero establecer un diálogo, señor presidente, sino simplemente expresar que no debemos creer que acá estamos protegiendo a una víctima. La víctima es la comunidad cuando alguien no paga sus impuestos o no cumple una obligación impositiva. En ese caso es un infractor y considero que debe tener alguna sanción.

Entonces, no debemos pensar que el pobre comerciante al que se le ha cerrado un negocio es una víctima del Estado. Por el contrario, toda la comunidad es una víctima de los que incumplen sus obligaciones tributarias.

Debemos ejercer un buen control para aplicar un castigo al infractor. Y debemos transmitir a la sociedad el pensamiento de que así como está mal matar, no pagar los impuestos debe ser mal visto también. No sé si es de la misma entidad pero debe constituir un disvalor.

Por otra parte, no tenemos que estar pensando sólo en que una clausura no tiene que significar un perjuicio, ya que mayor es el daño que causa a la sociedad aquel que no cumple con su obligación tributaria. A su vez, confiamos en que esto no sea aplicado de manera injusta.

Sr. Aguirre Lanari. — Personalmente, prefiero que esa sanción la aplique un órgano judicial y no uno administrativo, porque entiendo que estamos dando entidad y funciones judiciales al órgano administrador, lo que expresamente prohíbe la Constitución.

Sr. Britos. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Con mucho gusto.

Sr. Britos. — Señor presidente: quiero ampliar la visión sobre este tema, dado que tenemos antecedentes de lo que está ocurriendo con algunas empresas.

En efecto, existen en el país más de 500 firmas de las denominadas líderes, que constantemente violan las obligaciones que tienen con el Estado, especialmente, con la seguridad so-

cial. Ellas adeudan más de 500 millones de dólares y cada vez que se plantea el problema amenazan con el cierre de la fuente de trabajo. Por eso el sistema de seguridad social está casi quebrado.

Sr. Presidente (Solana). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes, a quien le ruego que no admita más interrupciones.

Sr. Aguirre Lanari. — Le agradezco la preocupación a la Presidencia pero no me molestan las interrupciones.

En cuanto a las manifestaciones del señor senador preopinante, le respondo que coincido con él pero entiendo que esa cuestión no tiene relación con lo que estamos debatiendo. En todo caso, si las empresas no realizan el cierre, esto termina haciéndolo el poder administrador, con lo cual llegamos a un efecto que todos queremos evitar.

Señor presidente: creo que ninguno de los aquí presentes —y lo incluyo al señor ministro— se siente satisfecho de tener que apelar a estas normas para paliar una emergencia. Nadie ha querido esta situación y a ninguno le gusta contribuir, aunque sea con su voto contrario pero sí con su presencia, a la sanción de medidas o soluciones que, en el mejor de los casos, son opinables o cuestionables.

Pero está también presente nuestra propia responsabilidad legislativa, que en la aceptación o en el disenso obliga nuestra presencia y nos convoca al debate. Junto a los legítimos escrúpulos, de cualquier índole que sean, sentimos también a nuestro lado a los afectados, a muchos millones de seres que ven aproximarse la finalización de los meses con la angustia de previsibles carencias del Estado nacional y de los provinciales para atender obligaciones insoslayables en el pago de los servidores públicos, en la atención de la salud y la seguridad de sus habitantes; aspectos todos cuya custodia no puede rehuirse sin caer en una anarquía de imprevisibles consecuencias.

Esto que podríamos llamar un sacrificio, por la mayor presión tributaria, pretende cubrir una grave coyuntura en la que es de desear —y así lo espero— que no se cumplan los vaticinios de quienes consideran que tal esfuerzo no alcanzará a superar cifras realmente modestas frente a la magnitud de las urgencias.

Es de desear también que todos reflexionemos sobre la experiencia que estamos transitando, de que ésta sea sólo una solución de la coyuntura, pero la última de las muchas y reiteradas que hace mucho se vienen produciendo e intentando paliar. Durante años los gobiernos se su-

ceden pidiendo más sacrificios al contribuyente, poniendo énfasis para restablecer el equilibrio con el aumento de los ingresos tributarios y no tributarios, sin conseguir igual efectividad en la disminución de los gastos.

Admito y sé muy bien que bajar gastos no resulta fácil ni mucho menos placentero para los encargados de ejecutar esa tarea. Cuando ayer interrogamos al señor ministro sobre este aspecto nos dijo que podía hacerse esta reducción. Seguramente, coincidiremos en que para conseguir este objetivo no debe apelarse más a la postergación de las obligaciones del Estado frente a sus acreedores o a la expropiación de los ahorros privados, porque no habrán de alcanzarse las metas anheladas si se lesiona la seguridad jurídica que es vital en esta materia.

Si queremos estimular las inversiones que reclamamos, si pretendemos que vengan desde afuera los inversores o que repatrien sus capitales los propios argentinos, debemos brindarles la seguridad jurídica de un Estado alejado de pleitos nacidos de su propio incumplimiento. Desde luego que no es tarea fácil; pero resulta ineludible para que estas nuevas sangrías impositivas no resulten simples parches respondiendo sólo a la coyuntura.

Confiemos y descemos que las próximas sanciones tributarias nos permitan salir gradualmente de ella, para construir un régimen orgánico, armónico, equilibrado, con la actuación de un organismo recaudador de eficiencia justiciera para llegar a la estabilidad y a través de ella a la reactivación tantas veces requerida.

Con estas salvedades, apoyo en general el proyecto que consideramos, sin perjuicio de las notorias disidencias que dejo señaladas para mi voto en particular.

Sr. Presidente (Solana). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Sapag. — Señor presidente: nuestra preocupación por el Estado grave que vive el país en su economía, nos lleva al terreno de preguntarnos si este proyecto, en esta emergencia, va a solucionar los graves problemas de nuestros jubilados, de nuestros trabajadores, de nuestros contratistas, en buena hora sea.

No es de mi interés analizar el pasado, y si ha habido éxitos o fracasos, me preocupan el presente y el futuro.

Esto tiene que ver con un sentido de la realidad; soy un hombre del interior, de una provincia andina patagónica, en donde las necesidades se multiplican por las distancias, por los climas, por la producción difícil, lo que contribuye a

que necesitemos el éxito del gobierno y de la República.

Nosotros, los hombres que representamos al Neuquén, queremos poner nuestra fuerza de legisladores, aprovechando la presencia del señor ministro con un equipo nuevo, para encauzar al país en su normalización, tratando diferentes puntos, sobre cómo podemos producir riquezas, sobre cómo el país volverá a abrir sus fábricas, sus campos, sus obrajes, y ello para volver a tener recursos genuinos, con el objeto de que no discutamos más si un proyecto está de acuerdo o no con los conceptos que he escuchado anteriormente.

Nuestra patria, nuestro país, es tan rico como el más rico del mundo. Las dificultades que se presentan son muy simples si solucionamos la coyuntura. A nuestro entender, la cuestión financiera radica en cómo estabilizamos la economía de la República para que el crédito vuelva a ser motivo de que nuestras empresas reinicien la producción y para que nosotros aportemos nuestros impuestos sin necesidad de que seamos evasores. Ahora recibimos el mote de evasores porque no tenemos con qué pagar, ya que la República está en quiebra en cuanto a su situación económica.

Vengo de una provincia que no tiene recesión. Pareciera incongruente decirlo en este momento: produce 50 millones de metros cúbicos de gas por día, 30 mil metros cúbicos de petróleo por día, el 70 por ciento de la energía del país nace de El Chocón-Cerros Colorados.

¿Cómo se puede decir que nuestro país no puede hallar los caminos para estabilizar su vida en lo que respecta a salarios, a nuestra moneda, a los valores de consumo que se remarcan sin lástima y que destrozan totalmente la acción del gobierno que quiere encontrar la solución buscando el equilibrio? Pareciera que quienes remarcan no tienen el sentido de que es anti-patriótico hacerlo, cuando realmente se está imponiendo un flagelo a la gente de trabajo.

Nosotros, los hombres de la Patagonia, entendemos que nuestro objetivo debe ser reactivar nuestras riquezas. Los recursos naturales que tenemos son inmensos y en esta circunstancia especial que vive el mundo deberíamos ponerlos rápidamente al servicio de nuestras provincias y, por supuesto, de las naciones sudamericanas u otras para que se pueda valorizar nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra energía y así contar con más recursos.

No vamos a solucionar el problema del país discutiendo las leyes ni los reajustes, sino a través de entradas o recursos genuinos que nos per-

mitan afrontar nuestras obligaciones con honor, tanto en el exterior como también en el interior. Ello hace que yo pida al señor ministro, si me permite, que se haga el esfuerzo necesario para que nuestras petroquímicas —las proyectadas y las que están en actividad— se pongan inmediatamente al servicio de esa transformación de las grandes riquezas que crearán recursos. Al mismo tiempo, que nuestro país tenga un crédito razonable que no permita que los intereses destruyan el capital y que, sin ninguna duda, la fuerza de nuestro trabajo se valore y que no nos encontremos en situaciones de quiebra como en este momento.

Por ello he dicho que es inútil discutir qué pasó y por qué los ajustes anteriores no sirvieron. Es importante decir que este ajuste es para una emergencia, para solucionar los problemas de nuestros jubilados y de la gente necesitada, de nuestros trabajadores, que están sufriendo las consecuencias. No me preocupo por las grandes industrias que pueden y deben soportar la situación para poder colocar al país en el nivel que corresponde, las que no deben pensar solamente en su beneficio sino también en los de la República.

Los hombres de la Patagonia sabemos que allí hay grandes riquezas. Mi provincia tiene yacimientos de gas que están esperando los polos petroquímicos por cifras que no voy a repetir porque parecerían andaluzas, pero se trata de cientos de miles de millones bajo tierra esperando ser explotados para servir a la República.

Repito que eso es lo que más nos importa: poder servir al país. No es solamente con impuestos ni atacando la evasión, ni discutiendo si somos hábiles en la "bicicleta" de la moneda sino que se trata de volver a trabajar. Hagamos honor a nuestros abuelos y a nuestros padres, que poblaron este país y lo transformaron con esfuerzo y trabajo en uno de los más importantes del mundo. No esperen que venga dinero desde afuera de la República si no estabilizamos el interior. Únicamente contamos con nuestro propio esfuerzo, nuestra propia modestia para empezar de nuevo, y acumular riquezas a fin de lograr los beneficios necesarios para que la República retome el camino que le corresponde.

Apoyamos plenamente este paquete de proyectos de ley con la confianza absoluta de que es la ayuda que el gobierno necesita para caminar hacia adelante. Pero lo que más pedimos es que se tengan en cuenta los grandes objetivos que son indispensables para crear riquezas porque, únicamente creando riquezas, vamos a poder solucionar los problemas del país.

Sr. Presidente (Solano). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrère. — Señor presidente: mi exposición va a bajar de tono; va a intentar reducir el dramatismo del escenario que se ha creado en la Argentina con respecto a la discusión de este paquete impositivo.

No traje nada escrito porque no es mi costumbre y porque, además, no sabía a ciencia cierta si iba a intervenir en este debate. Decidí incorporarme a él con algunas reflexiones al conocer que iban a ser escuchadas por una parte del gabinete nacional y, específicamente, por el señor ministro de Economía.

Frente a la enorme cantidad de datos difíciles y dramáticos que nos ofrece la realidad creo que hay, sin embargo, un hecho positivo. Me refiero a que las dos fuerzas políticas mayoritarias del país han sido gobierno y oposición, enfrentando la misma crisis. En consecuencia, podemos dimensionar mejor el sentido de nuestras palabras, de nuestras críticas y también de las promesas e ilusiones. Tan es así que a muchos ya se nos ha hecho una especie de rito repetido ver desfilar cada seis u ocho meses a los oficialistas de turno frente a los opositores de turno para que se pueda sacar rápidamente el paquete de leyes de turno que permita normalizar la crisis coyuntural de turno.

El hecho de que sea un rito repetido, como dije unas sesiones atrás, no invalida la sensación de que algunos de nosotros tengamos casi un problema existencial.

Ocurre que cuando pensamos en las cosas del país en la soledad de nuestra reflexión, cuando meditamos sobre lo que pasa para escribir un artículo o un libro, tenemos necesidad y obligación de levantar la mirada y de contar con un horizonte temporal que trascienda muchas veces los empujones del momento presente. Cuando llegamos al recinto y a la función pública se nos empujan los pies porque la cantidad enorme de problemas coyunturales nos obliga a mirar hacia abajo y no hacia el horizonte. El hecho de que hoy se encuentre en el Ministerio de Economía alguien que es académico, que ha escrito libros, es bueno porque, como hoy debe enfrentar problemas de coyuntura, nos puede ayudar a la reflexión conjunta y a descubrir dónde está el drama del país, haciéndonos sentir menos inútiles.

Yo veo —tal vez esto mismo les pase a los colegas de mi bancada y a los de otros partidos— que si hacemos un corte para analizar la situación de la Argentina en 1983 y hoy, habiendo gobernado unos y otros, advertimos

que ha habido un retroceso, una pérdida de posiciones y una decadencia casi constante. Ya no se trata del fracaso de ustedes o de nosotros sino que es el fracaso de todos.

Esto es lo que nos obliga a tratar de unir los problemas de la coyuntura con aquella meta de la Argentina deseable que nos llevó a todos nosotros a hacer política.

Como lo decía emotivamente el señor senador por el Neuquén, la discusión del paquete impositivo es casi un problema menor. La discusión grande es decidir qué país queremos hacer, cuáles son las reformas que queremos llevar adelante y cuáles son los sustentos políticos necesarios para apoyar dichas reformas.

La coyuntura nos obliga a buscar fondos ya para pagar los sueldos; si no hay dinero, de algún lado hay que sacarlo. Pero si no unimos nuestros esfuerzos con la meta de trabajar en conjunto, vamos a ir perdiendo cada vez más ese crédito político que, en última instancia, es lo que se puede trasladar a la gente manteniendo la ilusión viva de que el sacrificio que hace vale la pena, que el hecho de que hoy sufra tiene como contrapartida que mañana estará mejor. Si no unimos la meta con la coyuntura, el sacrificio únicamente logra agrandar la desesperanza.

Por eso creo que es necesaria alguna mención de la Argentina que ambicionamos, a la que ha hecho referencia el señor senador por el Neuquén: la que está en el fondo del corazón y del razonamiento de todos nosotros; la que tiene que empezar por medidas de transformación que hace años unos y otros estamos tratando de impulsar, incluso desde el advenimiento de la democracia.

Ayer escuché al señor presidente de la Nación decir que el modelo económico es innegociable, y a continuación hizo dos o tres menciones. Expresó que no se va a cejar en la lucha por la reforma del Estado, por controlar el déficit fiscal y por la apertura económica. Lo escuché y dije: "¡Pucha! Si éste es el modelo económico, yo estoy de acuerdo". Entonces, ¿cuál es la diferencia para que tengamos que estar abriendo brechas gigantescas entre unos y otros, refiriéndonos a uno y otro modelo, como si fueran incompatibles?

Claro; en nuestro partido también tenemos nuestros halcones, como debe ocurrir en el oficialismo. Se trata de los que están buscando la manera de abrir grietas en lugar de tender puentes.

Creo que el modelo a que el señor presidente de la Nación se refiere son las alianzas,

algunos episodios de la reforma del Estado, algunas formas de llevar adelante las privatizaciones, algunas maneras de asignación de recursos. Perfecto; pero, entonces, discutamos. Lo que en última instancia está en discusión no es lo fundamental del modelo y lo que tenemos que acordar la gran mayoría de los argentinos; quizá debamos afinar la punta del lápiz y ver quiénes deben ser, según nuestra convicción, los protagonistas principales de este cambio de modelo. Es allí, según mi impresión, donde una excesiva generalización de los conceptos puede vaciamos del contenido profundo cuando nos referimos a este cambio de modelo.

No es lo mismo la reforma del Estado planteada por algunos grupos monopólicos que no quieren que haya más control sobre ellos ni que nadie vaya neutralizando su capacidad de formación de precios y quieren al Estado fuera de esto, que la reforma del Estado que pretenden aquellos que quieren que éste tenga un rol primordial para que el chacarero, el pequeño productor y el cooperativista puedan llevar adelante su producción, impulsándola para incorporarla a los mercados del mundo.

Perdónese utilizar un nombre propio, pero Bunge y Born no necesita que nadie le enseñe cómo exportar. Pero una cooperativa de productores del interior —de Córdoba, Entre Ríos o Santa Fe, por ejemplo— no tiene cómo hacerlo si el Estado no le enseña la manera.

No es necesario que ninguno de los grandes capitanes de la industria sea defendido frente a las políticas financieras; tienen bancos propios. Pero el chacarero, el comerciante o el pequeño industrial, si no tienen un banco provincial de fomento bien orientado que los ayude a que sus iniciativas cuenten con el sustento financiero adecuado, no pueden hacer nada.

Con esto quiero decir que detrás de este cambio de modelo la discusión no debe ser la gran palabra vacía sino saber en qué protagonista apoyamos esa transformación.

Si me atrevo a hablar en este tono, a veces exaltado y por el que pido disculpas a mis colegas, es porque en estos siete años en los que todos hemos aprendido mucho vimos que el poder del que formamos parte es una especie de balanza entre dos puntas de la avenida de Mayo. Quienes atienden en una punta de la avenida de Mayo tienen ciertos clientes y quienes lo hacemos en la otra punta, otros. Todos tenemos que atender, unos y otros, porque for-

mamos parte del mismo poder. Lo importante es que podamos conversar entre nosotros sobre lo que contestamos a unos y a otros clientes.

¿Quiénes son los clientes de los que están allá? Son los que van a golpear los mostradores de las oficinas ubicadas alrededor de la Plaza de Mayo: banqueros de la city, quizá, los ahora dueños de las rutas, los señores del petróleo, de los autos, del acero, los "barones" del papel, del tabaco, del azúcar. Es muy raro que ellos se preocupen por llegar a nuestros despachos con sus inquietudes, porque allá es más sencillez, más silencioso, menos transparente; sea antes de ayer, hoy, mañana, seguramente siempre.

¿Quiénes son nuestros clientes en esta punta de la avenida de Mayo? Ellos también tienen nombre propio. Puedo mencionar, por ejemplo, a un productor de la provincia de Entre Ríos, don Pedro Schneider, que siembra lino y trigo y no tiene cómo lograr rentabilidad para levantar el crédito que le permita sembrar y posteriormente cosechar. También puedo hablar de Jacinto Rivero, a quien no le alcanza el precio del novillo terminado para pagar lo que le costó obtenerlo. Otro caso sería el de una cooperativa agropecuaria o aquella mujer dirigente de barrio, que tiene espíritu de lucha y da una hermosa muestra de solidaridad mientras en su casa de una sola pieza, bajo un parral, atiende a sesenta chicos, simplemente para mantenerlos, para que sobrevivan.

Tengo una pequeña anécdota de cuando estábamos en el gobierno. Es una anécdota novelada. Como dicen los libros, anticipo que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, a pesar de que voy a usar nombres propios.

Comenzaba 1989. Ya estábamos lanzados a la campaña electoral. Se les había cortado la luz a las escuelas técnicas de mi provincia por falta de pago. Gente de algunos departamentos me dijo: "Ricardo: ¿por qué no hacés lo posible para que conecten la luz? Páguen la luz, porque si no no van a poder empezar las clases por falta de energía eléctrica."

En el CONET me dijeron: "Senador: no tenemos ningún problema, siempre y cuando nos manden dinero de Educación."

Llamé entonces por teléfono a mi amigo Adolfo Stubrin, que era secretario de Educación. Me dijo que no había ningún problema y que hablara con el secretario de Coordinación del Ministerio, que manejaba la plata.

Llamé entonces a Pérez. Este me dijo: "No tengo ningún problema, siempre que hable con

el secretario de Hacienda, que es quien manda los fondos."

Fui a ver entonces a Mario Brodersohn. Me atendió enseguida. Le dije: "Tengo que plantearle un problema de Entre Ríos. Resulta que tenemos todas las escuelas técnicas con la luz cortada por falta de pago." Sonó el teléfono: era la secretaria: "Doctor: es Daniel Marx —insisto: nombres de novela— que llama de Washington." Atendió Brodersohn. "¿Qué pasa?... ¿Que se pudrió todo? ¿Y entonces? ¿Que no tenemos más negociación?" Cortó. Se dirigió a mí. "Está bien, ¿Cómo era el tema?" Le repetí: "El tema es que las escuelas técnicas de Entre Ríos..." Brodersohn me interrumpió: "Mirá, por qué no me aguantás un segundo. Lo llamo a Juan". Y hablando por teléfono nuevamente, dijo: "Juan, me acaban de llamar de Washington. Resulta que se fue todo al diablo; no tenemos más negociación... ¿Hablaste con Machi?" (Silencio). "No. Bueno, llámalo, porque antes de que se entere el mercado vamos a tener que hacer algo."

Y volviéndose nuevamente hacia mí. "¿Cómo era el tema?", me preguntó.

Le respondí: "El tema era que tenemos las escuelas técnicas de Entre Ríos..."

Me interrumpió nuevamente. "¿Por qué no me aguantás un momentito?...". Y llamando a Machi le dijo: "¿Qué... que ya se enteró? Entonces hay que subir la tasa. ¿Le avisaron al presidente?", continuó diciendo por teléfono.

En fin, les aseguro que si bien no diría que me sentía un piojo, lo cierto es que no me sentía muy lejos.

El hecho de que venga un ministro a sentir y protagonizar estos problemas, que ha sido diputado, que pueda ver cómo hay que integrar las clientelas de los mostradores, atendiendo a los unos y a los otros en un país de todos, es lo más positivo de esta reunión. Creo que implica revalorizar el rol del Parlamento.

Sé que esto no es común en una "democracia ejecutiva". Estamos en un sistema presidencialista, y aunque me siento cercano a situaciones como la de Felipe González al discutir en el Parlamento su programa o la de la misma Thatcher al discutir frente a la oposición laborista y defender su gobierno en el Parlamento, por lo menos cumplamos la Constitución.

También me ha resultado satisfactorio que el señor senador por Salta me diera la primicia de que el presupuesto haya sido elevado a la Cámara de Diputados. De este modo sabremos no sólo de dónde recaudaremos fondos sino también cómo asignaremos los escasísimos recursos

que hoy genera la recaudación fiscal. Esto nos hará sentir legisladores con mayúsculas y nos va a permitir protagonizar la discusión de este cambio de funcionamiento económico.

Sé que es muy difícil, y cada vez lo será más, captar rentas de la economía. Me atrevo a plantear una cordial discrepancia con los señores senadores por Corrientes, que decían que esperaban que éste sea el último paquete fiscal que discutamos. Creo que hay un fenómeno creciente, inexorable y constante en el mundo, que es la incapacidad ascendente de los Estados para poder captar rentas, porque es tan grande la fluidez en el desplazamiento del capital que tiene cada vez más formas de escaparle al cerco económico que se le hace desde el poder político.

Hace treinta o cuarenta años los únicos que tenían posibilidad de sacar el dinero fuera del país eran las multinacionales; hace veinte, cualquier empresario nacional; hace diez, la clase media alta; y hoy los agentes de los bancos extranjeros andan recorriendo el país y viendo a don Pedro, al bolichero, a don Mauricio, a don Juan, para ofrecerles una cuenta en dólares en Montevideo, Nueva York o Suiza. Entonces, me parece que es ser inocente creer que vamos a poder poner un impuesto y olvidarnos de él ignorando la enorme cantidad de herramientas de evasión que le da a la economía la técnica moderna.

Esto también hace que tengamos que analizar el rol del Estado, porque yo no deduzco de esta realidad que el Estado tenga que alzarse de hombros y decir que es impotente. Lo que deduzco es que el Estado tiene que protagonizar un cambio fundamental en su dinámica, estructura, agilidad y modernización sin perder de vista a quién sirve.

Digo esto, señor presidente, porque en las sociedades democráticas desde hace dos siglos y medio el equilibrio es una dialéctica entre el poder económico, que intenta ganar mucho, y el poder político, que lo obliga a democratizarse, a repartir un poco, a nivelar el piso mínimo que permita mantener el equilibrio social. Esta es una dialéctica casi eterna cuya subsistencia tiene como fin que ninguno de los dos poderes intente destrozar al otro, para que no se produzca el caos social y el estancamiento económico permanente.

El Estado tiene que cambiar permanentemente sus herramientas de recaudación. Pero más que eso, hoy debe tener inteligencia para realizar la asignación de recursos. Ya no se puede asignar en forma "pampa", como las viejas épocas,

cuando la plata alcanzaba para cualquier cosa.

Hay que tener prolijidad y lápiz de punta fina para determinar dónde se pone un peso y así saber que ese peso tendrá un poder multiplicador rápido que va a ayudar a solucionar el problema lacerante de las desigualdades sociales o a impulsar una clase de economía regional que pueda tener éxito en el mundo porque es un nicho del mercado que a lo mejor dura dos o tres años y es necesario aprovecharlo.

En concreto, entonces hace falta un Estado que no puede manejarse más con los criterios masificantes y asignadores "al voleo", con perdón de la palabra que usábamos en otras épocas, o sea, un Estado mucho más profesional.

Valga todo esto también como reclamo para cada uno de nosotros, que tiene que tratar de ir acompañando estas transformaciones del capital, ya que sabemos que es nuestro tradicional rival, no porque lo querramos matar sino debido a que queremos que su modernización alcance a la mayor cantidad de ciudadanos y permita la menor cantidad posible de injusticias.

Hoy el crecimiento de las sociedades está apoyado, en gran medida, en el conocimiento. Días atrás, hace algo más de un mes, escuché al señor presidente de la República hacer la cita de un libro que estaba leyendo y que acaba de ratificar como su libro de cabecera: "El Cambio del Poder" de Alvin Toffler. Allí se hace referencia a los tres componentes fundamentales que el poder tuvo a través de la historia: la violencia, el dinero y el conocimiento.

La tesis principal del libro es que el conocimiento es la tercera pata del poder —la de peso más importante— y desplaza a las otras dos, porque forma parte de la propia existencia de la violencia y el dinero.

En efecto, no hay posibilidades de ejercer violencia sin conocimiento y desarrollo científico y tecnológico; y no hay capacidad de tener dinero si no hay conocimiento, capacitación e incorporación de información. Esto hoy es el punto decisivo, ya que una política popular tiene que apuntar a ello, es decir, a la capacitación y educación de nuestra gente y al fomento de todo aquello que nos separa de la animalidad, o lo que es lo mismo, la capacidad de iniciativa y la frescura intelectual.

¿Qué tiene que ver esto con una ley impositiva? Tiene mucho que ver, porque si nosotros no aprovechamos la presencia del ministro para comprometerlo a que cuando tratemos el presupuesto podamos discutir estos temas mano a mano y darle al Parlamento —asignándole el

papel de un escudo del poder— la responsabilidad de decir qué porcentaje se lo da a educación, a ciencia y tecnología, a arte y cultura, a defensa, al desarrollo de la economía, entonces, cuando vayan a presionarlo los clientes, pueda decirles que vengan a discutir al Parlamento. Así nosotros podremos contestarles, por ejemplo, que no se aumentará el peaje de la ruta porque se verá perjudicada la exportación de madera de tal región, o que no podemos aumentar determinada tarifa.

De esta manera discutiremos y racionalizaremos la asignación de los recursos contenidos en el presupuesto.

Si no institucionalizamos esta clase de comportamiento, no será posible escaparle al déficit permanente, constante y sistemático que la sociedad imputa a quienes somos sus representantes.

Voy a contar una anécdota, solicitando a los señores periodistas que no la difundan, para no afectar el sentimiento de la persona afectada que, si bien no voy a mencionar, puede sentirse aludida.

Recibí en mi despacho a un investigador superior del Conicet, tal como serían Leloir, si viviese, o Milstein, si se encontrara en el país. Tiene treinta años de carrera con dedicación exclusiva. Pensé que como presidente de Comisión de Ciencia y Tecnología me iba a entregar una iniciativa como las muchas que me acoré el año pasado.

Me manifestó su molestia por plantearme una cuestión de esta naturaleza, diciéndome que tenía 65 años, que su madre contaba con 91 años, que ganaba dos millones trescientos mil australes y, por ende, no podía pagarle los remedios. Les aseguro que me hizo lagrimear.

Hace siete años que soy senador y el hecho de que este investigador venga a pedirme poco menos que una limosna para comprarle remedios a su madre, me hizo sentir fracasado; no digo que todos hayamos fracasado. El camino no es otro que el de bajar el tono, despojarnos de palabras grandilocuentes y armar espacios de diálogo y de sentido común.

Tenemos tiempo para pelearnos. Además, nadie gana en las peleas desangrantes. Y quiero hacer una reflexión...

Una persona de la barra.— Como periodista le solicito levantar esta nota...

Sr. Presidente (Solana).— Solicito a la persona que se encuentra en la galería que se abstenga de hacer manifestaciones.

Sr. Lafferrière.— Lo que acabo de contar es totalmente cierto, pero muy doloroso para la

persona que me lo confió en el despacho. No afecta que aparezca publicado en el Diario de Sesiones pero sí en un periódico.

Sr. Presidente (Solana).— Ruego al señor senador que se dirija a la Presidencia.

Sr. Lafferrière.— Para cerrar mi exposición, solicito respetuosamente al señor ministro de Economía y a la gente de su gabinete que cuando discutamos el presupuesto —ruego que pueda ser sancionado antes de su ejecución y que el de 1992 sea aprobado antes del 30 de septiembre— podamos mantener un diálogo más fructífero, franco y abierto entre las dos puntas de la Avenida de Mayo.

Estoy seguro de que todos vamos a ganar y entonces, cuando finalicemos nuestro mandato, nos sentiremos menos inútiles o más tranquilos con nuestra conciencia.

Sr. Presidente (Solana).— Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León.— Señor presidente: este es un debate que obliga casi imperativamente a participar.

Pareciera que estuviésemos discutiendo una pequeña propina de los prolongados déficit del Estado, que fue declinando en su presencia, creación y distribución de la riqueza.

Pero como en alguna medida esto se inserta en los compromisos que los políticos de nuestro tiempo debemos tener con el pueblo, quiero hacer mi interpretación del debate de esta reforma impositiva.

El señor ministro llega en el marco de una crisis profunda, que no tiene características de un déficit de 80 millones de dólares por mes sino que tiene la característica de fallas morales en las instituciones de la democracia.

Ello es así por dos razones. En primer lugar, por errores intrínsecos; en segundo término, porque ha reaparecido en nuestra Nación el *lobby* de los que —como decía el señor senador por Entre Ríos— creen que estando cerca de las alfombras rojas se puede reemplazar la política con economía.

El déficit que está viviendo nuestro país viene de lejos. Este es un ajuste que no sé qué número lleva. Tampoco sé qué número de ministro le corresponde al doctor Cavallo. Pero lo cierto es que los argentinos estamos sufriendo la aplicación de políticas largamente fracasadas.

Estos ajustes que debatimos forman parte de una mentalidad que, en nombre de los golpes de Estado, se ha incubado en nuestro país y que parece se aquerenció en la declinación con que algunos defienden la identidad del país en circunstancias como las que atravesamos.

Los radicales venimos hoy a decir aquí que esto no sirve. La mayoría va a aprobar el proyecto, que va a servir para recaudar 70 u 80 millones de dólares mensuales.

El señor ministro nos había dicho en su primera exposición que este proyecto iba a permitir el ingreso de 200 millones de dólares por mes. El presidente del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados expresó que podrían recaudarse 140 o 130 millones de dólares mensuales. Pero ayer, rápidamente, el señor ministro dijo que la cifra podría alcanzar los 80 millones de dólares.

Entonces, me di cuenta de que esto es una cosa difusa, que demuestra que no tenemos proyecto, que no existe planificación del funcionamiento del país. Porque si nosotros somos capaces, como argentinos, de financiar durante 10 años a los que compararon Aerolíneas Argentinas, 130 millones de dólares, casi es una incoherencia dramatizar para recaudar 80 millones de dólares.

Este debate se inscribe en el campo de una urgencia, que yo acepto porque los radicales también fuimos gobierno y pasamos por argencias. Pero creo que hay que ir al fondo de la cuestión y cambiar esas políticas que han perturbado la economía nacional.

Cuando cayó Illia el sector de los trabajadores representaba el 47 por ciento del producto bruto interno. Ahora es del 23 por ciento. Quiero decir que se le ha sacado a los más raquíticos para engrosar la bolsa de los más opulentos. Y esto se vincula a la esencia de mi pensamiento.

En menos de un mes fuimos testigos, en el escenario económico nacional, de una devaluación de casi el 80 por ciento de nuestro signo monetario. Vinimos como las tasas de interés superaban el 30 por ciento mensual y advertimos el aumento de la inflación que, de la ilusión del dígito, pasó a ser del 22 por ciento en la primera semana del corriente mes. Dicen que febrero cerrará con una inflación del 20 por ciento. Espero que sea del 30 por ciento.

El señor ministro informó el proyecto y habló de los precios. Esto me hace acordar a ciertos actos de ingenuidad por los que todos pasamos en la vida. Porque está ocurriendo desde hace años en nuestro país que los factores que definen nuestro propio funcionamiento suben los precios un 30, 40 ó 50 por ciento y después los bajan sólo un 5 ó 10 por ciento para aparecer en los medios que manejan como generosos con nuestra sociedad.

Por otra parte, entre diciembre de 1990 y enero de 1991 se produjo en nuestro país una emi-

sión cercana a un equivalente de 1.000 millones de dólares, de los cuales sólo un 30 por ciento se destinó a la compra de divisas. Por eso me preocupa cuando el presidente de la Nación decía que no vamos a emitir para pagar sueldos. Se está emitiendo y esto es parte de la crisis.

Pero también sé que hay un pueblo en la calle. Yo acostumbro a mirar siempre a la calle. El día que estuvo el señor ministro en el Salón Rosado dije que tenía la sensación de que todos los que estábamos allí debatiendo casi técnicamente la cuestión de una alícuota no interpretábamos al pueblo que estaba en la calle, que estaba pidiendo comer y que no entiende que se haya tenido la flexibilidad de aceptar que mandemos 60 millones de dólares todos los meses a los acreedores externos y que no podamos emitir por 5 millones para que coman algunos argentinos.

Esta falta de identidad es lo que a mí me duele de las largas etapas por las que viene caminando la Nación en este aspecto. Da la sensación de que no tenemos coherencia.

Hace unos momentos estaba escuchando al señor senador Lafferrère mientras observaba al señor ministro de Economía y pensaba que debo pedir en nombre de los pueblos del interior que no privaticen la Junta Nacional de Granos, porque sería como abandonar a los que trabajan y producen para dejarlos en manos de las fieras de la acumulación, de los dueños del lucro frío.

Quiero repetir lo que siempre digo en este Senado: respeto al gobierno y quiero que le vaya bien porque sería saludable para los argentinos. Pero hay políticas que no resultan saludables.

Aquí se habló de poner el acento en la evasión. Todos estamos de acuerdo. Pero debo decir que pareciera algo difícil de conseguir, a pesar de que el señor ministro ha dicho que lo va a hacer, que la Dirección General Impositiva publicará "quién es quién". ¡Hágalo, señor ministro! ¡No se achaque! ¡Piense en el pueblo y no en los intereses creados!

Digo esto porque hace ya muchos años que se viene amagando con esta medida y se dice que la DGI va a publicar los nombres de los grandes deudores. Pero nunca se ha hecho.

La sociedad argentina está viviendo un tiempo en el que forzosamente tenemos que decirle al hombre de trabajo, que va colgado del colectivo, que la culpa no la tienen los factores políticos, sino las políticas de mala distribución que está azotando al país.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. León. — Por todo esto me preocupa este proyecto de ley. Y como ya dije, me preocupa también el pueblo que está en la calle. Allí están los ferroviarios, muchos de los cuales ganan un poco más de un millón de australes por mes. También tenemos el ejemplo de los científicos, de los investigadores. La propia CGT oficialista, la que es reconocida por el gobierno, ha sacado una declaración que presentó al señor presidente de la Nación en la que expresa que, evidentemente, en el campo de la distribución, hay que mejorar ingresos. Los productores trabajan, producen; no están de acuerdo con el actual ordenamiento económico. Algunos industriales ayudan cuando pueden ganar. Lo cierto es que cuando hablo no me refiero a los grandes sino a los pequeños o medianos, que pertenecen a mi propia representación política.

Aquí el ministro nos dijo el otro día que ahora el crédito iba a ser para la pequeña y mediana industria, para la familia, que se iba a privatizar el de las grandes. Esto exige una profunda reforma financiera que hay que realizar. Todavía no lo tenemos pero debe llegar; debe haber un "Cavallito 2". Ojalá que llegue y, si esto sucede, que sea una propuesta, un plan distinto, que haga cirugía con esta declinación.

¿Cuántos años hace que el país no crece y cuántos millones siguen trabajando, sin embargo? ¿Por qué no crece? Porque hay una estructura obsoleta del funcionamiento nacional. El financiamiento del país que tenemos hoy está agotado y por ello estamos en esta crisis. El financiamiento lo daba el sector externo. Había deuda externa e interna, se emitía y utilizábamos ingresos del sistema de provisión para cubrir espacios presupuestarios de nuestra mala distribución. Ahora nos encontramos frente a un grave desafío en cuanto a la provisión social; y entonces pregunto quién negocia la privatización con ENTEL, que aceptó el retiro de ese impuesto que servía a los jubilados, a los pensionados, para acentuar el pulso hoy más alto del mundo. Y digo el más alto del mundo porque se acaban de financiar aumentos que ya están funcionando, para los que ya prácticamente hay una aceptación de ubicarlos a nivel dólar, que fue lo que también se modificó la última semana en los pliegos.

Pensamos que no se está controlando el tipo de cambio y, entonces, no hace a nuestra coherencia que estemos aceptando que los procesos de tarifas y de inflación, como quieren algunos en el campo de los precios, estén siendo adaptados a la moneda que no controlamos.

Sr. Romero. — ¿Me concede una interrupción, señor senador, con el permiso de la Presidencia?

Sr. León. — Cómo no, señor senador.

Sr. Romero. — Deseo expresarle, señor senador, que en el Título II queda contemplada esa reposición de los fondos de seguridad social que anteriormente figuraba en las tarifas, ya que la tasa del 6 por mil a la venta, compra, cambio y permuta de divisas va destinada en un 90 por ciento a las necesidades de provisión social y en un 10 por ciento a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la cantidad de beneficios o beneficiarios previsionales que estos distritos tengan.

De tal manera se reponen la ausencia de recaudación por efecto de la eliminación de las tarifas correspondientes.

Sr. León. — Le agradezco mucho porque usted me da la razón. ¿Se da cuenta? Por una sensibilidad especial, en una privatización que presenta muchas dudas, que no fue del todo transparente hemos tenido que crear otro impuesto sobre uno que ya funcionaba. Debíamos hacer volar la imaginación porque el monopolio extranjero había puesto en su bolsillo el viejo impuesto que servía a los jubilados.

Estamos considerando temas impositivos. Nuestro bloque —seguramente lo ratificará su presidente— ha hablado. Técnicamente, lo ha hecho el señor senador Trilla, y políticamente el señor senador Lafférière.

Debe destacarse la urgencia que tenemos en colocarnos en un nivel de prospectiva nacional e internacionales que no permita que podamos ser acorralados por algunos factores que nosotros no controlamos.

El senador Sapag pedía que explotemos lo nuestro y que aprovechemos las riquezas que tenemos. ¿Quién de nosotros no viajó por la Argentina y vio las riquezas que tenemos? Nos da vergüenza pensar en lo que debemos y en la dependencia a la que estamos sometidos. A veces nos dicen que hay cosas que no se pueden hacer por compromisos contraídos con el Banco Mundial. Pero miremos nuestra incoherencia —y quiero remarcar mi pensamiento—. Quien era embajador en Estados Unidos —hoy canciller— dijo que vendría el plan Brady para la Argentina y el ministro de Economía —que era canciller— manifestó que "eso estaba caído y que teníamos que volver a renegociarlo."

Es imprescindible de nuestra parte crear una cadena solidaria en el planeamiento del país. Hay estructuras que no funcionan. Dicen que bajarán los precios un 5 por ciento. Felicito y abrazo al comerciante honorable, pero hay mu-

chos que privilegian el lucro y así decae la responsabilidad que les compete como empresa en cualquier sociedad de nuestro tiempo.

Estamos votando la búsqueda de 80 millones, pero como senador no sé qué se ha hecho con el pago *cash* de las privatizaciones. En este Senado se nos reiteró que era para la salud, para la educación; pero creo que muy pocos legisladores saben qué se ha hecho con lo que se cobró *cash* en las privatizaciones. ¿Adónde fue ese dinero?

El ministro está pidiendo un gran esfuerzo. Nos hablan de las urgencias de nuestras provincias y a algunos de nosotros se nos presenta un dilema. En mi caso, estuve en la casa de gobierno del Chaco hablando con legisladores nacionales de la oposición —el senador Bittel puede dar testimonio— para ver qué podemos hacer para privilegiar el rescate del banco del Chaco, para que cobren los maestros y los empleados públicos de esa provincia.

Tengo esa preocupación: servir a mi provincia, que se podría oxigenar con 15 o 20 millones de dólares, pero reclamo organicidad nacional. ¿Cómo vamos a eximir de impuestos a la Swift? ¿Por qué? ¿Por qué apretar a los de adentro y aflojar a los de afuera? ¿Por la carta del embajador Todman? Se eximió a la Swift de impuestos por 4 millones de dólares. ¿Cuántas escuelitas podríamos arreglar con ese dinero!

Aquí están representados todos los partidos políticos; somos pluralistas, pero tiene que haber una concepción de Nación que funcione por encima de los requerimientos circunstanciales.

En un discurso que pronuncie alguna vez dije que aquella Argentina séptima en el mundo en el ingreso per cápita de hace medio siglo quedó atrás en nombre del endeudamiento externo, la desocupación creciente, el déficit fiscal, la emigración de cerebros, la caída del producto bruto o la huida de capitales. Es decir, un modelo que está agotado porque este financiamiento que mencioné recién está totalmente derrotado. Tiene que haber un cambio estructural. Somos hombres del interior y sabemos que en la producción existe la más grosera deformación a causa de la intermediación. El nuestro es uno de los países donde está más acentuada la intermediación en la estructura de costos.

Por ejemplo, la palta se recoge en Formosa casi del suelo; es casi gratis y, sin embargo, aquí la cobran cinco o diez mil veces más. Es general con las producciones regionales. Entonces, hay que cambiar estas estructuras de

costos, la intermediación sucia y esa mentalidad nuestra de marcar tanto los precios; todo esto debe ser derrotado.

Soy presidente de la Comisión de Comercio por generosidad de ustedes y allí hacemos el estudio y seguimiento de los precios. Entiendo que, aunque esto no pertenezca a la moda liberal, sería necesario crear un ente regulador de los precios de la canasta familiar. Esto no es estatismo. Es un Estado con criterio social. El liberalismo debe cuidar al hombre. En Brasil y en otros países existe.

Es siempre mucho más importante que un argentino no se muera de hambre que defender las ideologías o la libertad de los mercados. Inclusive, ofrezco al señor ministro aporte conceptual e instrumental sobre este tema a través de la gente que me asesora para ayudar a que mejoren las cosas.

Creo que esta libertad no puede funcionar en nuestro país. ¿Cómo va a funcionar la libertad de precios y la libertad de mercados cuando un panadero mata a otro porque vende más barato! Nuestra sociedad está infectada por una especie de *gangsterismo* que anda suelto. Inclusive, se descubre, ve o lee que hay algunos hombres importantes de nuestro país que se hartaron de bienes materiales negociando con los gobiernos y con el Estado y ahora se preocupan de que ese Estado decline su responsabilidad de promover una distribución mínima justa, custodiando lo que la gente necesita para tener educación, condiciones de salud, libros o techo. Debemos hacer que el argentino no deje de sentirse orgulloso de nuestros símbolos y de nuestra historia.

Por estas razones nosotros no vamos a votar a favor de este paquete. Todo esto va a ser sólo un parche.

Yo, legislador de la Nación, recojo la sensación preocupante que existe cuando vemos que a ratos el gobierno de la Nación no sabe a la mañana lo que tiene que hacer a la tarde. Así no se puede gobernar. Resulta que el gobierno a veces dice cosas a una hora y, en el mismo día, cambia de camino. Debemos abandonar el equilibrio inestable.

Debemos trabajar para armar un proyecto que nos permita avanzar en el mercado interno, alentar las exportaciones y buscar inversiones reproductivas. Sé que el ministro nos va a decir que todo esto no lo puede hacer porque él se encontró con este marco de situación. Por eso nosotros criticamos este paquete para que precisamente se cambie el marco.

A mí no me preocupan las inversiones extranjeras. Las necesitamos. Pero quiero seguir desarrollando un poco la idea esbozada por el señor senador por el Neuquén.

Tenemos un país que produce trigo, que tiene carne, que exporta inteligencia, que es capaz de generar —incluso— importante tecnología. ¿Es que toda nuestra política, de aquí en adelante, va a depender exclusivamente del dinero que pueda venir de afuera? Porque ahora pareciera que estamos como cubiertos por ese techo. Estamos en crisis y tienen que prestarnos dinero. Pero, ¿por qué no pensamos en ponernos en marcha y recrear nuestro propio crecimiento?

Hay impuestos —éstos y otros que votamos— que son recesivos y que desalientan la propia inversión.

Para terminar con este debate —no sé si hará uso de la palabra el señor presidente de nuestro bloque—, debo decir que en verdad todo lo expuesto por el señor ministro —quien ya sabe que lo respeto—, no me convence acerca de que esto no sea una pequeña propina y de que en el marco de nuestras dificultades se dé lo que él aseguraba: que si votamos hoy este paquete la ley saldrá publicada en el Boletín Oficial, la gente va a pagar y el mes que viene todo estará más tranquilo. No sé si esto será así.

Por esto tenemos que hacer una convocatoria. Pronto consideraremos el proyecto de ley de presupuesto y quizá ése sea el gran tema que debemos abordar, el instrumento para lograr el país que queremos.

Yo quiero un país donde los negocios públicos no se mezclen con los privados. Lo digo lealmente. Un gobierno democrático no puede designar a un interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que represente intereses contrarios. Porque YPF, indudablemente, es importante.

En este mundo que actualmente se está incendiando por el propio petróleo, aunque aceptemos alguna desregulación, no estamos dentro de un área en la que podamos manejarnos pensando sólo en ganar con una exportación sino que debemos tener en cuenta el criterio de que se trata de riquezas y valores que conforman una axiología nacional que obliga a custodiarlas.

Aquí rendimos homenaje al general Mosconi y ahora seguramente van a sacar sus retratos de las estaciones de YPF. Para colmo, estamos vendiendo petróleo barato a las empresas que en su momento, proveyeron de combustible a los barcos ingleses que mataron a nuestros chicos en las islas Malvinas.

Debemos recomponer el funcionamiento del país. Algunos tienen todo, pero el pueblo está preocupado; los ingresos son raquíticos: militares, profesionales, obreros y productores reclaman.

Debemos buscar un equilibrio que encontremos al mezclar nuestra definición política con lo puramente técnico. Soy un político que cree en el país y en que el pueblo debe ser el sujeto histórico.

Que vengan así los técnicos, a quienes tenemos que decirles qué queremos hacer con nuestra riqueza y cómo distribuirla. Pero si aceptamos que los técnicos sean quienes tracen el desarrollo de nuestra economía, seguramente seguiremos así y dentro de poco deberemos votar otra propina de emergencia. Einstein se asustó de su propia bomba.

Este es un mundo difícil y con una estructura internacional perversa. Pienso que la viabilidad para nuestros pueblos sigue siendo la integración de América latina para actuar en las decisiones planetarias como la gran nación latinoamericana. El mundo está viendo cómo cada vez se inmoraliza más el ordenamiento internacional. A mí me hubiera gustado que los barcos no fueran; ahora los cambiamos. Cuando el doctor Cavallo era canceller me dijo que los extranjeros nos habían dado hasta el 15 de enero 18.900.000 dólares para financiar nuestras fragatas. En ese momento le pedí que si tenían que hacer otra renegociación no aceptaran esos 19.000.000 de dólares y que usaran las reservas del Banco Central.

Esta es, tal vez, la densidad de mi diferencia. Si el señor ministro hubiera venido a pedirnos que le regalemos 20.000.000 de dólares para pagar nuestros barcos, yo habría votado favorablemente, sin dudar, porque contribuiría con la causa de nuestra independencia.

Esto sirve, va a alentar, pero no tiene la enjundia, la jerarquía, la arquitectura que tenemos que estructurar definitivamente en el campo del crecimiento argentino. Lo único que le digo al señor ministro es que ahora no voy a votar favorablemente su pedido. Pero si alguna vez tiene proyectos que sirvan a nuestra educación, a nuestra salud, a una presencia internacional independiente, a la apertura de fábricas para exportar inteligentemente, venga al Senado, señor ministro, porque seguramente todos los radicales lo vamos a apoyar.

Este es un momento de muchas dificultades. El mundo vive muy correlacionado, con mucha coparticipación. Miremos al mundo inteligentemente, pero trabajemos dentro del país con coherencia argentina.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Señor presidente: deseo aclarar que la semana pasada cuando nos visitó el señor ministro de Economía en el Salón Rosado, formuló algunas manifestaciones sin que estuviera en mi ánimo descalificar la visita ni la personalidad del visitante. Pero estoy convencido de que lo que dije en aquel momento fue importante, no por mis palabras sino porque hoy tenemos al ministro de Economía sentado aquí, frente a nosotros, escuchando lo que los senadores de la Nación dicen con responsabilidad y con sensatez, expresando lo que honradamente creen que está pasando en la economía de la República Argentina.

Confieso que, como presidente de mi bloque, tengo una sensación dicotómica. Por un lado, estoy orgulloso de los distintos discursos de mis compañeros de sector. Lo expresado por el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Trilla, fue el análisis técnico de un estudioso, de un doctor en ciencias económicas que yo respeto tanto.

Por otro lado, hablé un joven y brillante argentino que siente el interior del país.

Y finalmente también hizo uso de la palabra otro brillante senador, no tan joven, que siente a su humilde provincia del Chaco.

Decía que tengo una sensación dicotómica porque estamos presentes muy pocos, y no por culpa nuestra. Pedimos el otro día con responsabilidad que nos dieran tiempo suficiente para que todos nuestros senadores pudiesen aportar lo que ellos creen que es lo correcto, lo bueno, lo útil para la economía del país. Habíamos convenido, de alguna manera, como caballeros, que esta sesión se iba a realizar el miércoles, o tal vez, achicando el tiempo, el martes o incluso el lunes. Cuando anteayer nos fuimos los senadores de mi bancada y los demás señores senadores, en ningún momento pensamos que la urgencia era tanta que hoy íbamos a tener que estar reunidos aquí.

Por eso, quiero disculpar a los señores senadores. Y lamento que muchos de ellos no estén presentes porque seguramente iban a decir cosas importantes. Tenemos representantes de las provincias patagónicas que saben, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el petróleo —como lo dijo el representante por el Neuquén señor senador Sapag— y con la fruticultura en Río Negro. Pero lamentablemente hoy no están aquí.

Por ello, señor presidente, espero que ésta sea una de las últimas veces —nunca puede decirse la última— que la urgencia haga aparecer tan despoblada nuestra bancada.

En la Cámara de Diputados de la Nación tuvieron más suerte. Allí hubo más reuniones; los asesores del ministro fueron a conversar con la comisión especial y con todos los diputados: incluso lo hizo el subsecretario. Así, se llegó a la elaboración de un texto que después fue modificando en el recinto. Eso hace a la democracia.

Sé que el señor ministro es joven, igual que su equipo. Tal vez por eso vivieron mayoritariamente en una época en la que no hubo democracia en la República Argentina. Por esa desgracia de los golpes de Estado en nuestro país no pudieron aprender lo que significa estar delante de los legisladores, conversar con ellos y saber que nunca llevan una mala intención sino el mejor deseo para el país.

Hay un viejo refrán que dice: “nunca es tarde cuando la dicha llega”. Estoy convencido de que el señor ministro de Economía, que desde hace tiempo es ministro de un gobierno democrático donde hay absoluta libertad, va a acercarse definitivamente a la democracia y a los gobiernos democráticos.

Ya dijeron los señores senadores León y Trilla que no podemos votar este proyecto que vino de la Cámara de Diputados y que hemos recibido ayer. Hoy los técnicos han hecho un gran esfuerzo, pero han hablado, más que de la técnica, del país y acerca de lo que anda mal. Suscribo completamente, no por parcialidad política, todo lo que han dicho los señores senadores de mi bancada.

Aquí estamos. Pretendemos que el Poder Legislativo ejerza su papel. Pero también estamos para decir en qué no estamos de acuerdo. Votaremos en contra porque entendemos que es necesario un cambio de política económica. Además, como acaban de decirlo aquí distintos señores senadores, esto es un parche más. Y ese parche hace que cada vez más no se vea la salida para la gente más necesitada. Ya no hablemos de los marginales, sino de la clase media, que está desapareciendo de la República, seguramente por malas políticas, no sólo de este gobierno sino también de otros.

Ya lo dije: en el anterior gobierno tampoco supimos o pudimos hacer las cosas mejor. Ahora el radicalismo está en una posición muy distinta. No nos vamos a poner en opositores contumaces para buscar réditos políticos. Acompañaremos al gobierno en todas las medidas cuando se nos presente un plan económico que nuestros técnicos —los que están en el recinto y los que tenemos afuera, pero que nos acompañan, nos escuchan y nos ayudan permanentemente— digan que en cierta forma es correcto. En ese

caso estaremos con el nuevo plan, porque si fracasa este gobierno no fracasará el peronismo sino la democracia.

Y los que llevamos años y años de lucha, frustración tras frustración, tenemos un deseo. Así, señor presidente, espero que esta vez pueda terminar mi mandato.

Hace cincuenta y seis años que estoy afiliado al partido —no les voy a decir mi edad— y nunca he podido finalizar un mandato: el de concejal no lo pude terminar; como diputado nacional no asumí porque cayó el gobierno de Frondizi; fui diputado nacional desde 1973 hasta 1976 en que se produjo el sucio golpe de Estado. Fui embajador de la República Argentina desde 1963 a 1966, alto honor que puede tener un ciudadano. El único orgullo que tengo es que caí junto con ese gran democrata que fue el presidente Illia.

Porque veo a los ministros presentes en este recinto estoy convencido de que esta vez, si me da el físico, voy a terminar mi mandato.

No voy a pronunciar, señor presidente, un discurso económico. No desdenamos la estabilidad. Ya en 1986 dijimos que la experiencia histórica nos demuestra que el financiamiento y desarrollo resultan sumamente difíciles en un contexto inflacionario.

Por ello, es indispensable derrotar a la inflación. La batalla ha sido, es y será seguramente dura.

Me entusiasmé también —porque no conozco mucho de economía— cuando el señor presidente de la República y el señor ministro de Economía de turno dijeron que el índice de inflación durante 1991 sería de un dígito. Si hasta hacía bromas con el dedo. Y así empezó a ser, de un dígito para en cero. Los sabiduros, esos que se enojan porque no les abren la puerta del avión para viajar cuando llegan tarde al Aeropuerto, dijeron que el índice inflacionario seguiría bajando; pero los diarios nos indican que para este mes será mayor al 20 por ciento.

Esto no es para alegrarse, señor presidente. Todos lo vamos a sufrir. Pero también decimos que la estabilidad y el crecimiento son metas que se complementan en la gran empresa de transformación de la economía nacional.

Hoy debemos decir, desgraciadamente, que todavía no observamos ese crecimiento. Como bien lo señaló el señor senador por el Neuquén, no existirá revolución productiva mientras no se le den recursos a las empresas para que puedan desarrollar sus fábricas y explotar sus campos. ¿Quién puede asumir el aumento de las tasas de interés?

Espero entonces, señor presidente, que nuestra oposición a la política económica no impida el hecho de que este proyecto salga adelante. Pero que el gobierno reflexione, que lo haga con tranquilidad porque tiene un gran partido detrás, así como también un gran partido de oposición responsable. El gobierno no tiene mejor aliado que el radicalismo, sin desprestigiar ninguna de las otras fuerzas políticas del país; pero tenemos casi cien años de experiencia y sabemos todo lo que hemos sufrido.

Estuvimos muy contentos y alentados —y lo señalé acá— cuando el presidente alerno del Partido Justicialista invitó al presidente de mi partido y a los presidentes de los bloques de diputados y senadores nacionales a conversar para ver qué podíamos hacer juntos para dejar de cascotearnos, agraviarnos, hostilizarnos, porque esto no sirve. No se consigue rédito político de esta manera, sino cuando la opinión pública sabe que somos responsables. En eso estamos, señor presidente.

Pero no va a tener el gobierno rédito político, por más responsables que seamos, si quiere gobernar autocráticamente. Tampoco si pretende consolidar el modelo de concentración económica que exige un proyecto que no es precisamente el del viejo Partido Justicialista.

Lo que ocurre es que a este proyecto se lo adornan otros —como señalaba el señor senador Lafferrière— que están en la otra punta de la Avenida de Mayo. Son los que se alían con el gobierno para sacar ventajas pero nunca para ser solidarios.

Lo sabemos porque lo sufrimos en carne propia. Lo sentimos en 1963 cuando sacamos la ley Oñativia: nos robaban los proyectos de las bancas y compraban a la gente para que estuvieran en contra de nosotros.

De manera, entonces, que no vamos a ser opositores así porque sí. Pero no queremos que se gobierne por decreto y esto lo digo con todo el respeto y el cariño que tengo por el señor presidente de la República.

Que no se siga gobernando por decreto, señor presidente. El último, de ayer, es una bofetada a la opinión pública. No sé —porque no soy constitucionalista— si legalmente se puede indultar a un procesado. Si sé que es atribución del presidente de la Nación indultar a condenados cuando se arrepienten de lo que han hecho y han tenido buena conducta. Pero en el caso que comento se indulta a procesados que, a lo mejor, no tienen ninguna culpa. Pero con el indulto les está echando la culpa y no les está haciendo ningún favor.

Mientras tanto, la opinión pública está mirando lo que hacen los políticos. Por eso estamos tan despreciados.

Y no es por culpa de los políticos sino por culpa de la gente que se acerca a los que tienen el poder para ver qué ventaja pueden obtener, acercándoles proyectos que no van a servir para nada.

Quiero terminar, señor presidente, para decir una vez más que estamos custodiando a este gobierno, que es el de todos. Insisto en ello porque de esta manera estamos custodiando la democracia.

Y para que todos lo sepan de una vez por todas, también estamos custodiando el legado de Alem, de Yrigoyen, de Illia, de Balbín y de todos los radicales que caminan por la República. Porque seguimos siendo, señor presidente, un partido popular como el de ustedes y nuestra causa es la causa de los desposeídos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: quiero ser muy breve porque el presidente de nuestro bloque ha fijado la posición del partido.

Tengo temor de que en el momento del tratamiento en particular no pueda volcar una inquietud, de modo que voy a aprovechar esta ocasión para plantearla a fin de que el señor ministro pueda evacuar mi consulta en una exposición final.

Me refero a un instituto nuevo que se incorpora en el artículo 19, punto 7, y que se refiere específicamente a una facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo para acordar la cesión total o parcial de los derechos sobre la cartera de créditos fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos.

Me excuso, señor presidente, por no haber podido estudiar en profundidad este tema porque no hemos tenido suficiente tiempo. Pero me preocupa pensar si esto no va a significar una especie de remate de estos créditos. Además, no sé si se podrán comprarlos los inversores o simplemente rescatarlos los propios deudores.

Por otra parte, no sé cuál es el objetivo de este nuevo instituto. Ignoro si el Estado obtendrá los fondos referidos a estos créditos para hacerlos efectivos en el futuro con una quita.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

Sr. Ministro de Economía de la Nación. — Señor presidente: he escuchado con toda atención las exposiciones de los señores senadores. He tomado nota de todas las ideas, interrogantes y dudas

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

Sr. Ministro de Economía de la Nación. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Como solamente quería referirme a un tema puntual, creo que ésta es la oportunidad.

Personalmente voy a apoyar este proyecto de ley que tiene como sentido salir de esta emergencia, que está encuadrada en un tiempo en el que se presentan algunos nubarrones y fantasmas en cuanto al posible retorno a la hiperinflación, lo que nadie desea. En este sentido, apoyaré este proyecto de ley tanto en general como en particular.

De todas maneras, me preocupa y deseo que si es posible me dé una explicación o aunque sea que conversemos sobre el tema del artículo 27 que, según tengo entendido, fue introducido en la Cámara de Diputados. Dicho artículo se refiere al restablecimiento de la vigencia de la ley 23.763.

Cuando me remití a la citada norma pude observar que en su artículo 37 se hace, a su vez, una remisión a la ley 23.562. La verdad es que no he tenido suficiente tiempo —a causa de la urgencia en la consideración de este tema— para averiguar de qué se ocupa esa norma. Incluso, tengo temor de que allí se encuentre una nueva remisión. Por eso, para abreviar el trámite, aprovecho para formularle la pregunta directamente al señor ministro.

Esa norma se refiere a un beneficio especial o, dicho de otra forma, a una discriminación hacia algunas provincias argentinas por la forma de establecer cómo se coparticipará el impuesto a que la citada norma alude. A través de esa disposición se privilegia a ocho provincias mencionadas en el inciso a) y se margina a las demás.

Lo que quiero saber, señor ministro, es cuál será el criterio acerca de este punto teniendo en cuenta que en este momento estamos dándole un sentido grande a la ley, referido a combatir la hiperinflación y la inflación y, de alguna manera, lograr un equilibrio en las finanzas del Estado. Entonces, le pregunto por qué introducimos un elemento que, en alguna medida, no encajaría dentro del sentido de este proyecto de ley.

Además, me preocupa cómo hacer para que el resto de las provincias tengan este mismo beneficio.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

Sr. Ministro de Economía. — Señor presidente: como estaba diciendo, he tomado nota de todas las observaciones, dudas, ideas, críticas y sugerencias que han sido planteadas por los señores senadores. Todas ellas serán tenidas muy en cuenta en la elaboración de las medidas y propuestas que en el futuro enviemos al Congreso.

Es cierto que ha habido muchas, demasiadas reformas impositivas. Creo que esto tiene que ver con lo dicho por el señor senador Lafferrière en cuanto al intento de ir buscando formas de evitar la evasión y captar de mejor manera en cada oportunidad las manifestaciones de capacidad contributiva en un contexto particularmente complejo como es el de una economía que está atravesando por alta inflación, alta inestabilidad e incluso hiperinflaciones.

En los países estables las reformas impositivas se hacen con mucha menor frecuencia y el Congreso junto con el Poder Ejecutivo se toman mucho más tiempo para su análisis, preanunciando su vigencia con años de anticipación.

Lamentablemente, la vorágine de hiperinflación, gran inestabilidad no sólo en los precios, sino en el nivel de actividad económica y estos tres lustros de tremenda falta de estabilidad que hemos tenido en el país, ha llevado a esta abundancia de reformas impositivas.

Pero debe decirles que la cantidad de horas que los señores legisladores y los miembros del Poder Ejecutivo hemos dedicado en estos últimos años al tema impositivo y de administración tributaria, al igual que las que dedicamos a la discusión de los presupuestos —lamentablemente muchas veces a destiempo, por demoras provenientes en general de los Poderes Ejecutivos para presentar los presupuestos al Congreso—, no ha sido pérdida de tiempo.

Es mucho mejor que en materia económica los legisladores discutan el tema impositivo y los presupuestos a que, como ocurrió durante muchas décadas, dediquen horas a inventar controles de precios, de salarios, de tasas de interés, nuevas juntas reguladoras, a crear nuevas empresas estatales, a la ampliación de los gastos del Estado, a supuestas leyes de promoción que, en su momento, aumentaban el gasto público y disminuían la recaudación impositiva, incrementando las chances de evasión de impuestos.

Porque todas esas malas legislaciones, a las que siempre estuvimos acostumbrados con el supuesto fundamento de que de esa forma alentábamos la reactivación y el crecimiento, nos llevaron al estancamiento y al retroceso que hoy sufrimos.

En realidad, todos los países bien organizados del mundo controlan, pero lo hacen en cuanto al cumplimiento de las normas impositivas, y todo lo demás se rige precisamente en el contexto de mercados libres y porque la inversión que se hace en la industria y en la agricultura no se realiza con el dinero del presupuesto o con el no pago de impuestos, sino que se concreta a través de capitales genuinos; así, se arriesgan verdaderos empresarios que quieren contribuir al crecimiento porque buscan ganancias, pero al mismo tiempo las reglas del juego los llevan a que la búsqueda de las ganancias los induzca a promover el bienestar general a través del desarrollo de activos productivos, asumiendo riesgos.

No perdemos tiempo viendo cómo podemos controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones tributarias porque ése es el más importante control que un Estado bien organizado tiene que hacer en materia económica; y no perdemos el tiempo discutiendo los presupuestos, porque ésa es la responsabilidad primaria del Congreso de la Nación en materia tributaria.

Tampoco vamos a perder el tiempo si empezamos a discutir la derogación de las normas que permitan controlar los precios, las tasas de interés, los salarios o que permitan que haya juntas reguladoras —que en realidad entorpecen el funcionamiento y transparencia del mercado—, o que se sigan estatizando empresas anteriormente privadas, asumiendo el gobierno los riesgos que corresponden a la actividad privada, o dando importantes promociones que agravan el problema fiscal al aumentar gastos y disminuir la recaudación tributaria, incrementando las posibilidades de evasión.

Ocurre que el verdadero mal argentino, el que nos ha llevado a que emigre la inteligencia argentina, a la fuga de capitales argentinos, a que tengamos hiperinflación, estancamiento y retroceso, se llama abuso del endeudamiento interno, del externo y de la emisión monetaria. Y todos esos abusos se originan en la persistencia y la magnitud de los desequilibrios fiscales que hemos tenido por décadas y décadas.

En una oportunidad hice un cálculo, comenzando desde 1940, año por año. Si la Argentina hubiese financiado todos los déficit fiscales que tuvo desde entonces hasta ahora, y lo hubiese hecho sin recurrir a punciones, licuaciones, hiperinflaciones, incumplimiento con sus acreedores, contratistas y proveedores, y todas las formas de defraudar al crédito público que se utilizaron, hoy la Argentina tendría una deuda pública interna y externa del orden de seis veces el ingreso nacional.

Y para que ustedes tengan una idea al respecto, diré que países con altos y persistentes déficit fiscales, como Italia, por ejemplo, que no ha echado mano ni a punciones ni a inflación, tiene hoy una deuda de 1,2 veces, es decir, 120 por ciento del ingreso nacional. Y eso que tiene enormes déficit fiscales, pero nunca de la magnitud y persistencia que tuvo durante muchas décadas la Argentina.

Entonces, hubo punciones, licuaciones, hiperinflación y no podrían haberse evitado, porque el abuso que se hizo del crédito interno, del crédito externo y de la emisión monetaria —precisamente por la magnitud de los déficit fiscales— es lo que nos ha llevado a que ahora no podamos recurrir ni al crédito público interno ni externo, ni a la emisión monetaria. Pero no podemos sentirnos nostálgicos porque no podemos emitir letras de Tesorería.

Sr. León. — ¿Me permite, señor ministro?

Sr. Ministro de Economía. — Sí, señor senador.

Sr. León. — El señor ministro mencionó a Italia, cuya economía es una de las que tienen mucha regulación; hay estatismo. Sin embargo, se transformó en quinta potencia mundial. Creemos que el Estado puede crear su función de custodiar algunos valores del Estado, pero no somos estatistas. Desde 1948, Italia funciona republicánicamente y creo que el mayor P.B.I. italiano lo produce el Estado.

Sr. Ministro de Economía. — Italia heredó del fascismo un sistema superregulado porque el sistema fascista, como el hitlerista, era de regulaciones totales, corporativas, etcétera, de la economía. Italia las fue desmontando. El Mercado Común Europeo y la participación de las naciones europeas en este mercado se transformaron en un formidable sistema de recursos, por lo menos dentro del ámbito de dicho mercado. Es cierto que no terminaron completamente de desregular y desestatizar y es cierto que tienen la política agropecuaria comunitaria que implica subsidios que son absurdos y que perjudican a la propia economía comunitaria, además de perjudicar a la economía mundial. Pero cuando uno compara la extensión de las regulaciones de los controles imposibles de llevar a la práctica que han sustraído al gobierno de los que nunca debieron haber sido abandonados, como son los impositivos, los del gasto público, la diferencia entre los países europeos y la Argentina es sideral. Por eso no perdemos el tiempo cuando avanzamos —y tenemos que seguir avanzando— en la búsqueda de buenas formas de regulación tributaria y re-

formas impositivas. Si nos equivocamos, tendremos que buscar nuevas reformas hasta tener un buen sistema impositivo y una buena administración tributaria.

Quiero decir a los señores senadores que ya se encuentra elaborado el presupuesto de 1991, con muchos meses de demora porque deberíamos haberlo presentado antes del 30 de septiembre, como establece nuestra Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero asumimos el compromiso de que el presupuesto para el año próximo será enviado dentro del período de sesiones ordinarias, como lo exigen las normas en vigencia. Me van a tener aquí todas las horas que sean necesarias para tener una discusión completa, relevante y presupuesta de la ley de leyes en materia económica.

Quiero decirles además que quizá como *counciller* no concurrí al Congreso todo lo que era necesario, aunque estuve cuando se enviaron las naves al Golfo, interpretando que era necesario hacerlo y que teníamos atribuciones. De todas maneras vine a informar a ambas cámaras. Luego, cuando se presentó el presupuesto de que entraríamos a dar apoyo logístico en condiciones de beligerancia a otras naciones enviamos el proyecto y fue discutido aquí. Ahora, en la semana que llevo como ministro de Economía, si se hiciera un cómputo de la cantidad de horas que un ministro de esta cartera ha dedicado a la discusión en el Congreso, creo que probablemente se encontrarán con el caso de mayor dedicación. Lo he hecho con mucho gusto...

Sr. Gass. — Está bien en el *ránking*. (Risas.)

Sr. Ministro de Economía. — Esto es lo que tenemos que hacer y agradezco a ustedes que han tenido la paciencia de escuchar mis aclaraciones y las del subsecretario de Finanzas Públicas y que hayan dedicado horas al análisis de estas leyes y aportado ideas, sugerencias y críticas que hemos escuchado aquí.

Quiero decirles también que, lamentablemente, muchas de las cosas que aparecen en los diarios como dichas por nosotros no se ajustan a la realidad. No estoy haciendo un cargo a los periodistas pero, ciertamente, a veces no nos explicaremos con precisión o algunos temas no son fáciles de interpretar.

Nunca hemos dicho que si no se aprobaba este paquete de leyes iba a producirse un estallido social. Lo que dijimos es que si todo esto no se aprobaba íbamos a tener que echar mano a impuestos peores a los que aquí estamos considerando como, por ejemplo, las retenciones agropecuarias o la emisión moneta-

ria, que hubiera provocado un nuevo golpe al salario real y por ende al bolsillo de las familias de los trabajadores.

Venimos a buscar la aprobación de esta reforma impositiva porque queremos que a los jubilados, a los docentes y a los servidores públicos se les pague, no con una moneda vil sino con una moneda que mantenga su valor hacia adelante lo más posible. Creemos sinceramente que en las circunstancias actuales endeudarnos interna o externamente o emitir dinero no es resolver el problema de quienes tienen legítimo derecho a que el Estado atienda sus urgencias y necesidades. Entonces, no hay otra alternativa que buscar la recaudación impositiva.

Todo esto va a producir efectos reactivadores y de crecimiento; esto no va a suceder por arte de magia. Cuando equilibremos el presupuesto comenzarán a ponerse de manifiesto los beneficios de muchas reformas que este gobierno y el anterior ya hicieron.

Es bueno decir que es mucho lo que se ha hecho; es mucho lo que se ha reducido el gasto público. El déficit del Estado y el de las empresas públicas estuvo durante muchos años en el orden del 32, 33 o 34 por ciento del producto bruto. Hoy estamos en el 25 por ciento gracias a reducciones que se hicieron durante el gobierno anterior y, especialmente, durante el actual gobierno.

Por supuesto que queda mucho por hacer, sobre todo en lo referido a gastar mejor para que no haya tanto deterioro del salario real y para que pueda haber mayores niveles de inversión en infraestructura económica y social.

De cualquier modo, no creo que la Argentina pueda bajar globalmente mucho más ese porcentaje que representa el gasto público sobre el producto bruto. Lo que sí podemos hacer es distribuirlo mejor y, sobre todo, financiarlo mejor.

En tal sentido, no somos escépticos porque no es utópico pensar que podemos llegar a obtener una recaudación impositiva equivalente al 25 por ciento del producto bruto. Países de menor envergadura de desarrollo que la Argentina, como es el caso de Chile, recogen más del 25 por ciento del producto bruto vía impuestos. Nosotros, en algunos años, hemos logrado recoger el 23 o el 24 por ciento. Por ello, es totalmente factible saltar del 17 o 18 por ciento actual a esos niveles que necesitamos para lograr el equilibrio de nuestro presupuesto.

En efecto, cuando logremos tal equilibrio vamos a ver realmente lo que significa una eco-

nomía popular de mercado que, además de la libertad en todos los mercados, será también popular pues permitirá la competencia y la transparencia en las relaciones económicas.

El gobierno está empeñado en eliminar las restricciones a la competencia, muchas de las cuales fueron creadas precisamente con la intención de promover alguna industria o región, pero luego se transformaron en mecanismos institucionales que han restringido la competencia, provocando que los argentinos paguemos muy caro lo que compramos en nuestro país mientras las empresas venden muy barato en el exterior lo que venden caro aquí.

Queremos desmontar toda esa estructura y ojalá podamos hacerlo, no por las resoluciones de la Subsecretaría de Industria y Comercio o por decretos del Poder Ejecutivo —aunque tenemos atribuciones delegadas por el Congreso— sino por medio de leyes de la Nación que aseguren que lo hagamos de manera permanente.

Ahora bien, si el Congreso de la Nación va a seguir pensando equivocadamente, como se pensó en años anteriores, que la reactivación y el crecimiento se lograrán con protecciones especiales a sectores y regiones, que significan restricción a la competencia, o con exenciones impositivas, que significan menor recaudación, o con subsidios, que significan mayor gasto público, lamentablemente debo decirles que el resultado va a ser el mismo que en el pasado; es decir, mayor estancamiento, mayor retroceso, mayor inflación.

Esto lo decimos con absoluta sinceridad. El presidente Menem ha hablado de una economía de mercados, pero ha dicho que quiere una economía popular de mercado. Para que sea popular tiene que ser capaz de hacer llegar a la gente bienes en gran abundancia, en mayor cantidad, con superior calidad y a los más bajos precios. Eso significa el aumento de los ingresos de las familias. A los que se ilusionan con dar protección, subsidios y exenciones impositivas para que los empresarios puedan vender más caro a los que seguimos viviendo en la Argentina, debo decirles que en ese caso —obviamente— nunca tendremos reactivación ni crecimiento.

Por eso nosotros estamos convencidos de que este paquete impositivo no constituye un parche porque equilibrando el presupuesto, como lo haremos, se pondrán de manifiesto todas las bondades de las muchas cosas que se han hecho durante este gobierno y también durante el gobierno anterior, enderezadas a la desregulación, a la reducción del gasto público, a concentrar los esfuerzos del gobierno en las activida-

dés realmente importantes, a desembarazarse de toda actividad empresarial estatal que pueda ser desempeñada mucho mejor por el sector privado. Eso no se hará con créditos fiscales, subsidios y dinero del sector público ni con riesgo asumido directamente por dicho sector, sino apelando a la inversión de riesgo genuina.

Quiero decir también que este paquete impositivo es lo más alejado que pueda imaginarse, dentro de la actual legislación argentina, de un paquete regresivo. Porque aquí pagan los que tienen activos y no los desposeídos. Con estos impuestos no pagan quienes no tienen, los asalariados, los que reciben remuneración de trabajo en relación de dependencia ni los consumidores, porque el aumento del IVA es insignificante.

Repito que pagan los que tienen activos, muchos de los cuales fueron sobrefacturados porque los regímenes de promoción permitían que con avales del Tesoro o con diferimiento fiscal sin indexación o con exenciones impositivas se pudieran financiar inversiones facturándolas hasta tres veces.

Ellos pagarán el 2 por ciento en concepto de impuesto a los activos. Pero los chacareros van a pagar muy poco. Porque una de las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados —y con la que nosotros estamos de acuerdo— consiste en aumentar el porcentaje de la reducción en la valuación de los activos agropecuarios.

Tengan los señores senadores la seguridad de que no están votando un paquete impositivo regresivo sino todo lo contrario. Porque no hay más regresividad que la evasión impositiva. Con este paquete las vías de evasión se van a cerrar mucho.

Quiero aclarar algunos aspectos. La mención del canciller acerca de la posibilidad de que este año nos valgamos del esquema del Plan Brady para terminar la renegociación de la deuda externa en absoluto es incompatible con mi expresión de que volvamos a renegociar un *stand by* o facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Al contrario; el hecho de que tengamos que renegociar un *stand-by* o facilidades extendidas es un paso en la dirección de que, si nos conviene y se dan las circunstancias, a lo mejor podamos echar mano de un marco como el Plan Brady que permitió a México, Costa Rica y Venezuela terminar buena parte de la renegociación de sus deudas externas. Esto también les permite gozar hoy de un marco de certidumbre más alto y de un

mayor acceso al mercado internacional de capitales, así como de más estabilidad y crecimiento que el de nuestro país actualmente.

Sr. León. — ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

Sr. Ministro de Economía. — Sí, señor senador.

Sr. León. — Quise expresar que tal como está nuestra economía no se dan las condiciones para el Plan Brady, tal cual lo exige el sector acreedor.

Sr. Ministro de Economía. — Estimamos que con las medidas que estamos aplicando será factible, si encontramos que resulta conveniente, valernos de este marco que en definitiva es el Plan Brady, que regula la negociación en la que el gobierno norteamericano —como lo hizo con México— ejerce cierta presión sobre los arreglos comerciales para que se concedan quitas a los países que presentan un buen panorama fiscal y un buen programa de desregulación y de apertura de sus economías.

Debo aclarar algunas dudas que han sido planteadas por los señores legisladores, como la que se refiere el artículo 19, párrafo 7.

La idea es que en lugar de esperar la recuperación de los créditos que el gobierno tiene por diferimientos fiscales al vencimiento, la cobranza que tiene que hacer la Dirección General Impositiva sea efectuada por la gran multiplicidad de entidades financieras del país, a través de una licitación transparente y abierta para efectuar el cobro de las citadas cuentas.

De esa manera, vamos a poder contar con recursos al valor presente de esas deudas y trasladar las cobranzas de esos créditos a quienes tienen más especialización en la materia, que son las entidades financieras.

Por supuesto, de la licitación van a poder participar entidades financieras públicas y privadas, y también algún particular. Pero la competencia en esta licitación transparente va a asegurar que ningún deudor se beneficie pagando un precio vil por ese crédito, pues surgirá un precio competitivo de mercado, y de paso tendremos un recurso adicional para el presupuesto.

Es la misma idea que queremos instrumentar para la recuperación de los créditos de los grandes grupos económicos con la banca oficial. Los países que organizan bien el funcionamiento de los mercados se pueden valer de la competencia y la transparencia de estos mecanismos, de modo que, por ejemplo, la cobranza de un crédito sea hecha por quien está mejor preparado para ello. En el caso de los grandes

grupos económicos, quienes están mejor preparados para hacerlo son los bancos privados, puesto que los oficiales sufren grandes presiones y la acción de *lobbies* que llevan a refinanciamientos y concesiones de quitas que nunca dan lugar a que se ejecuten las garantías y se cobren efectivamente los créditos.

Esto lo hacemos para tener más recursos en la banca oficial, con el objeto de que ésta pueda prestar dinero a la pequeña y mediana empresa, que sí necesita del auxilio de la banca oficial, que tiene que tener una actitud promocional, porque para eso fue creada.

Con respecto al agregado del artículo 27 que introdujo la Cámara de Diputados, debo decir que se trata de un proyecto de renovación por un período de un año más. Es una ley que estuvo en vigencia el año pasado. El Poder Ejecutivo había presentado como proyecto al Legislativo la extensión porque, lamentablemente, las situaciones de provincias que eran atendidas con estos impuestos especiales no han terminado de corregirse durante el período en que rigió dicha ley.

Este tema ya fue tratado por el Congreso y había recibido aprobación. Ahora se pide una extensión. Es cierto que es injusto para aquellas provincias que tuvieron una mejor administración fiscal y tributaria, porque las que tuvieron problemas específicos que provocaron algunas crisis reciben a través de esta ley un reparto adicional al de la coparticipación. De cualquier manera, ojalá sea el último año que tengamos que pedir una extensión de esta norma.

A partir de este año las provincias tendrán acceso a dos mecanismos —si se quiere— adicionales a los de la coparticipación. Uno va a ser el préstamo que con la colaboración de todos los ministros de Economía de los distintos gobiernos provinciales se ha negociado con el Banco Mundial por 400 millones de dólares, y que será distribuido en función de los programas de ayuda financiera e inversiones que va a presentar cada una de las provincias, programas que serán evaluados en el foro de los ministros de Economía...

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor ministro?

Sr. Ministro de Economía. — ¡Cómo no!

Sr. Rodríguez Saá. — De todas maneras, hay provincias que han tenido problemas posteriores a la sanción de esta ley, como ha sido el caso de la del Chubut, donde han resultado gravísimos. Lo mismo ha sucedido en Santa Cruz y otras provincias. Por el contrario, tam-

bién hay provincias que han mejorado muchísimo como es el caso de Córdoba, que no tiene esos problemas.

Por ello, considero que la norma es injusta y arbitraria y, si bien no es tema de discusión en este momento, estimo que debería establecerse cómo hacemos los argentinos para que las provincias sepan cuáles son los deberes que tienen y cuáles los premios y las sanciones.

Insisto: lo justo es que se llegue a saber cuáles son los deberes y cuáles los premios y las sanciones, porque de lo contrario parecería que hay que llevar a la provincia casi a la irregularidad o a la anormalidad para que se la asista. Esto es lo que torna injusta la situación y hace que todo lo que hablemos caiga en saco roto.

Sr. Ministro de Economía. — Tiene razón el señor senador por San Luis, pero yo estoy explicando un mecanismo que podemos utilizar este año para tener en cuenta, desde el Poder Ejecutivo y con la participación de todas las provincias, la inquietud del señor senador.

El mecanismo es que hay 400 millones de dólares que son susceptibles de rápido desembolso en función de programas de ayuda financiera e inversiones que deben presentar las provincias.

Por otro lado, en pocas semanas vamos a determinar una compensación de deudas entre Nación y provincias, que va a dejar un saldo probablemente a favor de ellas. El pago de esas deudas por parte de la Nación pensamos hacerlo en función de un mecanismo de premios y castigos que va a ser aplicado por la Nación juntamente con todas las provincias, que evaluarán estos programas de ayuda financiera y cifras que cada una presente, controlarán el cumplimiento de las metas programáticas y la forma en que se reparten los fondos, tanto los del Banco Mundial como los de la deuda que tiene la Nación con las provincias luego de las compensaciones.

Además, tendremos que tener en cuenta que algunas provincias ya reciben la ayuda especial a través del artículo que ha sido incluido en esta ley. Entonces, teniendo esto en cuenta utilizaremos los otros fondos para el caso de las provincias que pueden haber afrontado distintas situaciones por razones justificadas. Así podremos compensar a aquellas que han hecho las cosas bien y que en realidad merecerían un premio y no sufrir una discriminación o castigo.

Sr. Marín. — ¿Me permite una interrupción el señor ministro, con la venia de la Presidencia?

Sr. Ministro de Economía. — Cómo no.

Sr. Marín. — Creo que es injusto que por ley se haga una determinación para todo un año. Considero que lo que usted manifiesta sería correcto si desde el Ministerio de Economía se estableciera si las provincias van arreglando su situación o no, y en consecuencia dar la ayuda.

Otorgar el beneficio sin tener en cuenta la situación y la conducta de las provincias creo que es una discriminación que por lo menos no corresponde hacer por ley. Se trata de una discriminación que viene desde hace tiempo. Hoy resulta un poco absurdo que algunas provincias, tomadas no sabemos con qué motivos, reciban este beneficio. Digo esto porque de alguna manera veo que la inclusión tiene más matiz político que económico.

Entonces, repito, esto no es justo para las provincias argentinas.

Sr. Romero. — ¿Me permite, una interrupción, señor ministro?

Sr. Ministro de Economía. — Sí, señor senador.

Sr. Romero. — Señor presidente, señores senadores: creo que esta no es una discriminación antojadiza. La inclusión de las provincias en esta lista partió de un momento de crisis estructural que ellas padecieron y que no fue superada hasta el momento. Pero la Cámara de Diputados ha atenuado este efecto distorsionante que podía tener la inclusión de algunas provincias y la exclusión de otras. Lo ha hecho a través de la modificación del inciso b) de la mencionada ley, que anteriormente distribuía el 36 por ciento en el fondo de desarrollo regional. Si se aprueba el texto del proyecto tal cual está, ese porcentaje será distribuido entre todas las demás provincias, excluidas las de la lista original.

Sr. Ministro de Economía. — Creo que no me exprese claramente.

Para tranquilidad de los señores senadores que con razón interpretan que el mantenimiento de esta distribución durante todo el año podría ser una injusticia, quiero decir que si el Poder Ejecutivo adapta el ritmo de devolución de lo que le va a reconocer como deuda a las provincias a las verdaderas demandas que se justifiquen, con un criterio de equidad, tomando en cuenta lo que algunas de ellas ya reciben por este sistema de repartición, tendrá un margen de maniobra para evitar situaciones injustas.

Además, estoy asegurando que receptamos la inquietud y nos comprometemos a que se tengan en cuenta en otros mecanismos de remisión de fondos a las provincias el hecho de que el conjunto que recibe este beneficio especial lo

trataremos de compensar atenuando la inequidad que pudiera surgir en la distribución entre todas las provincias.

Habría quizá muchos otros temas para mencionar, pero no quiero terminar mi exposición sin reiterarles, en nombre del Poder Ejecutivo, del señor presidente Menem y de todo su gabinete, el agradecimiento por la profundidad del análisis, por la velocidad con que se ha considerado este asunto y por todas las ideas, sugerencias, críticas y observaciones que hemos escuchado en este recinto y que serán tenidas muy en cuenta por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Solicito que se inserte en el Diario de Sesiones un trabajo complementario de mi exposición.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia ¹.

La Presidencia informa que luego del comienzo de esta sesión ingresó el dictamen de comisión en mayoría que aconseja la aprobación del proyecto de ley tal como fuera sancionado oportunamente por la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Romero. — Solicito que se vote por títulos si el cuerpo lo acepta.

Sr. Cass. — Acepto la propuesta formulada por el señor senador por Salta.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Son las 21 y 2.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Ver el Apéndice.